

**SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**DEMANDA DE ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.**

2022 JUL -1 PM 3: 35

**PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.**

**OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA**

ASUNTO: ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

**MINISTRAS Y MINISTROS INTEGRANTES
DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, en mi carácter de titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, personalidad que acredito en términos de la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del referido instituto; de siete de junio de dos mil veintidós mediante la cual, se hace constar la integración de la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación expedida por la referida Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del instituto en cuestión; de siete de junio de dos mil veintidós, por la que se acredita que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra registrado como Partido Político Nacional y, el instrumento notarial número 32,848 de 19 de septiembre de 2019, pasado ante la fe del licenciado Sergio Rea Field, Titular de la Notaría 241, actuando como asociado y a cargo de la Notaría 187, ambas de la Ciudad de México, (Anexo Uno), con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, inciso f) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución General), así como en lo previsto por los artículos 59, 60, 61 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria), en tiempo y forma, dentro del plazo previsto en los numerales 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria en la materia, comparezco respetuosamente ante Ustedes para promover **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en contra del **DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408.**

SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV.BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO", publicado en la página de internet https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio de 2022, con el número de No. 864 Bis, en virtud de ser contrario a diversas disposiciones de la Ley Fundamental de la República.

Me permito señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos las oficinas de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, [REDACTED] y señalándose como delegados con las facultades a que se refiere la parte final del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria a las y los CC. [REDACTED] y autorizándose igualmente, en términos de lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 4 de la propia Ley Reglamentaria a las y los [REDACTED] para oír notificaciones, imponerse de autos -incluidos por medios electrónicos o digitales-, recibir copias de traslado, documentos, valores y todo aquello que derivado del presente asunto deba ser entregado al Partido Revolucionario Institucional en carácter de promovente.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Ahora bien, con la personalidad debidamente acreditada y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, inciso d), del artículo 105 de la Constitución Federal, así como en los artículos 59, 60, 61 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos respetuosamente ante esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para promover **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** con el fin de plantear la contradicción entre diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de junio de 2022.

ELEMENTOS DE LA DEMANDA

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se manifiesta lo siguiente:

I. NOMBRES Y FIRMA DEL PROMOVENTE

Se advierten en la parte final de la presente demanda, correspondiente a la firma.

II. ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS

La norma impugnada, consistente en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de junio de 2022, que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y promulgado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

a. Congreso de la Ciudad de México, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 7, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 15960.

b. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con domicilio en Plaza de la Constitución #2, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06066.

III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAME Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO

Se reclama la invalidez del "Decreto por el que se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del art. 60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos n) y ñ) de la fracción II, así como la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273; el primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. se adiciona la fracción x bis, un párrafo y los incisos a), b), c), d), e) y f) al artículo 60; se adiciona el artículo 60 bis, los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) a la fracción XII del artículo 63; la fracción IV bis al artículo 67; los incisos o), p) y q) a la fracción II del artículo 83; las fracciones XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER al artículo 86; las fracciones XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER al artículo 88; las fracciones XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES al artículo 94; las fracciones xv bis con los incisos a) y b), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES del artículo 95; se agregan

los incisos a) y b) del artículo 103. se deroga el inciso c) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones VII Y IX del artículo 59; se derogan las fracciones III Y X del artículo 60; el artículo 65; el artículo 68; el inciso n) de la fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V Y VI, así como el último párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México”, y segundo transitorio, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de junio de 2022.”

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES VIOLADOS

Se estima que el acto impugnado es contrario a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º, 14, 16, 35, 41, 49, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1, 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 31, 33 y 36 párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 1º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2º, 57, 58, 59 y 60 de la Constitución de la Ciudad de México; 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 36 de la de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México.

Principios fundamentales que se estiman violentados

- a. Violación al Proceso Legislativo
- b. Principio de división de poderes
- c. Principio de autonomía
- d. Principio pro-persona
- e. Principio de seguridad jurídica
- f. Principio de promoción, protección y respeto a los derechos humanos
- g. Derecho a la protección de los pueblos originarios
- h. Igualdad de género
- i. Principio de legalidad
- j. Derecho a la buena administración

V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente demanda de acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 de la Ley Reglamentaria en la materia y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la norma general precisada en el presente ocurso.

A. OPORTUNIDAD

Acorde al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal¹ que dispone que el plazo para promover una acción

¹ “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el

de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo todos los días como hábiles cuando se trate de materia electoral.

Para el caso, la norma cuya declaración de invalidez que se solicita, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dos de junio de 2022²; de ahí que el plazo relativo para instar el presente medio de control transcurrió del tres de junio al dos de julio del mismo año. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 60, como el último día del plazo es inhábil —sábado 2 de julio— la demanda se puede presentar hasta el lunes 4, por ser el primer día hábil siguiente.

De ahí que resulte oportuna la presentación de este medio de defensa.

B. LEGITIMACIÓN DEL PROMOVENTE

El artículo 105, fracción II, de la Constitución, tanto expresa como limitativamente, menciona a los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, y señala que son:

- a. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados.
- b. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Senadores.
- c. El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno.
- d. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.
- e. Se deroga.
- f. **Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro.**
- g. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos.
- h. El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución
- i. El Fiscal General de la República.

El inciso f) antes citado, se encuentra colmado, porque la presente Acción de Inconstitucionalidad se promueve en mi carácter de titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, personalidad que acredito en términos de la certificación expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del

correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.”

² https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetitas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf

referido instituto; de siete de junio de dos mil veintidós mediante la cual, se hace constar la integración de la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación expedida por la referida Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección del Secretariado del instituto en cuestión; de siete de junio de dos mil veintidós, por la que se acredita que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra registrado como Partido Político Nacional y, el instrumento notarial número 32,848 de 19 de septiembre de 2019, pasado ante la fe del licenciado Sergio Rea Field, Titular de la Notaría 241, actuando como asociado y a cargo de la Notaría 187, ambas de la Ciudad de México, documentales que se acompañan a la presente demanda.

Debe precisarse que la presente acción de inconstitucionalidad se plantea en contra del Decreto por el que se reforman, se adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de junio de 2022.

Por tales motivos, se insiste en que se cumple con los requisitos de legitimación para promover este medio de control constitucional.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer, sustanciar y resolver la presente Acción de Inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 2 de junio de 2022, en la vigésima primera época, No. 864Bis a través de la cual se publicaron las reformas y derogaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México dictadas por el Congreso de la Ciudad de México del cual se demanda su invalidez dado que se trata de una reforma prohibida por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina la condición de no reformabilidad de los artículos a los que se refiere la reforma que por este medio se reclama.

Esto en virtud de que la pretendida reforma interviene en la vida interna de los órganos autónomos que constitucionalmente son reconocidos como lo es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dado que la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México la cual deroga a las Comisiones de Fiscalización, Vinculación con Organismos Externos e Igualdad de Género y Derechos Humanos.

También elimina a la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, Formación y Desarrollo, la de Formación y Desarrollo, así como la de Vinculación con Organismos Externos.

Igual de grave es la reforma en donde deroga la facultad del Consejo General para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logros de los fines del Instituto, transgrediendo con ello el derecho político electoral del ejercicio del cargo dado que imposibilita a las y los consejeros integrantes del Consejo General el cumplimiento de sus atribuciones encomendadas constitucional y legalmente.

En ese sentido, la presente vía es procedente, porque la actividad del poder reformador violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental.

Lo anterior es así porque el Congreso en la Ciudad de México aprobó reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la entidad, las cuales fueron publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México, el 2 de junio del presente año, al derogar y reformar disposiciones que quitan las facultades del Consejo General del Instituto como órgano autónomo con la capacidad y naturaleza de auto organizarse, pues las mismas se realizan de tal forma que infieren en la conformación y desaparición de los órganos internos del instituto electoral que le permiten el desarrollo de las tareas que le han sido constitucionalmente encomendadas con la finalidad de ejercer sus funciones bajo los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, seguridad jurídica que como órgano autónomo está obligado a realizar, reformas que se traducen en violaciones a los artículos 1, 16, 41, 116 base IV incisos b) y c) y 133 de nuestra Carta Magna.

Dado que las reformas que se propone son de carácter electoral, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia del Pleno de esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se menciona, respecto al control constitucional:

“LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.”

Como lo señala el criterio previamente transcrito, la inconstitucionalidad de las leyes electorales solamente podrá ser decretada por el máximo órgano jurisdiccional del país por lo que la reforma que por medio de la presente acción de inconstitucional se reprocha se refiere al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México, la cual es contraria a las bases constitucionales lo que afecta a la naturaleza jurídica del Instituto Electoral de la Ciudad de México dado que tiene la característica de un organismo público y autónomo como lo plasmo el poder constituyente en la Carta Magna, la cual se ve afectada con las reformas realizadas.

Al existir afectación al organismo público autónomo electoral en la Ciudad de México, se ven mermadas las atribuciones que tiene encomendadas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual dispone en el artículo 41 que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizaran mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases que la misma determina en la que los partidos políticos promueven la participación del pueblo en la vida democrática, fomentan el principio de paridad de género, contribuyen a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Además, señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales en los términos que establezca la Constitución.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga legitimidad a los Partidos Políticos Nacionales, a través de sus dirigentes nacionales para acudir en Acción de Inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del Decreto que reforma y deroga diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, porque son contrarios a ella, y porque tiene interés en que las actuaciones de los organismos públicos electorales se les respete la autonomía de que gozan dado que de ella depende el ejercicio óptimo y profesional, independencia y funcionalidad que se requiere para realizar los trabajos que le son encomendados.

Lo expresado encuentra respaldo en la Tesis Jurisprudencial P./J. 7/2007, **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.** La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral;

y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. **Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral;** y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El Procurador General de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

Con la personalidad que ostentamos acudimos para hacer notar que, el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio del presente año, en la Vigésima primera época, No- 864 Bis; en las páginas 4 a la 13 de la mencionada publicación por medio de la cual reforma diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ciudad de México, la cual violenta la Supremacía Constitucional dado que el poder constituido en la Ciudad de México no toma en cuenta las bases y parámetros contenidas en la norma Constitucional Federal fragmentando el pacto federal y consecuentemente la existencia del verdadero estado democrático en el país.

En este sentido, bien sabido que la Acción de Inconstitucionalidad, es el medio de defensa legal idóneo y de control constitucional que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte; bajo estas circunstancias, el sistema mexicano de control de constitucionalidad en la materia electoral recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien realiza tal control mediante las Acciones de Inconstitucionalidad que interponen los partidos políticos nacionales y que en su mayoría versan sobre materia electoral.

Conforme a lo anterior, acorde a lo establecido en lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Carta Magna y 62, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho humano irrenunciable de los partidos políticos nacionales, con registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral a interponer los escritos de Acción Inconstitucionalidad contra en contra de leyes electorales federales o locales que se presume contrarias a las norma constitucional, como lo es el asunto que nos ocupa.

Con base en estas premisas, atendiendo a lo preceptuado en la normatividad invocada con anterioridad, el instituto político que se representa cuenta con la legitimación activa, personalidad e interés jurídico para interponer la presente Acción de Inconstitucionalidad, para impugnar el contenido del **“DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59;**

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, instrumento jurídico que, a todas luces, no es acorde a lo preceptuado en tanto por las normas constitucionales federales y locales.

Esto es así, en virtud de que, el decreto que se demanda su invalidez, a través del presente medio de defensa legal, atenta directamente con lo preceptuado en los artículos 14; 41, Base V, apartado C; 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con el artículo 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, emanado de dichas disposiciones constitucionales, precepto normativo que, determina que dicho Código Comicial, es un instrumento jurídico normativo que contienen disposiciones de orden público y de observancia general, además de que tiene por objeto establecer las normas aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, las cuales garantizan que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible en la Ciudad de México, privilegiando la tutela de:

- ❖ La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y de las personas originarias, así como de los pueblos, barrios y las comunidades indígenas todos ellos residentes en la Ciudad de México.
- ❖ Las prerrogativas y obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, Locales, candidaturas de los partidos y candidaturas sin partido (independientes).
- ❖ La constitución, derechos y obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales.
- ❖ La sustanciación de las elecciones para la titularidad de la Jefatura de Gobierno, de Diputaciones al Congreso, Alcaldías y Concejales, todos los cargos de la Ciudad de México.
- ❖ Las bases del régimen sancionador electoral y el régimen sancionador en materia de participación ciudadana.
- ❖ Los procedimientos de investigación y fiscalización electoral, en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral delegue dicha facultad.
- ❖ Acciones para el fortalecimiento de la educación cívica y formación de ciudadanía.
- ❖ La estructura y atribuciones del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, ambos de la Ciudad de México, entre otras.

Con base en esta cadena argumentativa, al analizar el contenido del Decreto que se impugna por considerarlo inconstitucional, es dable considerar que de manera flagrante se trastocar directamente las premisas reguladas y contempladas en el artículo 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, anteriormente enunciadas y emanadas de lo preceptuado en los 14; 41, Base V, apartado C; 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ante la apreciación del buen derecho, lo que lo hace un decreto de reforma electoral, sujeto a su revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las Acciones de Inconstitucionalidad que lleguen a presentar los partidos políticos nacionales, como lo es el medio de defensa legal que se representa.

Conforme a lo anterior, no se debe perder de vista que, el Decreto que se impugna a través de la presente Acción de Inconstitucionalidad, si bien, se realiza con el pretexto de una austeridad, lo cierto es que, sin una planeación adecuada, elimina áreas técnicas conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, del Instituto Electoral de la Ciudad de México; lo que trae como consecuencia una afectación directa a la autonomía propia en su funcionamiento y/o autoorganización del dicho órgano electoral, conducta con la que se trastoca de manera directa la función y principios rectores de la norma electoral.

Bajo estas circunstancias, al realizar una interpretación sistemática y funcional al Decreto del que se solicita su invalidez, es dable concluir que a todas luces es inconstitucional, en virtud de que, todas y cada uno de las disposiciones jurídico

normativas contenidas en el cúmulo de los artículos que componen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, debe de verse y catalogarse como un todo, dado que, con este conjunto de normas electorales que rigen la conducta y la vida interna e institucional el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues, con ellas se garantiza que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible, premisas que, junto con los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e interculturalidad rigen la función electoral, en el entendido de que, para que la autoridad electoral cumpla cabalmente con ese fin, así como para el debido cumplimiento de sus funciones, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento sus obligaciones y adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, por lo que, cualquier cambio en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México como lo es la que se indica en el Decreto que se impugna y por mínima que sea, afecta en un todo la función electoral, tutelada por el conjunto de normas contenidas en el código comicial antes invocado.

Bajo esta mirada, en lo particular, con cualquier reforma parcial o total que se efectuó a algún artículo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como lo es el Decreto que se solicita su invalidez, de manera directa trastoca los principios y premisas invocados en el párrafo inmediato anterior, que rigen la función electoral, nace el derecho a impugnar a través de la Acción de Inconstitucionalidad dicha reforma electoral, acorde a lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Carta Magna y 62, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creándose la legítima activa, la personalidad y el interés jurídico del instituto político que se representa para interponer el presente medio de defensa legal.

VI. CUESTIÓN PREVIA

Antes de desarrollar cada uno de los conceptos de invalidez en el presente apartado se realizarán diversas consideraciones con el objetivo de fijar la Litis del asunto, a partir de cuáles son los derechos que se encuentran en juego y el impacto que el contenido del Decreto impugnado tiene en un Estado democrático.

A. ORGANISMOS ELECTORALES

La administración electoral es una actividad compleja que requiere de habilidades y técnicas especiales, pues debe brindar certeza de que quienes ejercen el poder son las personas que efectivamente eligió la ciudadanía. A nivel internacional, la administración electoral es desarrollada por una gran variedad de organismos, que llevan a cabo su función a partir de estándares y magnitudes diversas; existiendo un amplio rango de denominaciones para identificarlos. Sin embargo, a pesar de tal diversidad, los podemos colegiar dentro del término organismo electoral, el cual comprende a todo órgano responsable de la administración electoral, independientemente de cuál sea el marco institucional existente.

Así un organismo electoral es una *“organización o institución que ha sido creada con el propósito expreso y la responsabilidad legal de administrar uno o más de los elementos que son esenciales para la conducción de las elecciones, y de los*

*instrumentos de democracia directa*³. Un organismo electoral puede ser una institución independiente, o una unidad administrativa dentro de una institución más grande, que incluso puede tener a su cargo tareas no electorales; Aunque existen elementos esenciales para todos, como la determinación de quién puede contender en una elección; quien es elegible para emitir su voto; la conducción de la votación; el conteo, y los resultados⁴.

A nivel internacional se ha distinguido un modelo de administración electoral a partir de la dependencia con algún otro poder, partiendo del elemento común de que el reconocimiento de las elecciones es una función del estado⁵. Así se divide en los modelos siguientes:

1. **Modelo independiente:** El modelo independiente de organismo electoral se advierte en países donde las elecciones son organizadas y administradas por un órgano que es institucionalmente independiente y autónomo de la rama ejecutiva del gobierno y que administra su propio presupuesto. El organismo no depende ni brinda cuentas a un ministerio o departamento del gobierno. *"Sus órganos tienen garantizados niveles de autonomía técnica, organizativa, administrativa, financiera y de decisión para el adecuado ejercicio de su función. (...) En su composición participan miembros que no forman parte del gobierno y que se caracterizan por su imparcialidad y profesionalismo (...) Este modelo está vigente, entre otros países, en Canadá, Costa Rica, Sudáfrica, India y México."*⁶

Para poder afirmar que un organismo electoral se encuentra dentro del modelo independiente debe tener las siguientes características:

- a. Es institucionalmente independiente de la rama ejecutiva del gobierno.
 - b. Ejerce completa responsabilidad sobre su operación.
 - c. Tiene que cumplir con ciertas obligaciones de gobernabilidad.
 - d. Tiene atribuciones para tomar decisiones de manera independiente, dentro del marco legal.
 - e. Está integrado por miembros que no pueden pertenecer al poder ejecutivo.
 - f. Sus miembros tienen la seguridad de permanencia en el cargo.
 - g. Cuenta con y administra su propio presupuesto de forma independiente al control gubernamental ordinario.
 - h. Tiene autonomía para determinar sus necesidades de personal, sus reglas y sus políticas.
2. **Modelo gubernamental:** en este modelo las elecciones son organizadas y administradas por una rama ejecutiva del gobierno a través de un ministerio y/o a través de autoridades locales. En general no cuentan con órgano colectivo de toma de decisión. Su presupuesto se ubica dentro del asignado al ministerio y/o a las autoridades locales.
 3. **Modelo Mixto:** el modelo mixto cuenta con una doble estructura; por una parte, tiene un componente de monitoreo o supervisión que es independiente del poder ejecutivo del gobierno, y un componente de instrumentación establecido en un

³ <https://aceproject.org/ace-es/topics/em/ema/ema01>

⁴ Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, 2006.

⁵ Astudillo, César. "El modelo de organización electoral". Derecho electoral en el Federalismo mexicano. Colección UNAM-INEHRM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5660/11.pdf>

⁶ Astudillo, César. "El modelo de organización electoral". Derecho electoral en el Federalismo mexicano. Colección UNAM-INEHRM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5660/11.pdf>

gobierno local. Las elecciones son organizadas por el segundo componente y supervisadas por el primero del componente independiente.

Adicionalmente a la división a partir de la dependencia con algún otro poder, las responsabilidades electorales se pueden dividir entre organismos de distintos niveles. Esto es, puede haber organismos electorales nacionales, estatales y/o regionales. Los organismos también pueden ser permanentes o temporales, o pueden estar centralizados o descentralizados a distintos niveles. Cada país ha establecido su propia estructura y modalidad.

Por otro lado, resulta oportuno abundar en las características de los órganos autónomos electorales —característicos del modelo independiente—. Al respecto, la experiencia comparada establece que la autonomía de los organismos electorales constituye una verdadera garantía democrática en tanto los perfila como instancias imparciales y, en ese tanto, capaces de propiciar comicios justos, libres y transparentes y, por ende, de legitimar el cambio gubernamental. En la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales dicha autonomía, impide la intervención del Ejecutivo y el Legislativo.

Así, la autonomía le otorga a los organismos electorales las siguientes ventajas:

- Independencia administrativa: se refiere a la capacidad para desarrollar su función sin subordinación jerárquica respecto de otra instancia administrativa, lo que necesariamente incluye la irrecurribilidad de sus decisiones y la potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y servicio.
- Independencia política: a partir de ella puede conducirse sin resultar vinculados por las directrices emanadas de otros órganos públicos.
- Independencia normativa: se le otorga capacidad para reglamentar las leyes electorales.
- Independencia presupuestaria: se configura al otorgar al organismo la posibilidad de elaborar su propio presupuesto.

Finalmente, es importante destacar que la gran mayoría de los países de América Latina han puesto un gran énfasis en organismos independientes, dotados de autonomía, y separándolos de la influencia de los ejecutivos y legislativos, así como a través de su constitucionalización, pues dichas características han mostrado ser indispensables para el fortalecimiento democrático.⁷

B. ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN MÉXICO

En primer lugar, conviene precisar que los órganos autónomos, son aquellos órganos constitucionales de naturaleza técnica, que no están adscritos a poder alguno y tienen por objeto controlar o equilibrar a los poderes tradicionales.⁸

Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha señalado, que surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder a partir de la evolución de la teoría tradicional de la división de poderes. Así, constituyen órganos que permiten una distribución de funciones o competencias, que hace más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

⁷ Jaramillo, Juan (2007). "Los órganos electorales supremos". Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA.

⁸ Cárdenas Gracia, Jaime *et al*, *Estudios Jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 23.

Los órganos autónomos se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.

Lo anterior quedó plasmado en las tesis de jurisprudencias de rubro y texto siguientes:

“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad⁹.”

“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto

⁹ Pleno, P.J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647. Jurisprudencia

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad¹⁰.”

Así los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que ningún poder público puede incidir de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala del México Tribunal del País de rubro y texto siguientes:

“GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.”

C. PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

La historia de los organismos electorales en México se ha encontrado subsumida en una constante lucha para eliminar la tensión existente entre la autonomía y la subordinación de estos al poder político, lo que ha implicado el paso de un modelo

¹⁰ Pleno, **Novena Época. Tesis:** P./J. 12/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871. Jurisprudencia

gubernamental a un modelo independiente en el ejercicio de realizar elecciones. Así, ha sido un proceso progresivo de autonomía que comenzó desde 1977.

Hasta el año de 1990, la organización de las elecciones era una función del poder ejecutivo y fue con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), que se construye un organismo electoral con la capacidad de realizar elecciones federales de manera imparcial con base en los principios de certeza, transparencia y legalidad. Sin embargo, es importante destacar que dicha institución era un organismo mixto, pues había intervención de la Secretario de Gobernación, en su calidad de presidente del Consejo General.

Con la reforma electoral de 1994 se avanzó en la misma dirección, pues se dieron significativos pasos a favor de una mayor autonomía del IFE, al establecerse en el artículo 41 constitucional: *"la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios"*.

Finalmente, en 1996 se complementaron las reformas que llevaron a un modelo independiente, al otorgarse autonomía total al IFE e independencia del Poder Ejecutivo. Además, en cuanto a la función electoral en las entidades, se reconoció la existencia de autoridades electorales locales con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Como se advierte del breve hilo histórico precisado, la construcción de la autoridad electoral administrativa en México tuvo una clara intención de encomendar la organización electoral a órganos del Estado autónomos e independientes del poder político. Desde entonces, las reformas constitucionales en la materia han tenido por objeto la consolidación de un sistema electoral cimentado en los pilares de la autonomía institucional para garantizar la plena legalidad, independencia, imparcialidad y seguridad de los procesos.

Tan es así que, por lo que respecta a la función electoral y su naturaleza autónoma en México, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado. Lo anterior quedó plasmado en la tesis de rubro y texto siguientes:

"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera

que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.”¹¹

Ara bien, la reforma electoral de 2014 tuvo dentro de sus principales objetivos transformar las instituciones y las reglas electorales que regían los procesos democráticos en México para responder a la realidad que vivía el país, a partir, entre otros, del fortalecimiento de la autoridad electoral a nivel federal y del establecimiento de una nueva coordinación entre ésta y los organismos locales. Se buscó modernizar el sistema electoral para incrementar la calidad con la que se organizaban los comicios federales y locales, así como para garantizar los principios rectores que se debían observar en todos los procesos en territorio nacional, los cuales a saber son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad.

Derivado de la firma del “Pacto por México” y durante el proceso de la reforma Constitucional a estudio, se analizó la desaparición de los institutos electorales locales, pues había una gran divergencia para la organización de los procesos estatales y, a su vez, —se consideraba— existía una captura de los institutos electorales locales por parte de los gobiernos estatales y sus respectivos congresos locales. Por citar un ejemplo, en la iniciativa presentada por la entonces Senadora Layda Elena Sansores San Román, el 4 de noviembre de 2013, se planteó, ante la permanente intervención de los gobernadores de los estados en los órganos administrativos y jurisdiccionales estatales para privilegiar a los candidatos de su interés, la creación de un nuevo órgano electoral, que sustituyera al IFE —Instituto Nacional Electoral— como órgano responsable de organizar las elecciones federales y locales. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción:

“(…) Ciertamente, tal como sostiene Giovanni Sartori, la sociedad puede ser ampliamente modelada por la política, cuando falten garantías de los derechos fundamentales. Hoy nuestra sociedad exige no solo ser modelada, sino también ser transformada. Movimiento Ciudadano da un primer paso en la promoción de dicha transformación al presentar ante esta Honorable Asamblea una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impulsen nivel institucional el cambio. Al respecto, proponemos, por un lado, la creación de un

¹¹ Pleno, *Novena Época*, Tesis: P.J.J. 144/2005. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 111.

nuevo órgano electoral autónomo, que sustituya al IFE y, por otro lado, la reorganización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación se exponen, detalladamente, los elementos que integran esta iniciativa.

Ante la permanente intervención de los gobernadores de los estados en los órganos administrativos y jurisdiccionales estatales para privilegiar a los candidatos de su interés, se hace necesario el establecimiento de una institución encargada de organizar, supervisar y validar las elecciones en el ámbito nacional, para evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos en todos los órdenes de gobierno, cuyo costo lacera significativamente la economía de nuestro país.

Las atribuciones exclusivas que actualmente detenta el Instituto Federal Electoral, como administrar los tiempos de Estado en radio y televisión, elaborar el padrón electoral y la lista nominal y expedir la credencial para votar, son un claro parámetro para evaluar la factibilidad de tener una autoridad única en materia administrativa electoral. Esta propuesta pugna por un nuevo modelo jurídico orientado a otorgar certidumbre y credibilidad en todos los procesos electorales del país y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Así, este nuevo Instituto se constituiría como la instancia encargada de organizar las elecciones federales y locales, lo que robustecerá los principios constitucionales de la democracia, al realizar también la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados, así como de las autoridades municipales, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. (...)”

Otro ejemplo fue lo señalado, en la iniciativa de reforma presentada el 24 de septiembre de 2013, por el Partido Acción Nacional, en cuanto a que “muchos gobernadores han colonizado las instituciones electorales —a partir del control que la mayoría tiene de su congreso local, responsable del nombramiento— y han explotado recursos del Estado con fines partidistas para garantizar el triunfo de su partido” (...) “con el aval de los organismos estatales encargados del desarrollo de las contiendas electorales”.¹²

La reforma electoral 2014 estuvo integrada por diversas iniciativas de reforma. Así a partir de un puntual e intenso análisis al interior del Congreso, en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se estableció que a fin de fortalecer el sistema electoral mexicano para honrar los principios que deben prevalecer en los procesos electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, era necesario proponer reformas constitucionales que fortalecieran a las autoridades electorales en su desempeño, para que no hubiera resquicios de subordinación a algún Poder a partir de una nueva conformación e interacción entre los organismos de administración electoral.

De manera específica por lo que hace al tema, se sostuvo lo siguiente:

“(...) En lo que concierne al rubro de reforma electoral, analizados los argumentos contenidos en las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas que se dictaminan, estas Comisiones Unidas estimamos oportuno realizar cambios de

¹² https://www.te.gob.mx/normativa_fiscalizacion/media/files/e2e2ac7665d3485.pdf

fondo con el propósito de fortalecer el sistema electoral mexicano para honrar los principios que deben prevalecer en los procesos electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Las reformas constitucionales que se proponen tienden a fortalecer a las autoridades electorales en su desempeño, para que no haya resquicios de subordinación a algún Poder.

- **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y ÓRGANOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.**

No cabe duda, que desde la creación del Instituto Federal Electoral contamos con elecciones más transparentes. El papel que este órgano ha jugado en la consolidación de nuestra democracia ha sido crucial, al dotarse a los procesos electorales de condiciones de legalidad, equidad, certeza y transparencia.

Estas Comisiones Dictaminadoras estimamos necesario realizar un esbozo doctrinal sobre este tema, por lo que consideramos pertinente hacer un análisis de los diversos tipos de organismos electorales que nos presentan las experiencias nacionales.

En México nos encontramos con dos organismos autónomos investidos con funciones electorales. Así, por una parte la administración de las elecciones ha sido confiada al Instituto Federal Electoral, mientras que todo lo relacionado con la tarea de impartir justicia en materia electoral ha sido confiado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, la naturaleza jurídica del Instituto Federal Electoral, la encontramos en el artículo 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

“Artículo 41 (...)

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un **organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios**, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene, la ley. En ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

(...)”

Resulta útil definir lo que es un organismo electoral (OE): son instituciones dedicadas a la gestión y vigilancia de los procesos electorales, y toman parte también en las controversias electorales y postelectorales que se puedan presentar entre los principales actores de las elecciones (partidos y candidatos). Tres funciones llevan a cabo los organismos electorales, de forma unificada –en un sólo órgano– o compartida –con otros órganos, independientes o de otros poderes–; éstas son: i) funciones de administración electoral: actividades relacionadas con la organización de los procesos electorales y específicamente con la recepción y conteo de votos; ii) funciones de control: relativas a la existencia, organización y actividades de los partidos políticos, así como de asociaciones que tengan injerencia en las elecciones; y iii) funciones de justicia o contencioso electoral.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional por sus siglas en inglés), señala que hay tres grandes modelos o tipos de organismos electorales: modelo independiente; modelo gubernamental y modelo mixto.

Al hacer referencia a los organismos electorales independientes, señala que existen en algunos países donde las elecciones son conducidas por un organismo institucionalmente independiente y autónomo de la rama ejecutiva del gobierno, que cuenta y administra su propio presupuesto. Este tipo de institución no es responsable de rendir cuentas a un ministerio o departamento de gobierno, pero puede ser responsable de rendir cuentas ante el Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Jefe de Estado.

En cuanto a los organismos electorales de modelo gubernamental, existen en aquellos países donde las elecciones son administradas y organizadas por la rama ejecutiva del gobierno, a través de alguno de sus ministerios.

Los organismos electorales de modelo mixto, tienen una estructura dual, con un componente encargado de funciones de dirección, vigilancia o supervisión, que es independiente de la rama ejecutiva del gobierno y un componente ejecutivo u operativo ubicado dentro de un ministerio o gobierno local.

Dentro de estos tres grandes modelos de organismo electorales, puede haber variantes, es decir, estas instancias pueden ser temporales o permanentes, centralizadas o descentralizadas. Para efectos de este dictamen abundaremos más sobre estos últimos.

A decir de IDEA Internacional, el sistema de gobierno imperante en un país determina en muy buena medida el nivel de concentración o delegación de atribuciones en su organismo electoral. En el orden jurídico se puede distinguir entre las atribuciones y funciones que se le confieren a los organismos electorales a nivel nacional o central, y aquellas que se le confieren a los organismos electorales a nivel regional o de menor jerarquía. Los organismos electorales de modelo gubernamental o mixto, pueden apoyarse en las autoridades locales para conducir todas o algunas de las actividades electorales. Sin embargo, este esquema puede dificultar que se mantengan algunos patrones de consistencia, servicio, calidad y, en última instancia, de libertad y justicia en las elecciones.

En países federales, como es el caso de México, pueden existir organismos electorales a nivel nacional y de cada una de las provincias o estados, que además pueden estar regidos por órdenes jurídicos distintos e incluso operando sistemas electorales diferentes. En este caso, la relación entre los distintos organismos electorales, así como sus atribuciones y responsabilidades, pueden variar de un país a otro.

(...)

Podemos mencionar que el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales; se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo

más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas.

En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un análisis profundo de las ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional, concluimos que el actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben regir en todo proceso electoral.

Actualmente, el Instituto Federal Electoral tiene algunas funciones nacionales, entre las que encontramos: la expedición de la credencial para votar con fotografía, la administración de los tiempos de radio y televisión, el registro federal de electores y en la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, cuando se trata de acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Lo que estas reformas proponen es que además de estas facultades, se amplíen las atribuciones de carácter nacional del organismo, para asumir algunas que hasta ahora realizan los organismos electorales locales.

Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para cumplir con el propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, independencia, integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo en los órganos electorales locales, no es pertinente su desaparición, sino establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la homologación de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño.

Así, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario realizar algunos ajustes al texto propuesto en las diversas iniciativas materia de este análisis, con el único objeto de colmar los propósitos que se persiguen y contar con una autoridad electoral fortalecida, sin desaparecer los órganos electorales locales, observando los principios rectores de legalidad, certeza, transparencia, honradez y profesionalismo.

De tal forma, se propone el siguiente esquema de distribución de competencias:

Corresponderá al Instituto Nacional Electoral:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
 3. El padrón y la lista de electores;
 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos,
- y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales federales:

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.

Por su parte, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos autónomos ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

A efecto de dotar de funcionalidad al sistema de competencias propuesto, se prevé que, en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral pueda:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones que se le confieren para procesos electorales locales.
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Es preciso advertir que en relación con las nuevas atribuciones que corresponden al Instituto Nacional Electoral en el ámbito local, particularmente las relativas a capacitación electoral, ubicación de casillas y nombramiento de los titulares de sus mesas directivas, por disposición transitoria, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales en materia electoral, sin perjuicio de que puedan ser reasumidas por dicho Instituto. Tal disposición obedece a la necesidad de ajustar las capacidades técnicas del Instituto para que ejerza las funciones que el encomienda el Decreto de reformas constitucionales en todo el territorio nacional, por lo que requiere el auxilio de los organismos locales.

(...)

De igual forma, se propone una adición al artículo 116 de la Constitución, a efecto de facultar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para designar al consejero Presidente y los consejeros electorales de los organismos autónomos locales en materia electoral, en los términos previstos por la ley.

(...)

A efecto de homologar la integración de los organismos autónomos locales en materia electoral, se establece en el propio artículo 116 que éstos contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

De igual forma, se establece los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

Con al finalidad de garantizar el funcionamiento de los organismos locales, se prevé que en caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos ya referidos. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. (...)"

Como se advierte de la transcripción anterior, el Poder reformador consideró que si bien era necesario realizar cambios de fondo, la desaparición de los organismos electorales no era viable. En ese sentido, la solución que se planteó fue que la renovación de los organismos públicos locales fuera dirigida desde el INE. Además, se buscó una configuración normativa que asegurara que no existiera intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales.

Esto es, como se advierte de la discusión llevada a cabo en la Cámara de Senadores para la aprobación del dictamen, se buscó construir un mecanismo mixto con el Instituto Nacional Electoral y órganos estatales locales, a partir de un esquema de delegación de facultades, que fortaleciera las capacidades democráticas por parte de las autoridades estatales.

A mayor abundamiento, para el poder constituyente permanente era indispensable eliminar la dependencia y presión que existía de los Gobernadores y Congresos estatales hacia los organismos electorales locales, pues se consideraba que eso afectaba la legalidad de los comicios locales y el propio funcionamiento democrático. En ese sentido, el modelo constitucional diseñado en 2014 tuvo como uno de los pilares, garantizar la operación electoral a través de órganos totalmente autónomos, con una ingeniería sustentada en una autoridad nacional independiente de los órganos legislativos que sirviera como supervisora y directora de las acciones locales.

Así, se modificó de manera sustancial la estructura y la distribución de facultades; se rediseñó la autoridad y se reformuló el sistema electoral para hacerlo nacional en lugar de federal, a través de una nueva autoridad denominada Instituto Nacional Electoral (INE) —que sustituyó al IFE— y de Organismos Públicos Locales (OPLES) en cada una de las entidades.

A partir de dicha reforma, el artículo 41 de la Constitución, vigente a la fecha, prevé que tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales (OPLES), son los encargados de la organización de las elecciones. Al Instituto Nacional Electoral se le da naturaleza de organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Además, se le otorga una estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Lo anterior se advierte de la siguiente transcripción:

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

(...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;*
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o*
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.*

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.”

Por su parte, los OPLES están previstos en los artículos 116 y 122 Constitucionales, los cuales reconocen el ejercicio de la función electoral estatal y en la Ciudad de México a cargo de autoridades electorales con autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, tal y como lee de la siguiente transcripción:

"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

(...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

(...)

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. Educación cívica;*
- 3. Preparación de la jornada electoral;*
- 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
- 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
- 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
- 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*

10. *Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
11. *Las que determine la ley.*

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

(...)

VII. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes.”

De lo anterior es muy importante tener presente los siguientes dos elementos:

1. El origen de todos los OPLES radica en la propia Constitución. Lo cual implica que está por encima de la voluntad del legislador ordinario.
2. El propio texto constitucional determina la naturaleza autónoma de los OPLES. Esto evita que dicha competencia se vea reducida o limitada por los congresos estatales.

Como se advierte de los artículos transcritos, se dio una redistribución de facultades entre ambas instancias —INE y OPLES— con el fin de homogeneizar procesos de organización electoral y, por lo tanto, mejorar la calidad de esos procesos en los ámbitos federal y local, incluyendo la reducción o eliminación de posibles injerencias de actores ajenos a los comicios. Además, se le otorgó al INE la competencia de homologar los estándares con los que se organizan las elecciones federales y estatales.

Así es claro que la Constitución establece una relación particular entre el INE y los OPLES, pues al INE no sólo se le otorgan funciones relacionadas con la organización de los procesos electorales, sino que también se le asigna la posibilidad de asumir mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. Aunado a la facultad de designación y remoción de los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales y al establecimiento en los procesos estatales los estándares de calidad y uniformidad requeridos.

Además, es importante destacar que, al Consejo General del INE se le otorgaron facultades Constitucionales que permiten colegir la relación de subordinación de los OPLES al INE, pues en su naturaleza de organismo nacional autónomo puede:

- Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales.
- Delegar en los órganos electorales locales las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.
- Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio de interpretación (art. 41, base V, Apartado C).

Así es claro que, el nuevo sistema electoral que se crea con la reforma de 2014, se soporta de forma preponderante en el INE, al que se le asignan nuevas atribuciones de organización electoral en el ámbito local, además de hacerse cargo de la organización de los comicios federales. Siendo que el INE se convierte en el único órgano que en los casos previstos en la Constitución y en la ley, puede intervenir en el marco de actuación de los OPLES.

En otras palabras, la reforma estableció un sistema de coordinación entre la autoridad electoral nacional y los organismos locales. Esto es, se reconoció la autonomía del INE y de los OPLES, pero se construyó un parámetro de coordinación, e incluso subsunción de los organismos electorales estatales al instituto nacional. Así, se creó un modelo dual; de un organismo nacional electoral independiente y autónomo, y organismos electorales locales que gozan también de autonomía.

Por tanto, es claro que la construcción Constitucional actual de la relación entre el INE, como organismos autónomo nacional, y los OPLES, como organismos autónomos estatales tuvo por objeto evitar la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales para lo cual se reforzaron los OPLES **con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben regir en todo proceso electoral.**

Posterior a la reforma Constitucional, se emitieron las leyes secundarias en la materia; las cuales fueron publicadas el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de dichas leyes se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, siendo muy claro que en ella se reitera la autonomía de los OPLES.

D. INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En cuanto al hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México conviene tener presente como antecedente, que el 4 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la cual sentó las bases para la existencia del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). El 15 de enero de 1999, el entonces IEDF inició sus trabajos bajo los principios rectores de imparcialidad, equidad, certeza, objetividad, independencia y legalidad.

El 5 de febrero de 2016 entró en vigor la Reforma Política de la Ciudad de México, la cual dotó a la ciudad de autonomía constitucional, por lo que el 5 de febrero de 2017 se promulgó la Constitución de la Ciudad de México y se modificó el nombre a Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En cuanto al parámetro de control constitucional, la existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra prevista en los artículos 116 y 122 Constitucionales. En específico, la fracción IX del artículo 122 de la Constitución Federal, transcrita en párrafos precedentes, establece que la Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral prevé la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales

aplicables. Por su parte, la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, se refiere a la naturaleza de los órganos electorales locales, como órganos autónomos en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Además, en dicho numeral se plantea la relación entre el INE y los OPLES.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el capítulo V, denominado "De los órganos autónomos" reitero que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio; otorgándole plena autonomía técnica y de gestión, así como capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes¹³. Lo anterior se advierte en el artículo 50 que a la letra contempla lo siguiente:

"Artículo 50

Instituto Electoral de la Ciudad de México

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.

¹³ "CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Artículo 46

Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

(...)

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

(...)

B. Disposiciones comunes

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

2. La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de la materia.

Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local.

(...)"

3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.”

Cabe destacar que esta configuración normativa se reitera en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, concretamente en los artículos 31 y 32, los cuales refieren que el Instituto Electoral es un órgano de carácter permanente y profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; además de que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio¹⁴.

Tal naturaleza —de órgano autónomo, independiente— se reflejaba, por citar un ejemplo, en lo dispuesto en el artículo 98 del Código de referencia, que reconocía la facultad del Consejo General del Instituto Electoral —órgano máximo de dirección— para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.

Otra muestra de su autonomía se veía reflejada en la fracción VII del artículo 83 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que prevé la facultad de la Junta Administrativa del Instituto de elaborar al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto Electoral y proponer al Consejo General los dictámenes correspondientes. Siendo que esto posibilita al instituto a modificar la estructura funcional del mismo con base en el análisis objetivo del órgano especializado atendiendo al principio constitucional de autonomía que rige su actuar.

E. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Como se precisó en el capítulo de antecedentes, el 26 de mayo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México, con treinta y siete votos a favor, aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el dos de junio siguiente se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Dicho decreto constituye el acto impugnado en el presente juicio de amparo.

¹⁴ El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

Artículo 32. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará en la Ciudad de México. Su patrimonio es inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto. En ningún caso, podrán recibir donaciones de particulares.

En el dictamen que dio origen a dicha reforma se planteó la importancia de formular una reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta la naturaleza, funciones, actividades y derechos políticos protegidos a partir de las diversas actividades que realizan cada una de las áreas. Lo anterior sólo llevó al debilitamiento de este Organismo Público Local Electoral.

A mayor abundamiento, la reforma en cuestión ordena la fusión de algunas de las Comisiones y Unidades Técnicas, estableciendo para ello dos técnicas legislativas: la de fusionar dos áreas para crear una nueva y la de desaparición de áreas y asunción de las facultades por una ya existente.

En seguimiento del primer rubro tenemos la desaparición de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) y la Comisión de Fiscalización, que se une con la Comisión de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, para crear la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

También desaparece la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos que se une a la de Educación Cívica y Construcción Ciudadana para así crear la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana. Por otra parte, tenemos la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados, que desaparecen, y sus funciones se le atribuyen a la Secretaría Administrativa.

Por su parte, desaparecen la Unidad de Formación y Desarrollo y la Oficina de Gestión de Calidad, y sus funciones las asume la Junta Administrativa, coordinada la Secretaría Administrativa. Por último, desaparecen 2 de las cuatro subcontralorías: Atención Ciudadana y Normatividad, y Vinculación con Procesos Electorales y Participativos. En este caso no queda claro quién asumirá las facultades de las dos áreas que se eliminan.

Uno de los principales cambios y que mayor impacto tiene es la eliminación de la facultad del Consejo General del Instituto Electoral —órgano máximo de dirección— para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto, anteriormente prevista en el artículo 98 del Código impugnado. Cuestión que se desarrollará más adelante.

Así, una vez precisados todos los elementos anteriores se formulan los siguientes:

VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ

PRIMERO. LA REFORMA IMPUGNADA TRANSGREDE EL DEBIDO PROCESO LEGISLATIVO ESTABLECIDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA NORMATIVA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO SIGUIENTE:

Como se precisó en el capítulo de antecedentes, el 26 de mayo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México, con treinta y siete votos a favor, aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el dos de junio siguiente se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En el dictamen que dio origen a dicha reforma se planteó la importancia de formular una reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin tomar el proceso legislativo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

En tal virtud, sumado a que el dictamen no fue circulado en tiempo y forma, es evidente que tanto diputados como alcaldías que integran la Ciudad de México, no contaron con los elementos para debatir y emitir un voto razonado respecto a las reformas y adiciones a esos ordenamientos, por lo que tal proceder es violatorio a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del principio de deliberación parlamentaria conceptualizado en la jurisprudencia P./J. 11/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propio de la democracia representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley suprema.

En apoyo a los razonamientos vertidos respecto a las diversas violaciones al procedimiento legislativo que se han señalado en este concepto de invalidez, son aplicables las jurisprudencias siguientes:

“FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. Cuando en una acción de inconstitucionalidad se analicen los conceptos de invalidez relativos a violaciones a las formalidades del procedimiento legislativo, dicho estudio debe partir de la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, que es precisamente el acogido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 39, 40 y 41. A partir de ahí, debe vigilarse el cumplimiento de dos principios en el ejercicio de la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales: el de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto, y el de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de

deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención.

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 6/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 915, sostuvo que en acción de inconstitucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo de las normas generales impugnadas, y sólo en caso de que resulten infundados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del procedimiento legislativo originó a la norma general impugnada. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, cuando se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada, éstas deberán analizarse en primer término, ya que, de resultar fundadas, por ejemplo, al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional, su efecto de invalidación será total, siendo, por tanto, innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que, a su vez, hagan valer los promoventes.

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO. En términos de lo previsto en el artículo 71, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia en una acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda y fundar su declaración de

inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, sea invocado o no en el escrito inicial. En congruencia con lo anterior, si del análisis del marco constitucional que rige la materia en la que incide el acto legislativo impugnado se advierte un vicio de inconstitucionalidad que implica la nulidad total de éste, la Suprema Corte debe emitir la declaración de invalidez fundada en el precepto constitucional correspondiente, incluso ante la ausencia de un concepto de invalidez específico, puesto que ese efecto de invalidación hace innecesario pronunciarse sobre los conceptos de invalidez planteados en la demanda.

Acción de inconstitucionalidad 26/2012. Procuradora General de la República. 21 de

“LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE. El artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, prevé que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no se les podrán realizar modificaciones sustanciales; sin embargo, el citado plazo no constituye un motivo para calificar de urgente la dispensa de trámite de una iniciativa de reforma legal que rige aspectos fundamentales del proceso electoral, ya que lo que la mencionada disposición garantiza es la certeza en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel federal o local, mas no autoriza a los órganos legislativos a hacer uso de ella para justificar la urgencia de aprobar una norma general electoral, eludiendo el procedimiento legislativo correspondiente. En efecto, el citado artículo debe armonizarse con los demás principios o valores constitucionales, entre ellos, el de que la aprobación de una ley debe ser producto de la deliberación de todas las fuerzas representativas, asimismo el de certeza electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar con la suficiente anticipación que permita el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario. Por consiguiente, la pretensión del órgano legislativo de cumplir con el citado plazo constitucional para reformar una ley electoral, no justifica que las mayorías que lo componen eludan el procedimiento legislativo que debe seguirse para la aprobación de reformas sustanciales a las leyes electorales e imponerse, de esta forma, a las minorías.

“DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA. La circunstancia de que una propuesta de dispensa de trámites legislativos se apruebe por mayoría o unanimidad de votos, no es suficiente para convalidar su falta de motivación, máxime cuando incide negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo. Además, las votaciones ocurridas durante el desarrollo del procedimiento no pueden servir como sustento para desestimar los conceptos de invalidez en los que se aduce la violación a los principios democráticos en un proceso legislativo.

“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LOS ARTÍCULOS 48, 49, 49 BIS, 79, 86, 112, 113, 135, 136, 137, 139 y 141 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO

INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTABLECEN REGLAS ESPECÍFICAS Y OBLIGATORIAS, PARA LA DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS GENERALES. Del contenido de los artículos 48, 49, 49 Bis, 79, 86, 112, 113, 135, 136, 137, 139 y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, se desprenden como reglas del proceso legislativo las siguientes: a) Los proyectos para ser discutidos tanto por las comisiones respectivas, como por el Pleno, deben presentarse, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la sesión, a los diputados integrantes (48 y 49); b) En el caso de que se proponga voto particular que modifique el proyecto de ley, se procederá a la deliberación y aprobación o desaprobación, en los términos previstos en la norma (49 y 49 Bis); c) Las sesiones tendrán el carácter de ordinarias y extraordinarias, y las primeras tendrán lugar a partir de las once horas en los días previstos en la norma (79); d) La Legislatura por mayoría podrá constituirse en sesión permanente para el desahogo total de los asuntos iniciados (86); e) El dictamen a una iniciativa de ley se discutirá en lo general y de ser aprobado, en la misma sesión se discutirá en lo particular separando los artículos que lo ameriten y se someterá a votación de la asamblea (112); f) La asamblea puede votar para su resolución el dictamen de ley originalmente presentado, o bien, por el voto particular de alguno de sus integrantes (113); g) Todos los asuntos sobre los que el Congreso deba resolver, se someterán a votación de la asamblea (135); h) Para la aprobación de los asuntos se establecen tres clases de votación: por cédula, nominal y económica. La votación nominal habrá de desahogarse en todos los casos sometidos a la asamblea cuando exista un empate en la votación económica o cuando el pleno decida que el asunto lo amerita; dicha votación consiste en que cada miembro de la Legislatura se ponga de pie y diga en voz alta su nombre y apellido expresando el sentido de su voto (136, 137 y 139); y, finalmente, i) Todos los asuntos se resolverán por mayoría simple de votos de los presentes con las salvedades previstas en la norma (141). En ese sentido, la desatención a alguna de las citadas reglas del procedimiento legislativo, como lo es la relativa a los métodos de votación para determinar la mayoría de la reforma en caso de empate, transgrede los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como el principio de deliberación parlamentaria conceptualizado en la jurisprudencia P./J. 11/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicha omisión impide cumplir uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno representativo y popular a que se refieren los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, ya que la falta de la deliberación pública afecta la legalidad del procedimiento legislativo, pues es a través de ella como los ciudadanos, con el actuar de sus representantes, toman las decisiones colectivas en un debate abierto, que es propio de la democracia y cuya expresión culminatoria da la regla de acatamiento para la mayoría. De manera que la voluntad parlamentaria, al ser restringida por las omisiones en el desarrollo de la votación, se constituye en una violación a las formalidades del procedimiento legislativo que afecta los referidos principios y derechos constitucionales, sin los cuales no puede tener validez la aprobación de las normas.

A mayor abundamiento es de precisarse que no se debe soslayar expuesto en diversas teorías, en el sentido de que las normas jurídicas tienen como finalidad regular la conducta del hombre en sociedad; pero desde luego para que estas puedan alcanzar sus fines, deben ser válidas y para que una norma tenga validez legal, debe ser producto de un acto considerado de igual forma válido, lo que evidentemente no se cumple en el caso que nos ocupa.

SEGUNDO. LA REFORMA IMPUGNADA TRANSGREDE EL PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 35, 41, 49, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES VIOLA LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA AUTONOMÍA DEL IECM, POR LO SIGUIENTE:

Como se precisó en el apartado de cuestión previa, el Máximo Tribunal del País ha señalado que los órganos constitucionales autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder a partir de la evolución de la teoría tradicional de la división de poderes. Además, constituyen órganos que permiten una distribución de funciones o competencias, que hace más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

En ese sentido, los órganos autónomos se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. Siendo que todas estas características que se les otorga en la propia constitución buscan evitar que ningún poder público puede incidir de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones.

Ahora bien, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano constitucional autónomo local, ya que, el artículo 122 de la Constitución, con relación al diverso 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades electorales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y ordena a las Constituciones y leyes locales a garantizar dichos principios. Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México en los artículos 46 y 50 prevé que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo autónomo, de carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonio propio; otorgándole plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.

Cabe destacar que la Constitución al momento de establecer que la función electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, no sólo impone límites a las autoridades electorales para evitar que su actuación irrumpa con estos principios, sino que también es un llamado hacia otros poderes para abstenerse de realizar cualquier actuación que pudiera comprometer su cumplimiento por parte de las autoridades electorales.

En ese sentido, en el caso, el IECM reúne las características que según ese Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener todo órgano constitucional autónomo:

- a. Está establecido directamente por la Constitución Federal.
- b. Según el marco Constitucional tiene una relación de coordinación con otros órganos del Estado, porque no está subordinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial Locales, al tener autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

- c. Tiene autonomía e independencia funcional y financiera, pues la Constitución Local lo dota de personalidad jurídica y patrimonio propios.
- d. Atiende funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad, como son la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad.

Cabe destacar que ese Máximo Tribunal ha reconocido que los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales locales, implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

En ese contexto, la intervención del Congreso de la Ciudad de México, para eliminar la autonomía otorgada al Instituto por la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución de la Ciudad de México, transgrede los artículos 41, 49, 116 y 122 Constitucionales, pues la determinación de lo que viene a conformar las áreas del instituto, su forma de operación y sus necesidades administrativas se traduce en la intromisión por parte de un de los Poderes de la entidad, en la realización de un acto que es competencia del órgano especializado en la materia.

En efecto, es el IECM un órgano con autonomía técnica y de gestión, de ahí que, atendiendo a esa naturaleza, carecen de justificación las reformas reclamadas, pues subsumen las facultades del instituto al Congreso local, generando una relación de subordinación con el órgano legislativo.

Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado.

Debemos recordar que la existencia de un órgano constitucional autónomo implica que el mismo cuenta con un cúmulo propio de competencias y, por tanto, goza de paridad con los órganos previstos en el texto constitucional, tal y como lo dispuso ese Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 117/2014. En efecto, una de las implicaciones lógicas de la autonomía constitucional de los órganos autónomos es la capacidad de poder oponer sus competencias a las de los tres poderes en los que tradicionalmente se dividía el poder público, así como al resto de los órganos autónomos.

En el caso del IECM, al ser un organismo constitucional autónomo, su organización y funcionamiento (división del trabajo, ejercicio de atribuciones, derechos y obligaciones de quienes los integran) es inherente al ejercicio de la función pública

desempeñada. Esa auto organización no puede ser vulnerada por ningún otro órgano del Estado, precisamente porque es connatural a los organismos constitucionales autónomos; por tanto, cuando algún otro órgano del Estado mediante una reforma legal rediseña la estructura interna de un Instituto Electoral local con una evidente afectación al cumplimiento de las atribuciones, al eliminar comisiones permanentes, unidades técnicas, vulnera su facultad de auto organización.

Tan el decreto reclamado es inconstitucional, al transgredir la autonomía prevista para el IECM en el texto constitucional, que elimina la facultad prevista en el artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que disponía que el Consejo General podía crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.

En específico, antes de la reforma reclamada, el texto legal establecía lo siguiente:

“Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que respectivamente tienen a su cargo las tareas de:

- I. Comunicación Social y Difusión*
- II. Servicios Informáticos*
- III. Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados;*
- IV. Asuntos Jurídicos*
- V. Formación y Desarrollo, y*
- VI. Vinculación con Organismos Externos.*

El Consejo General podrá crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.”

A partir de la vigencia del decreto reclamado se contempla el artículo 98 al tenor siguiente:

“Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que respectivamente tienen a su cargo las tareas de:

- I. Comunicación Social y Difusión*
- II. Servicios Informáticos*
- III. **Se deroga.***
- IV. Asuntos Jurídicos V. **Se deroga.***
- VI. **Se deroga.***

Se deroga.”

Como se advierte de la comparación de los textos —reformado y vigente— el Congreso de la Ciudad de México eliminó la posibilidad de que el Instituto cree las unidades que estime necesarias para el cumplimiento de su mandato constitucional y legal. Lo anterior conlleva una afectación directa a su autonomía, pues ya no puede decidir respecto de la óptima organización y adecuado funcionamiento. Esto es, ahora es el Congreso de la Ciudad el que establece las prioridades en la organización interna del IECM, lo cual es una clara afectación a los principios de autonomía y de división de poderes.

En otras palabras, la autonomía de la que goza el IECM conlleva la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal independencia y autonomía opera tanto de forma externa (actuando como autoridad electoral) como internamente (actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le confiere). Por lo cual el Congreso de la Ciudad de México no podía modificar la estructura del Instituto y mucho menos eliminar la posibilidad de que el IECM decida sobre su estructura.

A mayor abundamiento, es claro que la ley puede establecer un parámetro funcional de organización; sin embargo, ello no puede restringir al propio organismo a conducirse de manera independiente y autónoma en el establecimiento de sus áreas y en su capacidad operativa. Esto es, el IECM según la constitución, al ser el organismo electoral especializado en la Cdmx es el único que puede conducir su actuación bajo los principios constitucionales y tiene facultad de diseñar su operación con el fin de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.

Es importante tomar en cuenta que, si bien el artículo 116 de la Constitución otorga a las legislaturas locales libertad legislativa, esas facultades no son irrestrictas o absolutas, tal y como lo estableció el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País al resolver la Acción de inconstitucionalidad 8/2014, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

“LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTA LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales.”¹⁵

Finalmente, la violación a la autonomía del IECM también conlleva una violación directa a la protección de los derechos político-electorales. Lo anterior toda vez que, la reforma pretende obligar al instituto a actuar en determinado sentido, sin que pueda generar su programación funcional con el objetivo de salvaguardar los derechos en cuestión. Esto es, la estructura del instituto se define por una voluntad del legislador de la Ciudad de México y no a partir de la efectiva protección de los derechos a votar, ser votado, asociación, reunión, participación ciudadana, entre otros.

Precisado lo anterior es claro que el Congreso de la Ciudad de México no puede, mediante una reforma legal, reestructurar orgánicamente al IECM eliminando Comisiones Permanentes, unidades técnicas, cuya existencia se justifica en las atribuciones con que cuenta el Instituto desde antes de la reforma; y eliminar la

¹⁵ Acción de inconstitucionalidad 8/2014.

facultad para crear nuevas Unidades Técnicas, pues ello transgrede los principios de autonomía e independencia establecidos en la propia Constitución.

b. Especialización

Como se precisó en párrafos precedentes, el artículo 46 de la constitución de la Ciudad de México, le otorga al IECM, como órgano autónomo, la característica de especializado. En ese sentido, los numerales reclamados impiden que el IECM alcance la especialización en la función que desarrolla, por lo que tampoco crean las condiciones necesarias para que se garantice el respeto irrestricto al principio de autonomía.

Además, la reforma reclamada al integrar funciones en diversas comisiones y unidades violenta el principio de certeza, ya que no se tiene la seguridad de qué órgano es el encargado de realizar las funciones, lo que denota una falta de especialización, cualidad que es necesaria para la emisión eficaz de las determinaciones, pues rompe precisamente con el carácter de especialización.

Asimismo, es importante destacar que la especialización y profesionalismo son producto de la praxis adquirida en el desarrollo de una actividad de manera continua, permanente y reiterada, debiendo el legislador velar por el respeto a la autonomía e independencia del órgano autónomo. En otras palabras, derivado de la violación a la autonomía se afecta el principio de profesionalismo. Incluso se elimina una de las comisiones y una unidad que se encargaba de velar por el profesionalismo del personal, consecuentemente, la profesionalización y permanencia, así como los principios de certeza, objetividad e imparcialidad estatuidos en el numeral 116, son violentados.

Se debe tener presente que, si bien el profesionalismo no es un principio previsto en el marco Constitucional Federal, si está previsto en la Constitución de la Ciudad de México. Además, la profesionalización es uno de los elementos que coadyuva para lograr un adecuado desarrollo de las funciones que legalmente corresponden realizar a los órganos electorales, por lo que su cumplimiento se traduce en la observancia del principio de independencia y autonomía, esto es, en la medida en que los órganos autónomos tienden a contar áreas especializadas y profesionalizadas podrán desarrollar sus funciones con independencia.

A mayor abundamiento, la eliminación de comisiones permanentes implica una reducción no justificada a un tramo de control del Consejo General sobre las tareas de áreas especializadas, limita las actividades de las consejerías y, al no tener una justificación razonable, implica una violación a la autonomía de funciones e independencia de auto organización. En otras palabras, la eliminación de comisiones permanentes por parte del Congreso de la CDMX, es un acto arbitrario, que no se relaciona con la motivación de reducción presupuestal que se alude en el dictamen; por el contrario, esta medida hará que la distribución del trabajo de supervisión esté distribuida entre menos integrantes, rompiendo así con la naturaleza de los órganos colegiados que consiste en el seguimiento y vigilancia de las actividades, a través de una distribución equitativa de las cargas laborales para su mejor atención, análisis, discusión y aprobación.

Por ejemplo, una de las comisiones eliminadas fue la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, la cual es un órgano colegiado auxiliar del Consejo General

en la celebración de negociaciones necesarias para sentar las bases orientadas a la suscripción de convenios de apoyo y colaboración para coordinar actividades y desarrollar una correcta vinculación con el Instituto Nacional Electoral. El trabajo de esta área es transversal, por lo que impacta en todas y cada una de las áreas del Instituto Electoral, a la vez de que su nivel de especialización origina que sus actividades no sean desarrolladas por ningún otro órgano colegiado. El decreto reclamado elimina dicha comisión y traslada sus funciones a la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano ejecutivo unipersonal que ya no se encontrará sujeto al seguimiento y vigilancia de tales atribuciones mediante una Comisión. Este modelo centralizado contradice el carácter colegiado de la autoridad electoral en la toma de decisiones y además inhibe el consenso, seguimiento, control y aportaciones de las consejerías electorales.

Además, del análisis del proceso legislativo, concretamente de la iniciativa y del dictamen de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México presentada el 17 de febrero del dos mil 2022, se advierte como fundamento los principios de racionalidad, austeridad y eficacia. Sin embargo, el legislador es omiso en matizar que la aplicación de estos principios al gasto que ejercen los organismos autónomos está condicionado a que dichos principios se apliquen sin menoscabo de la autonomía de los mismos, esto según la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

En específico, la iniciativa propone la integración de las funciones de la UTEF y la Comisión de Fiscalización con la Comisión de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, para crear la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. Previo a la Iniciativa, las facultades de la Comisión y Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas se centraban alrededor de funciones principales: conocer de los procesos administrativos sancionadores, presentar opiniones para el Consejo General respecto las estimaciones presupuestarias presentadas por partidos, asociaciones y candidatos independientes, y coadyuvar a las autoridad federal electoral en el monitoreo de los medios masivos de comunicación con cobertura en la Ciudad de México, registrando todas las manifestaciones de los y las candidatas. La integración de estas dos áreas implica que se concentrarían dos procesos autónomos, es decir la fiscalización y el conocimiento y seguimiento de manifestaciones y estimaciones presupuestarias.

Además, en cuanto a la unión de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos con Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, se puede señalar que, si bien ambas Comisiones comparten un rol informativo, uno en educación cívica y otro en género, la unión de áreas no es orgánica ni puede hacerse asegurando que no sea en menoscabo de la protección e implementación de perspectiva de género. La Comisión de género aseguraba —tanto a nivel interno como en sus funciones externas— que el IECM cumpliera con mandatos de perspectiva de género y de actividades para la prevención de la violencia política en razón del Género. Creer que este rol puede ser suplido por la Comisión de Educación Cívica es menospreciar la necesidad de conocimiento especializado que requiere la materia de género, que no puede ser aprendido e implementado por funcionarios sin conocimiento del tema en el plazo de 90 días que da la Iniciativa para ser implementada.

De igual manera, la absorción de facultades de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, Unidad Técnica, Comisión de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados por parte de la Secretaría Administrativa resulta del todo compleja. Lo que solían ser áreas técnicas especializadas, se absorbe por la Secretaría Administrativa, quien encima de sus funciones ya existentes deberá absorber las de 3 Unidades Técnicas y una Comisión.

Por todo lo expuesto es claro que, la justificación constitucional del diseño de los órganos autónomos electorales se basa en la legitimidad técnica y en los espacios de decisión especializada que se asegura a dichos órganos para lograr una regulación técnica sobre determinados aspectos de la realidad que la Constitución busca remover del ámbito de la oportunidad política. De ahí la clara contravención a los artículos 35, 41, 49, 116 y 122 Constitucionales.

TERCERO: LA REFORMA IMPUGNADA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CONTRARIA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35, 41, 49, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN, PUES SE VIOLA EL MODELO DEMOCRÁTICO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN E INVADE LA COMPETENCIA DEL INE CON RELACIÓN AL DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS OPLES:

En primer lugar, conviene tener presente que el artículo 49 de la Constitución Federal establece el principio de división de poderes, el cual señala que el Supremo Poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Como garantía de dicho principio se establece una prohibición: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. En ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha resuelto que este principio busca limitar el poder, mediante la idea reguladora de pesos y contrapesos, esto es, mediante una cierta idea de balances que impide la concentración del poder, al mismo tiempo que posibilita la generación creativa de competencias públicas para la realización del bien común.¹⁶

En ese sentido, en la jurisprudencia P.J. 80/2004 de rubro: "*DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS*" ese máximo tribunal del país estableció tres grados de interferencia, como mecanismo de evaluación para analizar la actuación de un poder u órgano, con relación a la prohibición de que no se extralimiten en el ejercicio de las competencias que les han sido conferidas, siendo que también han sido aplicables a los casos de conflictos competenciales en los que intervienen órganos constitucionales autónomos. Dichos grados de interferencia son los siguientes:

- a. La intromisión, como el grado más leve de violación del principio de división funcional de competencias, que se actualiza cuando uno de los poderes u órganos se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión.

¹⁶ Véase el criterio del Tribunal Pleno P.J. 52/2002, de rubro: "*DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL*". Consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 954.

- b. La dependencia implica que un poder u órgano impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.
- c. La subordinación es el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder u órgano no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que, mientras en esta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe.

Ahora bien, en el capítulo de consideraciones previas se identificó claramente las características de los órganos autónomos y particularmente como la Constitución, en los artículos 41, 116 y 122 Constitucionales establece un modelo de autonomía funcional y presupuestal para organismos electorales.

Precisado lo anterior, es importante destacar que como se estableció en párrafos precedentes, la reforma electoral 2014 tuvo por objetivo transformar las instituciones democráticas en México para responder a la realidad que vivía el país, a partir, entre otros, del fortalecimiento de la autoridad electoral a nivel nacional y del establecimiento de una nueva coordinación entre ésta y los organismos locales. Uno de los principales problemas que busco eliminar fue, por una parte, la captura que existía de los institutos electorales locales, por parte de los gobiernos locales y sus congresos y, por la otra, homogenizar el funcionamiento y trabajo de los institutos de las diferentes entidades.

En ese sentido, la reforma electoral 2014 modificó de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de organización electoral. En primer lugar, se rediseño la autoridad y se reformuló el sistema electoral para hacerlo nacional en lugar de federal a través de una nueva autoridad denominada Instituto Nacional Electoral (INE) y se le otorgó la facultad de homologar los estándares con los que se organizan las elecciones federales y estatales.

También se crearon los Organismos Públicos Locales (OPLES), y se dio una redistribución de facultades entre ambas instancias con el fin de homogeneizar procesos de organización electoral y, por lo tanto, mejorar la calidad de esos procesos en los ámbitos federal y local, incluyendo la reducción o eliminación de posibles injerencias de actores ajenos a los comicios.

Así, de la lectura de lo dispuesto en los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución se advierte la relación particular entre el INE y los OPLES, pues al INE se le asigna la posibilidad de asumir mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. Aunado a la facultad de designación y remoción de los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales y al establecimiento en los procesos estatales los estándares de calidad y uniformidad requeridos.

Además, al Consejo General del INE se le otorgaron facultades Constitucionales que permiten colegir la relación de subordinación o de dependencia de los OPLES al INE, pues en su naturaleza de organismo nacional autónomo puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales; delegar en los órganos electorales

locales las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, y atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio de interpretación.

Precisado lo anterior es claro que las normas reclamadas, transgreden el modelo Constitucional previsto en los numerales 41, 116 y 122 Constitucionales, pues en su caso, el INE es la única instancia que tiene forma de intervenir o regular actividades propias de los OPLES.

Fue claro el Poder reformador al señalar la importancia de crear un modelo que impidiera una actividad parcial de parte de los OPLES y una dependencia a las autoridades estatales. Justamente, uno de los pilares de la reforma fue construir un parámetro normativo que eliminara la intromisión de los poderes estatales en las decisiones y actuaciones de los órganos locales.

En ese sentido, las normas reclamadas justo alteran ese modelo, pues pretenden, por una parte, eliminar la facultad del Consejo General del IECM de crear las unidades técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento y operación. Por otro lado, elimina comisiones y unidades técnicas modificando la estructura funcional y orgánica del instituto, sin atender a los requerimientos técnicos que IECM para el cumplimiento de sus funciones. Máxime que al ser el Instituto un órgano con autonomía Constitucional es el responsable de poder determinar sus necesidades primigenias y orgánicas, siendo que, en su caso, el único facultado para poder incidir en la operación del mismo es el INE.

Así, se está creando una total subordinación del IECM frente al Congreso de la Ciudad de México, pues es este último el que a partir de la reforma impugnada decide cómo deberá funcionar el Instituto, sin que este último pueda incidir en la creación y determinación de sus propias áreas.

Se insiste, la autonomía de la que goza el IECM conlleva la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos, como en este caso el Congreso de la Ciudad de México; siendo que la Constitución y las leyes únicamente contemplan la intervención del INE en determinados aspectos de las labores de los OPLES —dentro del cual se encuentre el IECM— como en aquellos actos administrativos que le permiten funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le confiere.

A mayor abundamiento, como se expuso en el capítulo relativo a las cuestiones previas, el INE, en su caso, es la única autoridad que pudiera intervenir en la operación del organismo electoral de la Ciudad de México, a partir de la facultad de designación y remoción de consejeros; de la facultad de asunción; de la facultad de delegación, o de la facultad para atraer a su conocimiento asuntos de competencia de los OPLES. De ahí que se puede hablar de una invasión de competencias del Congreso de la Ciudad de México al Instituto Nacional Electoral.

Finalmente, es importante tener presente que ese Máximo Tribunal, al resolver la controversia constitucional 209/2021 sostuvo que la autonomía del INE está particularmente vinculada con la democracia, cuestión que implica las garantías necesarias para el goce y ejercicio de los derechos político-electorales de los

ciudadanos, por lo que cualquiera afectación a la autonomía de los organismos electorales tiene la capacidad de repercutir en ellos.

Por todo lo expuesto es claro los numerales reclamados del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México transgreden lo dispuesto en los artículos 41, 49, 116 y 122 de la Constitución.

CUARTO: LOS NUMERALES IMPUGNADOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2º, 57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES NO HUBO UNA DELIBERACIÓN EFECTIVA QUE PUDIERA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS, Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA A TRAVÉS DE LA CONSULTA, POR LO SIGUIENTE:

En primer lugar, conviene precisar que ese Máximo Tribunal del País ha sostenido que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo deben abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40, 41, 116 y 122 de la Constitución Federal, por lo que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios: por un lado, el de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer de manera innecesaria etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no dar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto. Por el otro lado, el de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Este último principio está estrechamente vinculado con la esencia y valor mismo de la democracia, como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos caracterizados por el pluralismo político, como en el caso de México y la mayor parte de las democracias contemporáneas. La democracia representativa es un sistema político valioso, no solamente porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo.

En efecto, la adopción de decisiones por mayoría, regla básica que permite resolver, en última instancia, las diferencias de opinión, es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación

parlamentaria, así sean los minoritarios, como dispone el artículo 41 constitucional y el modo en que la aportación de información y puntos de vista por parte de todos los grupos parlamentarios contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votación.

Si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, la dimensión deliberativa de la democracia carecería de sentido, precisamente, porque las minorías, por su propia naturaleza, están predestinadas a no imponerse en la votación final, a menos que su opinión coincida con un número suficiente de integrantes de otras fuerzas políticas; por lo tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías.

Así, en conclusión, el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.

Así, ese Máximo Tribunal del País para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ha establecido la importancia de la evaluación del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es, precisamente, de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final.

Sentado lo anterior, conviene analizar la incorporación de regulación Constitucional que permite dar cauce a las expresiones de los pueblos originarios en la ciudad de México, con el objeto de proteger el derecho de las minorías a influir en las decisiones de la CDMX.

Para ello es importante tener presente que, a partir del reconocimiento del contexto social, histórico y cultural de nuestro país, en las primeras líneas del artículo 2º de la Carta Magna se enuncia el reconocimiento jurídico de la pluriculturalidad que posee el país a través de los pueblos indígenas, mismo que se reconoce de la siguiente manera.

"La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica, y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres".

La constitución, además, reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en el párrafo cuarto del mismo artículo, que los contempla como se cita a continuación:

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Así, la autodeterminación debe entenderse como el reconocimiento y disfrute de sus derechos como comunidades o pueblos, entre otros aspectos, a decidir sus formas de organización en el plano social, económico, político y cultural; a la aplicación de sus propios sistemas normativos; a elegir a sus propias autoridades bajo prácticas tradicionales, establecidos en el apartado A, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del citado artículo.

En concordancia con lo anterior, se reconoce la relevancia de los pueblos originarios en el inciso IX del 2º constitucional menciona que, como medida del Estado, se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Al hacer mención a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, da pauta a que se legisle sobre el tema en dicha unidad político-administrativa debido a la obligatoriedad que se tiene respecto al marco constitucional.

Esto último es de suma importancia debido a que en la Ciudad de México existen diferentes grupos que se han denominado a sí mismos y desde los gobiernos locales como pueblos originarios, los cuales se analizarán más adelante.

Es de gran relevancia hacer alusión a lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona en las últimas líneas que: “Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.

Si bien, no hay una presencia mayoritaria de pueblos indígenas dentro de la Ciudad de México, si existen grupos que pueden ser equiparables a lo mencionado en el artículo 2º constitucional, por lo cual la Constitución Política de la Ciudad de México llevó a cabo la labor de reconocer dentro de su texto a las comunidades originarias que han existido dentro del territorio de la Ciudad de México, a cuyo proceso y contenido en razón de pueblos originarios haremos alusión más adelante.

Así, el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto en el que se derogaron y reformaron una serie de disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de una Reforma Política de la Ciudad de México. Esta reforma incluyó, entre otros aspectos, que el territorio seguirá siendo el mismo y se conformará como un Estado de la Unión con el nombre de Ciudad de México.

Con ello, se da paso a la elaboración de una constitución política propia de la nueva entidad federativa, la cual fue publicada el 17 de septiembre de 2018 e incluye, una amplia referencia en materia de derechos humanos; perspectiva de género y la mención y reconocimiento de los pueblos originarios como elementos constitutivos de la Ciudad de México.

En el preámbulo de la Constitución Política de la Ciudad de México se lee que:

"[La Ciudad de México] Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron, asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia de grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes".

En estas primeras líneas del preámbulo se entiende a la ciudad como una construcción histórica, formada a partir de grandes procesos migratorios y de un conglomerado originario que con el paso de los siglos y con sus marcadas diferencias, ha sabido convivir y configurar la ciudad pluricultural que hoy se nos presenta; es un territorio construido a partir de movimientos migratorios por un lado y de un pueblo establecido por el otro.

De igual manera, en el artículo 2º, párrafo primero, de la Constitución Política de la Ciudad de México (en adelante CPCDMX) cuyo título dice "De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad", se reconoce a los pueblos originarios como elementos constitutivos de la misma como se cita a continuación:

"La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. Este carácter pluricultural de la ciudad reconoce y define a los pueblos originarios e indígenas en el artículo"

Asimismo, el artículo 58 distingue entre pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, donde siendo ambos indígenas, se identifican los primeros por descender de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas. Mientras que las segundas son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.

Con fines de aportar mayor claridad respecto al artículo que se menciona, se cita su contenido a continuación:

"Artículo 58 Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una

composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo siguiente: a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en ésta Constitución."

Respecto al párrafo 2º de este artículo, apartado a y b, en los que se definen a los pueblos originarios e indígenas, es de referir con mayor importancia un punto: en las legislaciones citadas con anterioridad, así como las leyes y tratados internacionales que regulan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, las definiciones de pueblos originarios no aparecen y en todo caso son equiparables con pueblos tribales.

Por tanto, en su búsqueda de la protección más completa de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a partir del reconocimiento del contexto social, histórico y cultural de México, y en particular tratándose de lo que en su momento fue México-Tenochtitlán, en la CPCDMX se plantea que los pueblos originarios adquieren el carácter que conceptualmente definía a las comunidades y pueblos indígenas, es decir, pueblos que descienden de poblaciones asentadas antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones de diferente índole, sin que necesariamente haya un origen de carácter indígena de los pueblos y barrios originarios, el cual se sobreentiende al afirmar la presencia histórica antes de la conquista.

Así, nuestro ordenamiento jurídico, en una interpretación conjunta de lo establecido por nuestra Constitución Federal en armonía con los Tratados Internacionales en la materia, y lo establecido en nuestra Constitución Local, reconoce el carácter de destinatario de las normas en materia de derechos de las comunidades indígenas a los Pueblos y Barrios Originarios.

Tal conclusión se robustece por el criterio emitido por el 10º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa del Primer Circuito, que reconoce de forma expresa el carácter de pueblo indígena de los pueblos originarios de la siguiente manera:

"PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SON PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME AL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL Y LA

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN TANTO QUE DESCIENDEN DE LAS POBLACIONES QUE HABITABAN EL VALLE DE MÉXICO Y SE AUTOADSCRIBEN DE MANERA COLECTIVA COMO TALES. Los pueblos originarios de la Ciudad de México son pueblos indígenas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 24 de enero de 1991, **que coinciden en identificar como pueblos indígenas, entre otros, a aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, cualquiera que sea su situación;** asimismo, ambas normas coinciden en regular que la conciencia de su identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Dichos pueblos descienden de los que habitaban el Valle de México, debitarios de la gran Ciudad de México–Tenochtitlán, y en un proceso de reconstrucción de identidad, se hacen llamar a sí mismos "pueblos originarios", siendo esto una nota adicional de su autoadscripción colectiva como pueblos indígenas y de su lucha que encarna una reivindicación histórica y un reconocimiento y orgullo renovados respecto de sus orígenes, por ello, son titulares de los derechos que les concede el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que nuestro país sea Parte."

Dada la pluriétnicidad de la Ciudad de México, el artículo 22 refiere una noción de originario, al reconocer a estos en términos generales como aquellas que han nacido en su territorio, pero no se define la temporalidad en el mismo; el fin y el grupo que abarca son de otra naturaleza, aunque el problematizarlo de manera breve en este apartado será de mucha ayuda para la hipótesis planteada en esta investigación.

Retomando el tema de los derechos de los pueblos originarios, su contenido y alcance ha quedado establecido en el Capítulo VII que lleva por título Ciudad pluricultural, en el Artículo 59 titulado De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la CPCDMX, los cuales serán solamente enunciado dada la amplia gama de disposiciones que forman parte de este apartado.

Así, el precepto en comento reconoce su derecho a la libre determinación y autonomía; a la participación política; a la comunicación; una serie de derechos culturales; al desarrollo propio; a la educación; a la salud; derecho de acceso a la justicia; derechos laborales; a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, todos ellos reafirmando las prácticas culturales de los mismos coloquialmente conocidas como usos y costumbres.

El derecho que nos resulta pertinente al estudio del presente asunto es el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, el cual se encuentra regulado en el artículo 59 de la CPCDMX, el cual por fines de relevancia para el presente asunto se cita lo pertinente a continuación:

"Artículo 59 De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes

A. Carácter jurídico

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que establece la presente Constitución.

[...]

C. Derechos de participación política

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales:

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;

*2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el **derecho a participar en la toma decisiones públicas** a través de su integración en los órganos consultivos y de gobierno; (...)"*

A fin de mantenerse una legislación vanguardista en pro de la mayor protección de los derechos de las comunidades indígenas, la CPCMDX amplía el núcleo del derecho a la libre determinación de los pueblos que se materializa a través de consulta a las comunidades indígenas, refiriendo a los beneficiarios del tal derecho más allá de lo establecido por nuestro artículo 2º Constitucional, enunciando de forma expresa a los barrios y pueblos originarios.

Esto es, existe una obligación en términos de lo dispuesto en la constitución de la Ciudad de México, de consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes frente a cualquier modificación legislativa que pueda afectar sus derechos. Es parte del proceso que se debe seguir en torno a modificaciones legislativas, para salvaguardar el derecho de esta minoría.

Tal facultad deriva del principio de progresividad y no regresión respecto del contenido y alcance de los derechos, siendo reconocida expresamente como constitucional por nuestro Tribunal Supremo, como se aprecia de la tesis que se cita a continuación:

"DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las

condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, **sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos¹⁷.**

De igual manera, la presente legislación tuvo a bien amplificar el alcance del derecho en análisis respecto de las decisiones que se encuentran sujetas a la obligación de ser consultadas.

En concordancia con lo anterior, el reconocimiento del derecho a la consulta derivado de la pluriethnicidad de la Ciudad de México se encuentra ampliamente contemplado y regulado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México de la siguiente manera:

“Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación

1. Los poderes públicos adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, de acuerdo con el grado de desarrollo democrático, social y económico de la Ciudad, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.

2. Los derechos previstos en la presente ley constituyen un catálogo enunciativo no limitativo para la supervivencia, la revitalización, la dignidad y el bienestar de los pueblos, barrios y comunidades. Ninguna disposición se interpretará en el sentido de menoscabar o limitar los derechos de éstos y sus integrantes.

3. En la interpretación y aplicación de la presente ley prevalecerá la norma más protectora o la interpretación más extensiva en el reconocimiento de derechos e, inversamente, la norma o la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones para su ejercicio.

Artículo 25. Deber de las autoridades para realizar consultas previas, libres e informadas

1. Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios y comunidades y, estos tienen el derecho a ser consultados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e

¹⁷ Segunda Sala. Novena Época. Tesis: 2a. CXXXIX/2002. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 446; TA.

intereses. Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los acuerdos resultantes de las consultas serán vinculantes, dentro del marco constitucional. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.

2. Las consultas estarán orientadas a:

- a) **Garantizar la participación efectiva de los pueblos, barrios y comunidades en el proceso de adopción de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles;**
- b) Salvaguardar los derechos e intereses de los pueblos indígenas en las medidas administrativas o legislativas, y
- c) Llegar a acuerdos basados en estándares de derechos humanos, respecto a la medida administrativa o legislativa.

3. Las consultas se regirán por los siguientes principios:

- a) De buena fe: implica el establecimiento de un clima de confianza mutua entre las partes y la disposición de llegar a acuerdos vinculantes;
- b) De manera previa: **el proceso de consulta debe realizarse antes de la adopción de la medida;**
- c) Libre: las autoridades garantizarán el derecho de los pueblos, barrios y comunidades a participar en los procesos de consulta sin que medien actos de presión, violencia, amenaza, manipulación, sujeción, subordinación, coacción, cooptación, desinformación, intimidación, engaño o uso de la fuerza, o cualquier otro sobre los consultados;
- d) Informada: las autoridades que realizan la consulta deben proporcionar información completa, veraz, oportuna y de modo culturalmente adecuado, acerca del proceso y de la medida legislativa o administrativa en preparación y de sus implicaciones, impactos o afectaciones para los derechos de los pueblos indígenas, así como de los procesos de consulta;
- e) Transparencia: la información del proceso de consulta será abierta y se publicará en los medios oficiales de las dependencias que realizan los procesos de consulta;
- f) Culturalmente adecuada: las autoridades consultarán a través de procedimientos culturalmente adecuados y, cuando corresponda, en las lenguas indígenas, teniendo en cuenta los sistemas normativos propios de los pueblos, barrios y comunidades para la toma de decisiones y establecimiento de acuerdos;
- g) Acorde a las circunstancias: la consulta debe desarrollarse mediante procedimientos y plazos apropiados al tipo de medida que se busca adoptar y tomando en cuenta las circunstancias, necesidades y características especiales de los pueblos, barrios y comunidades involucrados, tales como ubicación geográfica y composición demográfica;
- h) Equidad de condiciones para dialogar y llegar a acuerdos: los pueblos, barrios y comunidades podrán contar con apoyo de parte de las autoridades, para la capacitación y asistencia técnica para participar en los procesos de consulta en equilibrio de condiciones, a solicitud de los mismos;
- i) **Principio pro persona: la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas es el fundamento de la consulta y todo el proceso estará guiado por la protección más amplia a éstos;**

j) *Acuerdos incluyentes*: los acuerdos deben considerar, en su caso, mitigaciones de impactos, gestión o seguimiento conjunto, procedimientos de reclamo adecuados, y

k) *Deber de acomodo*: implica el deber de las autoridades de modificar o, en su caso, hacer ajustes a la medida sometida a consulta para respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En caso de no alcanzar acuerdos, si la autoridad decide continuar con la medida, debe proporcionar motivos fundados, objetivos razonables y, en su caso, realizar los ajustes a la propuesta original para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, a fin de incorporar acciones de mitigación, compensación y reparación.

Artículo 26. Procedencia de la consulta

1. Las medidas administrativas o legislativas deberán ser sometidas a consulta en los siguientes supuestos:

I. En cumplimiento de las obligaciones de consulta previa indígena establecidas en la Constitución Federal, leyes federales, generales y locales, en los tratados e instrumentos internacionales;

II. Por resolución de la autoridad responsable de la medida administrativa o legislativa;

III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes podrán solicitar el cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, previa resolución fundada y motivada emitida por autoridad competente y garantizando el derecho de audiencia de las y los peticionarios, y

IV. Por resolución judicial.

2. Tratándose de la resolución prevista en la fracción III del presente artículo, la autoridad resolverá en un plazo no mayor a 15 días.

3. Se consultarán los actos susceptibles de afectar sus derechos. No serán objeto de consulta las medidas en materia fiscal, presupuestal, derechos humanos, penal, protección civil en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y nacional; las facultades expresamente conferidas al gobierno federal; así como los actos de mero trámite ni la estructura orgánica y de funcionamiento de los poderes públicos. Ningún proceso de consulta podrá desarrollarse con el objetivo de menoscabar los derechos humanos.

Artículo 29. Requisito de consentimiento previo libre e informado **Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de los sujetos de consulta en el caso de medidas que implican afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas o que ponen en riesgo la supervivencia de un pueblo, barrio o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el Derecho Internacional, la Constitución Federal y local así como la presente Ley."**

Según los artículos previamente citados, la Ley que se enuncia tiene por objeto reconocer, proteger, promover y garantizar de la manera más amplia, en concordancia con el principio pro persona, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, lo cual se logra a través de la consulta tanto a los pueblos y barrios originarios, como a las comunidades indígenas, estableciendo supuestos de procedencia de consulta mucho más amplios, entre los cuales se encuentra el caso pertinente al asunto en estudio en el presente escrito inicial.

Bajo la misma línea de pensamiento, el derecho a la libre determinación de los barrios y pueblos originarios y las comunidades indígenas también se ve reflejado a partir del ejercicio de la democracia respecto a las decisiones pertinentes a la Ciudad de México, el cual se realiza a partir de la participación ciudadana a la que tienen derecho, conforme a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual establece el uso de Mecanismos de Democracia Directa e Indirecta.

La Democracia directa, que conforme al artículo 16 de la ley en comento debe entenderse como “[...] aquella por la que la ciudadanía puede pronunciarse, mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones del poder público” se materializa a través de instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, una de ellas y la más relevante para las comunidades originarias e indígenas, la Consulta Popular.

El artículo 53 de la ley en análisis refiere que “la Consulta Popular es el mecanismo a través del cual el Congreso somete a consideración de la ciudadanía en general, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga impacto trascendental en todo el territorio de la Ciudad.”

Se entiende que nos encontramos ante un tema de trascendencia en el territorio de la Ciudad cuando repercute en la mayor parte de las demarcaciones territoriales; y que impacte en una parte y de manera significativa de la población de la Ciudad, conforme a lo establecido por el artículo 54 de la ley referida.

Ante el supuesto previamente establecido, el siguiente artículo de la ley establece que el Congreso deberá convocar a consulta tales temas a petición de los siguientes sujetos:

- I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;*
- II. Una tercera parte de los integrantes del Congreso;*
- III. Una tercera parte de las Alcaldías;*
- IV. Al menos dos por ciento de las personas ciudadanas inscritas en la Lista Nominal de Electores;*
- V. El equivalente al diez por ciento de las Asambleas Ciudadanas; y*
- VI. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.”**

Por tanto, la consulta popular es de gran relevancia para garantizar el ejercicio de la democracia directa tratándose de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas.

Por otro lado, otra forma de participación ciudadana que tienen los sujetos a que se refiere el presente apartado es la democracia participativa, la cual se materializa en el caso concreto a través del presupuesto participativo de la siguiente manera:

“Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades

territoriales. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.

Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

[...]

Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de

las demarcaciones territoriales conforme a lo siguiente:

I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alicuota entre las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad.

[...]"

Así, la legislación local actual busca fomentar la inclusión de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas, en protección al derecho de libre determinación y autonomía, a través de sus distintas modalidades ya enunciadas, con la finalidad de respetar y garantizar su participación dentro de las decisiones más relevantes de nuestra ciudad.

En ambos casos que se mencionan, **la autoridad encargada de los procesos de participación ciudadana enunciados será el Instituto Electoral de la Ciudad de México**, el cual deberá actuar en la mejor de sus aptitudes y capacidades para asegurar la protección de los derechos de participación ciudadana con los que cuentan los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los últimos párrafos del artículo 10 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que refiere lo siguiente:

*"En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, consulta sobre presupuesto participativo y revocación de mandato, así como en la elección de las y los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, **el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados**, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia.*

Este Código reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de la Constitución Federal los tratados internacionales y la Constitución Local."

El Código en estudio hace especial énfasis en la relevancia de los procedimientos y mecanismos de protección ciudadana tratándose de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas en su artículo 362, tal como se observa a continuación:

*“Artículo 362. Son procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el referéndum, la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación de mandato, así como los procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, conforme a la Ley de Participación. **El Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana.** El Instituto garantizará la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que la Ley de Participación y este Código señalen*

***Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes tienen derecho a ser consultadas en los términos de que establece la Constitución Local y los tratados internacionales. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la Ley de Participación.** La Ley de Participación, establecerá las reglas para la preparación, recepción y cómputo de la votación, de los mecanismos de participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las normas que el Consejo General del Instituto Electoral determine. El Instituto Electoral, a través de su Consejo General, podrá acordar, en las consultas que organice, mecanismos electrónicos e informáticos que faciliten la participación ciudadana cuidando la transparencia y la seguridad de su instrumentación.”*

Por tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas respecto al su libre determinación y autonomía en la Ciudad de México, razón por la cual es indispensable la protección de su adecuado funcionamiento.

En particular, los procesos de participación ciudadana, si bien algunos se llevan a cabo en colaboración del Congreso Local, su supervisión y vigilancia se rigen por las acciones realizadas por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Consejo General Instituto Electoral de la Ciudad de México, misma que cuenta con las siguientes facultades:

“Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación:

I. Supervisar los procesos electivos de los Órganos de Representación Ciudadana, y proponer, de ser el caso, al Consejo General la documentación y materiales correspondientes que formule la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como los relativos a la organización de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;

- II. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;*
- III. Supervisar y opinar sobre los contenidos, materiales e instructivos de capacitación, correspondientes a los mecanismos de participación ciudadana; así como sobre los instructivos y el material didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación electoral, bajo los criterios o lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional.*
- IV. Orientar los procesos y aprobar los mecanismos e instrumentos de evaluación de las actividades de los Órganos de Representación Ciudadana, el Programa de evaluación del desempeño, así como validar los informes que se someterán a la consideración del Consejo General, para su posterior remisión al Congreso de la Ciudad de México;*
- V. Proponer al Consejo General los programas de capacitación en materia de participación ciudadana, así como el contenido y las modificaciones de los planes de estudio, materiales, manuales e instructivos de educación, capacitación, asesoría y comunicación de los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas, y ciudadanía en general, elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, y supervisar su debido cumplimiento;*
- VI. Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación de los mecanismos de participación ciudadana;*
- VII. Revisar el expediente y presentar a la consideración del Consejo General, el proyecto de dictamen de las solicitudes de registro de los ciudadanos que pretenden constituirse como Organizaciones Ciudadanas;*
- VIII. Proponer a la Presidencia del Consejo la celebración de convenios de apoyo y colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en materia de promoción de la participación ciudadana, capacitación y logística de los Consejos Ciudadanos;*
- IX. Opinar respecto del contenido e imagen de campañas informativas, formativas y de difusión en materia de participación ciudadana;*
- X. Proponer a la Presidencia del Consejo la celebración de convenios de apoyo y colaboración con instituciones públicas de educación superior, organizaciones académicas y de la sociedad civil, en materia de participación ciudadana; y*
- XI. Aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el Instituto Electoral con motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, elaborados por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación;*
- XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y procesos electivos;*
- XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto Electoral, en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto Nacional y los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral; y*
- XIV. Las demás que, sin estar encomendadas a otra Comisión, se desprendan de la Ley de Participación."*

De la misma manera, el Consejo cuenta con comités permanentes, entre los cuales hay facultades encaminadas a proteger los derechos de los pueblos originarios, como lo son el Comité de Educación Cívica, como se refiere en el artículo que se cita a continuación:

"Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía:

(...)

VI. Revisar, observar y aprobar las actividades formativas, talleres y cursos en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad que faciliten a sus habitantes la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, y difundan información sobre el derecho y el deber de las y los ciudadanos de participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por la Constitución Local y la ley de la Materia, contemplando para este fin el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación; (...)"

También vale la pena mencionar que entre las facultades del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México está la aprobación de los informes anuales respecto al desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los pueblos y barrios originarios, contemplado en el artículo 50 fracción XXXVI de la siguiente manera:

"Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

XXXVI. Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y barrios originarios, y ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia; [...]"

Como se observa de los preceptos que fueron citados con anterioridad, el Consejo General del IECM tiene diversas funciones encaminadas a proteger el ejercicio de la participación ciudadana para los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas. Por tanto, es válido afirmar que el Consejo General tiene un papel crucial en la protección de los derechos de los pueblos originarios, así como en la vigilancia de su funcionamiento adecuado.

Por lo anterior, una reestructuración tan importante como la que se ha llevado a cabo a partir de la reforma en comento, debió haber sido consultada con los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, por generarse una afectación material en el cumplimiento de las facultades encomendadas al consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, no fue así.

Como se mencionó en apartados anteriores, el 17 de febrero de 2022 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reformaban diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el cual fue presentado por el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Tal iniciativa representaba para el Instituto Electoral de la Ciudad de México un desequilibrio y desestabilización, pues tenía como propósito, entre otras modificaciones, eliminar 5 áreas especializadas del IECM, así como eliminar la capacidad del Consejo General de crear órganos técnicos de especialización.

Como tuvo a bien mencionarse con anterioridad en el apartado de Antecedentes del presente escrito inicial, el Congreso de la Ciudad de México decidió aprobar la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México en cuestión, y fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 2 de junio de 2022, eliminando el área de Derechos Humanos y Género, perdiendo la especialización de la cual contaba la Comisión para crear la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, así como la fusión y completa eliminación del varios comisiones permanentes del Consejo General, decisión que fue tomada por el Congreso Local más de tres meses y medio después de haber sido presentada inicialmente la iniciativa sin realizar ninguna consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.

Como consecuencia de la reforma, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sufrió una merma considerable en su funcionamiento, pues al perderse la especialidad dentro de las áreas eliminadas vulnera la calidad de actuación del Consejo General.

La merma antes mencionada a la actuación del Consejo General afecta todas las áreas en las cuales se divide, entre las cuales se incluyen la Comisión Permanente de Participación Ciudadana que es determinante para el efectivo ejercicio de la participación ciudadana por parte de los pueblos originarios.

Como ya se mencionó al principio del presente apartado, el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para participar efectivamente en los procesos de deliberación y toma de decisiones en aquellos casos en los cuales la legislación incide en sus derechos.

Por tanto, la reforma al código presenta una afectación considerable en los derechos de los pueblos originarios, tanto en la protección de la capacidad de ejercitar la participación ciudadana en aras de tener la posibilidad de participar en las decisiones relevantes de la Ciudad de México, como en su derecho a la consulta, deviniendo en una omisión de garantizar el acceso efectivo de los integrantes de estos pueblos, barrios y comunidades.

Para ello, no basta prever un deber de procurar; sino que es preciso establecer acciones encaminadas a asegurar que tales procesos se lleven a cabo de forma adecuada a través de la vigilancia de la actuación del Congreso Local; esto es, respetando el derecho de dicha minoría a participar en el proceso legislativo a través de la Consulta prevista en el artículo 59, transcrito en párrafos precedentes.

En definitiva, la reforma al Código impugnado implica una medida regresiva para los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y una violación directa al artículo 59 de la Constitución de la Cdmx, tanto en su fondo como en su forma, al impedir el pleno ejercicio de los mecanismos específicamente creados con la finalidad de garantizar la posibilidad de formar parte de las decisiones de nuestro país, en particular de la Ciudad de México, cuyo valor histórico, social y cultural es trascendental.

QUINTO: LOS ARTÍCULOS 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95, Y 98 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON CONTRARIOS A LO DISPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1º Y 7º DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; 3º Y 26

DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; 2.2 Y 3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; II DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; 1.1 Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Y ARTÍCULO 3º DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, YA QUE AFECTAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A LA IGUALDAD EN RAZÓN DE GÉNERO, POR LO SIGUIENTE:

El derecho a la igualdad de género está reconocido en los artículos 1º y 4º de la Constitución. El quinto párrafo del artículo 1º constitucional prohíbe expresamente la discriminación por motivos de género, mientras que el artículo 4º establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, como se enuncia a continuación:

“Artículo 1o.-

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

La protección especial de la que gozan las mujeres dentro de nuestro ordenamiento jurídico obedece al orden social en el cual se desarrollan, en el cual se vive una violencia estructural que busca mantener a las mujeres en una posición de subordinación frente de los hombres, y, por tanto, limita de forma significativa el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Es decir, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres dentro de nuestra sociedad tiene como consecuencia la necesidad de establecer mecanismos de protección para garantizar la igualdad de género dentro de nuestro país, tanto legales como institucionales, con la finalidad de garantizar una igualdad formal y sustantiva para las mujeres.

Lo anterior con apoyo en la tesis emitida por la Primera Sala del Máximo de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades

de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular¹⁸.”

En cuanto a las normas de fuente internacional, el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de género se encuentra reconocido en diversos instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención Belém do Pará.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye el primer instrumento internacional con carácter vinculante para atender directamente los derechos de las mujeres, en específico, mediante la proscripción de la discriminación en contra de la mujer. La CEDAW define en su artículo primero a la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Por tanto, la obligación del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la igualdad en razón de género conlleva la implementación de acciones que busquen un acceso efectivo al goce y ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en alguna situación de desventaja sustantiva frente a otros, las cuales pueden ser pasivas, entendiéndose como tal la obligación de abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro el derecho a la igualdad, o pueden ser activas, que son acciones en las cuales el gobierno implementa medidas para garantizar el goce pleno del derecho a la igualdad.

En el caso concreto, uno de los derechos cuya protección ha sido motivo de lucha por varias décadas han sido los derechos político electorales de las mujeres.

El pleno goce de los derechos político electorales de las mujeres deviene del estudio sistemático de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enunciados con anterioridad, estudiándose en concordancia con el artículo 35 que reconoce los siguientes derechos político electorales de todos los ciudadanos:

¹⁸ Primera Sala. Décima Época Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 431; TA.

I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular [...];
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
[...]; VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley [...].”

A partir de la reforma político-electoral de 2014 y la reforma constitucional de 2019, se amplía el núcleo esencial del derecho a la igualdad de género respecto a la paridad de género y los derechos político-electorales de las mujeres, creando legislación en materia de protección a los derechos político electorales de las mujeres, como fue el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual concibe a la violencia política de género en su artículo 20 Bis, en los términos siguientes:

“ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

*Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o **tengan un impacto diferenciado en ella.***

*Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y **puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales**, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.”*

“ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
[...]

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que **lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.** La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.”

Así mismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo propósito es velar por el adecuado cumplimiento de los estándares de legalidad y

de máximo respeto a los Derechos Humanos dentro de las instituciones y procedimientos electorales, contempla el derecho al ejercicio de los derechos político electorales libres de violencia política de género, en el artículo 7 de su ley, enunciado a continuación:

“Artículo 7.

*1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. **También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades** y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.*

[...]

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

A partir de los preceptos previamente citados, la violencia de género debe entenderse como una vulneración a los derechos políticos de las mujeres de manera institucional, que se traduce de manera directa o indirecta en una afectación en la posibilidad de las mujeres de formar parte de la vida política del país, y participar de la toma de decisiones de una forma democrática, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, **repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales**, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla¹⁹.

Por su parte, la violencia política de género conlleva a una obligación por parte del Estado Mexicano de implementar medidas e instituciones con la finalidad de llevar a cabo las acciones correspondientes para erradicar la violencia de género.

Las acciones tendientes a erradicar la violencia de género debe llevarse a cabo por todos los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, pues el incumplimiento del Estado Mexicano de cumplir con su obligación de velar por el derecho a la igualdad en razón de género conllevaría a incurrir en violencia institucional en contra de las gobernadas, como se aprecia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyos preceptos se encuentran citados a continuación:

“CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

¹⁹ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2016). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (Segunda Edición). https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf

ARTÍCULO 18.- *Violencia Institucional: Son los **actos u omisiones** de las y los servidores públicos de **cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres** así como su **acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.***

ARTÍCULO 19.- *Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean **capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.***

ARTÍCULO 20.- *Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.”*

Tal obligación, como es evidente, también debe ser llevada a cabo por los organismos electorales, como son el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, pues son los órganos garantes de los derechos político-electorales de la ciudadanía, y en el caso concreto, de los derechos político-electorales de las mujeres.

Tal obligación se ve plasmada en el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:

“Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales

ARTÍCULO 48 Bis.- *Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias:*

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y

III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.”

En virtud de lo anterior, y con el propósito de cumplir con la obligación del Estado Mexicano de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconoce nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que forma parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, **mediante acuerdo IECM/ACU-CG-021/201910, tuvo a bien aprobar la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH)**, la cual se constituye en estricto apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de género, con la finalidad de proteger los derechos político electorales de las mujeres ciudadanas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el acuerdo de creación de la UTGyDH citado con anterioridad, tal unidad tendrá las facultades de vigilar que el Instituto Electoral y sus Órganos desconcentrados actúen de acuerdo a la promoción, respeto y protección de los principios establecidos en las Constituciones Federal y Local; institucionalizando la perspectiva de género y derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados del Instituto Electoral, y promoviendo mecanismos de coordinación externa con instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles y partidos políticos para instrumentar acciones que fortalezcan la cultura político-electoral y contribuyan a una democracia igualitaria e incluyente.

La creación de la ahora extinta UTGyDH contaba con una estructura interna de 15 plazas presupuestales distribuidas en una de Titular de Unidad Técnica, dos Direcciones de Área, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas de Departamento, dos Analistas, un Analista Administrativo, una Secretaría de Unidad, y un Auxiliar de Servicios. El personal que ocupaba las plazas mencionadas era altamente especializado en materia de género, capacitado para abordar la problemática en materia de derechos humanos que presenta nuestro país, en particular en temas de derechos político electorales de las mujeres.

Conforme a lo mencionado en el acuerdo IECM/ACU-CG-021/201910, los objetivos de la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos eran los siguientes:

- *Adoptar las reformas legislativas y de política pública necesarias a fin de que el principio de igualdad sustantiva se traduzca, en la práctica, en un mandato para la participación paritaria en los tres poderes y niveles de gobierno donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia, los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales.*
- *Fortalecer el proceso de armonización constitucional y legislativa en las entidades federativas, a fin de incluir las dimensiones de paridad horizontal y vertical, como principio jurídico y como regla, que constituyan una obligación para los partidos políticos.*
- *Implementar acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el ejercicio de cargos en espacios de toma de decisiones y que garanticen la participación de mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, entre otras.*
- *Incrementar los recursos y las inversiones públicas para garantizar la igualdad de género, el apoyo a la promoción, capacitación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres; el monitoreo y la rendición de cuentas, así como aplicar oportunamente los recursos destinados a estas acciones*
- *Incrementar el número de observatorios para la participación política de las mujeres en las entidades federativas y fortalecer los existentes, así como apoyar a las redes que desde la sociedad civil defienden los derechos de las mujeres y vigilan la aplicación de las leyes en materia de paridad.*

Conforme al artículo 68 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, previo a la reforma, la UTGyDH contaba con las siguientes facultades:

I. Proponer al Consejo General, los manuales, lineamientos y reglamentos necesarios para la promoción de los derechos humanos e igualdad de género;

II. Aprobar el Programa de Derechos Humanos e Igualdad de Género que le proponga la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, y conocer de los informes que al respecto ponga a su consideración la propia Unidad para, en su caso, proponer las medidas correctivas;

III. Revisar los documentos de planeación institucional estratégica y operativa y proponer la transversalidad de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en su contenido;

IV. Revisar la implementación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, en las tareas institucionales;

V. Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y al personal de la Rama Administrativa;

VI. Supervisar los procesos institucionales que favorecen la participación y representación política de las mujeres;

VII. Opinar sobre las publicaciones institucionales en materia de género y derechos humanos;

VIII. Supervisar la implementación de los mecanismos que favorecen una cultura institucional incluyente, no discriminatoria y no sexista en el Instituto Electoral;
y IX. Las demás que se señalen en este Código, y en la normatividad aplicable”.

Tal unidad, como menciona su acuerdo de creación, realizaba una plétora de actividades, no solamente se restringía a las actividades enunciadas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, sino que cumplía con las atribuciones que le confiera el Reglamento Interior del Instituto Electoral y otras leyes en materia de género.

Así, la reforma publicada el 2 de junio de 2022 al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México transgrede lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la; 1º y 7º de la declaración universal de los derechos humanos; 3º y 26 del pacto internacional de derechos civiles y políticos; 2.2 y 3 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; 1.1 y 24 de la convención americana sobre derechos humanos, y artículo 3º del protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales: “protocolo de san salvador”; además del gravísimo detrimento a su autonomía y funcionalidad en general que se mencionó en apartados anteriores, la pérdida de su especialización en materia de

género y derechos humanos, afectando de manera formal y sustantiva el derecho a la igualdad en razón de género.

Además, la reforma combatida es contraria a los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, pues lejos de cumplir con la obligación del Estado Mexicano de incrementar en la medida de lo posible el grado de protección de todos los derechos humanos, disminuye la protección del derecho a la igualdad en razón de género tratándose de derechos político-electorales de forma injustificada.

Lo anterior, con apoyo de la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, de texto y rubro siguientes:

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, **el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.** En tal sentido, **el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual,** pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.”²⁰

Asimismo, si bien tales modificaciones al Código en análisis se buscaron justificar en un principio de austeridad, tal principio es incompatible con la obligación del estado de hacer uso del máximo de los recursos disponibles para evitar la restricción de los derechos humanos, en virtud del principio constitucional y convencional de progresividad y no regresión.

Lo anterior encuentra sostén en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, la cual por su relevancia se cita a continuación:

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que

²⁰ Segunda Sala, Décima Época, Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980; J.

justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, **cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición**, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: **a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor.** Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos²¹.

Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, particularmente, los de las minorías sociales. Al respecto, en el caso *Atala Riffo y Niñas vs. Chile* sobre prohibición de discriminación por la orientación sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló:

"279. La Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Es decir, los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen."

De igual forma, en su Opinión Consultiva OC-24/17²², la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que: ***"Los Estados están obligados a adoptar medidas***

²¹ Primera Sala. Décima Época. Tesis: 1a/JJ. 87/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 188; J.

²² Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica, Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del mismo Sexo. Disponible en línea http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas.”

De esta manera, para dar cumplimiento a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, prevista en los artículos 1º de la Constitución General, 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe declararse la inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues tienen una menor protección al derecho a la igualdad en razón de género de manera injustificada; así no puede formar parte de nuestro sistema jurídico, ninguna medida que tenga como consecuencia una merma dentro del derecho a la igualdad, además que únicamente encontraría justificación una vez que la autoridad hubiera agotado todos los esfuerzos y recursos posibles para garantizar la mayor protección de los derechos humanos del gobernado, supuestos que no se actualizan en el caso en análisis, por lo que tal reforma es a todas luces inconstitucional.

Por todo lo expuesto es clara la inconstitucionalidad de los artículos 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95, y 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al ser contrarios al derecho de igualdad de género en su vertiente de evitar la violencia política de género.

SEXTO. LO CONSTITUYE EL DECRETO QUE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 98, ASÍ COMO LAS FRACCIONES V, VII Y IX DEL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CIPE) CONSISTENTE EN LA ELIMINACIÓN DE LA FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL PARA CREAR UNIDADES TÉCNICAS ADICIONALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LOGRO DE LOS FINES DEL INSTITUTO Y LA ELIMINACIÓN DE TRES COMISIONES PERMANENTES (IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, FISCALIZACIÓN Y VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS).

Las reformas que se deben tildar de inconstitucionales son porque violan a la autonomía en el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el Dictamen que dio origen a la iniciativa se establece que las reformas propuestas están encaminadas a la optimización de competencias, al gasto eficiente y los costos de la democracia y a la necesidad de contar con autoridad administrativa austera, racional y eficaz que organice procesos electorales menos onerosos.

Aduce el considerando segundo del dictamen que dio origen a la iniciativa de reforma que esto implica la disminución de la estructura electoral y redistribución de competencias y funciones para optimizar el gasto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Para ello, el Congreso de la Ciudad de México, reformó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que **tiene 3 objetivos fundamentales:**

- **Eliminar la facultad del Instituto Electoral de la Ciudad de México para crear Unidades Técnicas distintas a las legalmente establecidas en la ley;**
- **Eliminar cinco Unidades Técnicas (Igualdad de Género y Derechos Humanos, de Fiscalización, de Vinculación con Organismos Externos, Archivo, Logística**

y Apoyo a los Órganos Desconcentrados, y Centro de Formación y Desarrollo) y trasladar sus funciones a cuatro órganos ejecutivos (Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Asociaciones Políticas y Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía), lo cual, tiene como consecuencia la desaparición de plazas; y

- Eliminar tres Comisiones Permanentes (Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización y Vinculación con Organismos Externos).

Sin embargo, esta reforma es contraria al principio de autonomía de los órganos estatales constitucionales autónomos, se viola su independencia e implica una merma al ejercicio de la función electoral eficiente, tal como se expondrá a continuación:

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía popular se ejerce a través de los poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial), lo cierto es que ciertas funciones estatales, están encomendadas a órganos constitucionales autónomos, lo cual tienen el objetivo de defender o hacer efectivo el ejercicio de derechos fundamentales y así controlar la constitucionalidad de ciertos actos que originalmente estaban depositados en algún poder de la Unión.

Su propio origen, naturaleza, andamiaje (presupuestal y orgánico), funcionamiento y fin, los hace independientes de los demás poderes u órganos del Estado.

Tesis: P./J. 20/2007 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: **1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.** **2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.** 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en **atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.** Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: **a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.**

Los artículos 41, Base V, párrafo primero y Apartado C; 122, fracción VII en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 31, 33 y 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen:

CPEUM

Artículo 41. (...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

(...)

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;**
- 2. Educación cívica;**
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

(...)

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

(...)

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.

Artículo 116. (...)

(...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

(...)

Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, **gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones**, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

El artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, prevé:

Artículo 98.

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. **Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones**, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño.

Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Constitución Política de la Ciudad de México.

La CPCM establece:

Artículo 46 Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política.

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; **cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.** Estos serán:

(...)

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

(...)

B. Disposiciones comunes.

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. **Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia,** así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

(...)

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. CIPE.

Por último, el CIPE establece:

Artículo 31. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, **gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones,** en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen **para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código.** Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto.

Artículo 36. (...)

(...)

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:

(...)

Los órganos constitucionales autónomos, tienen como característica fundamental pertenecer al Estado y ser independiente a los tres poderes en que se divide el ejercicio del poder soberano en nuestro país (Poder ejecutivo, legislativo y judicial).

Su propia denominación es el rasgo fundamental para ejercer una función estatal de forma autónoma. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se encarga de organizar las elecciones para la renovación periódica de la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como en los ejercicios de participación ciudadana reconocidos en su Constitución Local y Ley de Participación Ciudadana.

La **autonomía de funcionamiento** regulada en el artículo 116 de la Constitución Federal, significa la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades e involucra los siguientes tipos de autonomía:

- **Autonomía técnica.** Capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia que les ha sido asignada;
- **Autonomía orgánica:** La no dependencia jerárquica de algún otro poder o entidad;
- **Autonomía financiera-presupuestaria:** para definir y proponer sus propios presupuestos y disponer planificada y libremente de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines;
- **Autonomía normativa:** para dictar y aprobar los reglamentos, lineamientos, manuales y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas;

Para ejercer sus funciones con **autonomía plena**, ningún otro poder debe acotar o suprimir alguno de los cuatro tipos de autonomía antes enunciados, pues hacerlo, limita la posibilidad de gobernarse sin acotación o injerencia de otro poder estatal.

En el caso concreto, la legislatura local al eliminar la facultad del Consejo General del IECM para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines de la institución, **se entromete en asuntos que corresponde dilucidar con autonomía técnica y de gestión, orgánica y normativa al IECM.**

La eliminación de esta atribución (párrafo tercero del artículo 98 del CIPE) no se vincula a la austeridad alegada en la exposición de motivos (contenida en el dictamen que dio origen a la iniciativa) de la reforma aprobada por el Congreso de

la Ciudad de México, ni mucho menos existe razonamiento objetivo alguno, por el cual se demuestre que eliminar dicha facultad, generará eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del IECM.

Eliminar el párrafo tercero del artículo 98 del CIPE, representa un vicio de inconstitucionalidad dentro del marco normativo bajo el cual el IECM está obligado a hacer cumplir la ley²³. La eliminación de su independencia auto organizativa implica una decisión arbitraria y subjetiva del poder legislativo y constituye un antecedente peligroso para vulnerar, a través de una reforma legal, su autonomía de funcionamiento.

Esa pérdida de capacidad de auto organización, pone en riesgo las elecciones y los ejercicios de participación ciudadana, pues el IECM no podrá crear áreas que atiendan nuevas demandas o nuevas atribuciones que por ley, por delegación del Instituto Nacional Electoral o por resoluciones jurisdiccionales se le encomienden, con lo cual, esta reforma **crea normas de imposible aplicación al hacer nugatorias las facultades** establecidas en los artículos 37, párrafo primero, 38, 50, fracción LI y 80, fracción VII del CIPE²⁴, para:

- Modificar su estructura conforme a sus necesidades, suficiencia presupuestal y por atribuciones de delegación que otorgue el INE; y
- Para elaborar, al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del IECM.

Lo anterior es así, porque al IECM le rige el principio general de derecho “*las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite*”, y al quitarle la facultad expresa de poder crear Unidades Técnicas para el adecuado cumplimiento de las funciones conferidas, hace imposible la aplicación de los artículos 37, párrafo

²³ LGIPE.

Artículo 4.

1. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley. (LGIPE)

Artículo 6.

(...)

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley.

(...)

Artículo 27.

(...)

2. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.

²⁴ Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura misma que podrá ser modificada de conformidad a las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral:

(...)

Artículo 38. Los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía de Gestión tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral. El Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

(...)

LI. Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y

(...)

Artículo 80. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

(...)

VII. Elaborar al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto Electoral y proponer al Consejo General los dictámenes correspondientes;

VIII. Someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, el Estatuto del Servicio, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal;

(...)

primero, 38, 50, fracción LI y 80, fracción VII del CIPE, violándose así la autonomía de funcionamiento garantizada en los artículos 122, fracción VII en concordancia con el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la CPEUM; 98 numeral 1 de la LGIPE; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1 de la CPCM y los artículos 31, 33 y 36, párrafo tercero del CIPE.

Al hacer imposible esas facultades, se elimina la autonomía de funcionamiento, pues el IECM no podrá crear las Unidades Técnicas que se requieran para el cumplimiento eficaz de la función electoral.

Es decir, la eliminación de esta facultad, además de vulnerar la autonomía de funcionamiento del IECM, hace que pierda capacidad operativa para el ejercicio eficaz de la función electoral, poniendo en riesgo las elecciones y los ejercicios de participación ciudadana.

Dicha intromisión a la autonomía de funcionamiento queda de manifiesto porque:

- i. Existía la **presunción legal** de que la actual estructura del IECM se organizó, conformó y ajustó desde el 7 de junio 2017²⁵, con base en los principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público y a un modelo de conformación compacta, brindando desde esa fecha eficacia en el ejercicio de la función estatal encomendada, por tanto, esta reforma es injustificada;
- ii. Rompe con la lógica que el sistema nacional de elecciones regula para la interacción entre los organismos constitucionales autónomos y el poder legislativo, a partir de la cual, se puede reestructurar la organización interna del IECM, sin vulnerar su autonomía;
- iii. A partir de la reforma de 2014, el constituyente local sentó las bases bajo las cuáles el IECM debía conformarse en su estructura orgánica y las únicas causales bajo las cuales puede modificarse autónomamente.

Presunción Legal de un modelo de conformación estructural compacta del IECM conforme a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia.

Una presunción legal hace prueba plena, en virtud de que la ley le ha atribuido ese carácter.

En el caso concreto, el poder legislativo de la Ciudad de México fue quien conformó la actual estructura del IECM. La composición orgánica del IECM no fue una decisión arbitraria de este organismo electoral; ésta se efectuó conforme a lo que establecían los artículos 37, 83, 84, 87, 89, 93, 98, 102 y 110 del CIPE vigentes hasta antes de la reforma.

A partir de la entrada en vigor del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ciudad de México (7 de junio de 2017) y hasta antes de la reforma que ahora se impugna, la estructura orgánica y funcional se hizo con base en las atribuciones y responsabilidades previstas en dicho ordenamiento y la **reestructuración** que se hizo—para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional de 2014—se sujetó a los principios de racionalidad, austeridad y

²⁵ Fecha en que se publicó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

eficacia previstos para el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto, tal y como se dio a conocer oportunamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo cual, **existe la presunción legal de que la estructura orgánica vigente** hasta antes de la reforma que ahora se impugna, brinda una mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones encomendadas al IECM, tal y como se prevé en el artículo DÉCIMO TERCERO transitorio del Decreto por el cual se expidió el CIPE:

CIPE

Transitorios.

(...)

DÉCIMO TERCERO: A partir de la entrada en vigor del presente decreto las autoridades electorales contarán con un plazo de 60 días naturales para adecuar y aprobar toda la normatividad interna, su estructura orgánica y funcional con base en las atribuciones y responsabilidades previstas en este Código. Este proceso de reestructuración deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que brinde una mayor calidad en el servicio; hecho lo anterior, dará a conocer lo anterior a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

Por tanto, no existe justificación constitucional, argumento legal (debida fundamentación y motivación), ni parámetro racional y objetivo por parte del Congreso de la Ciudad de México, para determinar y desvirtuar la presunción legal de racionalidad, austeridad y eficacia en la actual estructura orgánica del IECM contemplada en el artículo DÉCIMO TERCERO transitorio, con lo cual, existe razón suficiente para que se **invaliden** todos y cada uno de los artículos adicionados, modificados y derogados del CIPE del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 2 de junio 2022; Vigésima Primera Época, No. 864 Bis. En páginas 4 a la 13 de la publicación señalada.

La interacción entre el IECM y el poder legislativo debe ser fuente originaria para la modificación legal de la estructura orgánica del organismo constitucional autónomo.

Como se reconoce la creación de los órganos constitucionales autónomos electorales, tienen como fin encomendar la realización de una función estatal a un órgano ajeno a los tres poderes constituidos (ejecutivos, legislativos y judiciales), con el fin de evitar cualquier injerencia e influencia de estos en la organización de las elecciones y en los ejercicios de participación ciudadana.

La reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, trajo como consecuencia el dictado de Leyes Generales en la materia²⁶, la modificación de Constituciones y la modificación o dictado de nuevas de leyes electorales locales, conforme al ámbito de atribuciones y competencias.

²⁶ Aquellas que inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano. Estas leyes tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan al Congreso de la Unión a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales conforme al ámbitos de atribuciones y competencias delimitadas en la misma.

En el caso de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México en la que se reconoció como entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

De esta reforma constitucional derivó que el poder constituido en la Ciudad de México creara la Constitución Política de esta entidad federativa y la publicara en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.

A partir de dicha Constitución, el Congreso local reglamentó todo lo concerniente a la renovación periódica de elecciones, a la organización de procesos de participación ciudadana y al diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía, a través del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 7 de junio de 2017 en la Gaceta de la Ciudad de México.

Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales regula la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los supuestos y competencias para su modificación

El párrafo tercero del artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone lo siguiente:

Artículo 41. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión pública y por mayoría de votos.

El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género.

Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México.

(...)

De dicha disposición se desprende que, la participación de una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario como personas invitadas permanentes, tiene como fin la interacción de dos órganos del Estado: el poder legislativo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para identificar las áreas de oportunidad que permitan modificar, adicionar o mejorar las normas electorales o los procedimientos para el ejercicio de la función electoral.

Esa lógica de acercamiento institucional e interacción directa, permiten al poder legislativo identificar conductas o actos que sean susceptibles de atención legislativa, pero también, permite identificar si los procedimientos y estructura del

órgano constitucional autónomo es eficaz. Se trata pues, de una evaluación conjunta sobre la efectividad del marco normativo electoral.

Esa participación directa del poder legislativo en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se permite conforme a una interpretación funcional y sistemática de los artículos 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Esta participación permanente en el Consejo General por parte de quienes integran los Grupos Parlamentarios del Congreso, es armónica con las disposiciones constitucionales y orgánicas que facultan al IECM (organismo constitucional autónomo) a iniciar leyes o decretos en materia electoral:

Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 30 De la iniciativa y formación de las leyes.²⁷

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

(...)

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:

(...)

XCIII. Recibir las propuestas de reforma en materia electoral acordadas por el Consejo General del Instituto Electoral;

Las anteriores disposiciones, interpretadas armónicamente, permiten mantener un diálogo permanente para que, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en caso de ejercer su facultad de promover iniciativas de ley, lo haga coordinadamente y conforme al intercambio de opiniones, puntos de vista o señalamientos que el Poder Legislativo haga en su participación al seno del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La participación permanente de integrantes del Poder legislativo tiene como finalidad que los distintos grupos parlamentarios, al ser representantes del pueblo, alleguen al Congreso de elementos objetivos sobre la eficacia de las normas electorales y del ejercicio de la función electoral. Su naturaleza es de acercar la representación popular a las actividades de la autoridad electoral, para sensibilizarse sobre los procedimientos que implementa y sobre las normas que dicta en cumplimiento a sus atribuciones.

²⁷ Esta atribución también se regula en el artículo 12, fracción VI de la LOCCM

Asimismo, esa participación permanente en el seno del Consejo General, es el elemento idóneo para intercambiar opiniones y diseñar con visión y razón de estado, cualquier modificación o reforma a la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, misma que se diseñó en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales desde el 7 de junio de 2017 y que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, fracción VII en relación con el artículo 116, base IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dota de autonomía en su funcionamiento, por tanto, cualquier cambio a la estructura orgánica de un órgano constitucional autónomo, no puede quedar al arbitrio de uno solo de los poderes, sin que haya existido interacción previa, sobre todo, cuando existe una actuación permanente del órgano legislativo al seno del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual permite planear conjuntamente esa propuesta de modificación a su estructura orgánica.

La participación permanente de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México en el Consejo General del Instituto Electoral, es la fuente originaria para que, en caso de que el poder legislativo quiera realizar modificaciones a la estructura del órgano electoral, lo haga sin afectar su autonomía.

Permitir que el poder legislativo, a través de una reforma legal, modifique la estructura de un organismo constitucional autónomo, sin la debida planeación y diseño de ambos órganos del Estado, abre la puerta a que, con reformas legales, un poder soberano viole la autonomía de funcionamiento de otro órgano del estado, con el objetivo de minar el eficaz ejercicio de la función electoral, al sobrecargar de funciones a un menor número de personas servidoras públicas, lo cual va en detrimento de todos los derechos político-electorales y de participación ciudadana.

Esto es razón suficiente para que se **invalide** el actual decreto de reforma y en armonía con la natural interacción que debe darse entre el poder legislativo y un órgano constitucional autónomo (artículo 37, párrafo tercero Código de Instituciones y Procedimientos Electorales), se establezca qué, tratándose de reformas legales que puedan atentar contra la autonomía de un instituto electoral, la opinión y participación de dichas autoridades es necesaria para cualquier modificación y sobre todo en sus estructuras orgánicas.

Esa ausencia de intercambio, hace que la reforma a la estructura orgánica al Instituto Electoral de la Ciudad de México carezca de estudios y análisis objetivos para lograr los fines por los que supuestamente busca, que son la eficiencia y estructura óptima, sobre todo, porque las modificaciones, adiciones y derogaciones legales, solo traslada funciones de las cinco unidades técnicas que son desaparecidas (junto con su personal adscrito), para que éstas sean absorbidas por cuatro órganos ejecutivos del Instituto, que no cuenta con el personal suficiente ni capacitado para desplegar dichas actividades, e incluso pudiera llegar el momento que debido al cumulo de tareas a desempeñar porque la carga de trabajo, al ser disminuidas y cohesionadas las tareas entre comisiones o unidades), se verían mermadas en la eficacia y profesionalismo con las que se deben desarrollar.

Se debe dejar clara la importancia, relevancia y afectación de las tareas que le han sido encomendadas al Instituto Electoral de la Ciudad de México por lo que se mencionan las disposiciones constitucionales legales federales y locales:

CPEUM

Artículo 41, V, apartado C:

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

LGIPE

Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;
- b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;
- c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
- d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
- f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
- g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;
- h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
- i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;
- j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;

- k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;
- l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;
- m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;
- n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;
- ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;
- o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;
- p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
- q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y
- r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

CLCDMX

ARTÍCULO 25, APARTADO A:

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.
6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultados en los términos de esta Constitución y tratados internacionales.

Artículo 26:

- A. Gestión, evaluación y control de la función pública.
2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.
3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.

Artículo 46:

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

- a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
- b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
- c) Fiscalía General de Justicia;
- d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
- f) Instituto de Defensoría Pública; y
- g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México

B. Disposiciones comunes

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

Artículo 50

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.

3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.

CIPE

Artículo 30. El Instituto Nacional y el Instituto Electoral son las autoridades electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones locales en la Ciudad de México; asimismo, el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado para la solución de controversias en esta materia, cuyas competencias se establecen en la Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, la Ley Procesal, este Código y demás leyes aplicables a cada caso en concreto.

Artículo 31. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

Artículo 32. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará en la Ciudad de México. Su patrimonio es inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto. En ningún caso, podrán recibir donaciones de particulares. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al presente Código.

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

Artículo 34. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución Federal, Leyes Generales, la Constitución Local y este Código, el Instituto Electoral debe:

- I. Observar los principios rectores de la función electoral.
- II. Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones cualquier violación a las mismas; y
- III. Limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, conforme lo dictan las normas aplicables.

Artículo 35. Las autoridades electorales podrán requerir el apoyo y colaboración de los órganos de gobierno y autónomos de la Ciudad de México, así como de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por lo que sus fines y acciones se orientan

a:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto Nacional. Todas las actividades del Instituto se registrarán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, el Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto Nacional;
- b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México;
- c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de

las elecciones de la Ciudad de México en las que participen, así como proporcionar esta información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro respectivo;

d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por su Consejo General, así como suscribir convenios en esta materia con el Instituto Nacional y demás entes que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, establecer el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en los procesos de participación ciudadana, así como en la toma de decisiones públicas que afecten su desarrollo y entorno.

e) Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las demarcaciones territoriales;

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

h) Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad de México cumplan con los lineamientos que emita el Instituto Nacional;

i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

j) Garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;

k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos;

l) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

m) Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;

ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso de la Ciudad de México y los concejales electos en cada alcaldía, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale este Código;

p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana, así como de los mecanismos de

participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo conforme a la Ley de Participación.

q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización integral de los procesos electorales de la Ciudad de México, en los términos que establezcan las leyes respectivas.

r) Realizar campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, que explique la figura de candidatos sin partido y el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el periodo de recolección de éste.

s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana para recibir y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad de México, incluyendo la residente en el extranjero, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los mismos.

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo.

Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en:

- a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos;
- b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las Mesas Directivas.
- c) Ubicar las casillas electorales;
- d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los distritos electorales y la división del territorio de la Ciudad de México en secciones electorales;
- e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la Ciudad de México; y
- f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Las atribuciones adicionales para:

- a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;
- b) Organizar los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México;
- c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la legislación local de la materia;

- d) Llevar a cabo el registro las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la Ciudad de México;
- e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar atención e información a las y los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
- f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto Electoral, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama administrativa del Instituto;
- i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales relacionadas con sus funciones;
- j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas locales;
- k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la materia;
- l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia;
- m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de actos realizados por ese instituto relacionados con los procesos electorales de la Ciudad de México, para su resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determina la Constitución Federal y las leyes generales de la materia;
- n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en este Código;
- ñ) Implementar los programas de capacitación educación cívica y construcción de ciudadanía a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;
- o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;
- p) Ejercer la función de oficialía electoral; y
- q) Difundir durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que le corresponden y que sean de mayor audiencia, promocionales que vayan encaminados a incentivar el voto, en donde se resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así como las restricciones relativas a la compra o coacción del voto. r) Las demás atribuciones que establezcan, la Constitución Local y las leyes locales no reservadas expresamente al Instituto Nacional.

Artículo 44. Durante el periodo de su encargo, los Consejeros Electorales deberán acatar las prescripciones siguientes:

- I. Desempeñar su función con autonomía, probidad e imparcialidad;
- II. Recibir la retribución y prestaciones señaladas en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral. Su remuneración será similar a la de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
- III. No podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de particulares, salvo los

casos no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación, de beneficencia o periodísticas, así como las que deriven de su ejercicio de libertad de expresión;

IV. Podrán promover y divulgar la cultura democrática, dentro o fuera del Instituto Electoral, observando los principios rectores de su actividad;

V. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que reciban en función de su cargo, particularmente en materia de fiscalización y procedimientos sancionadores o de investigación, observando los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.

VI. Observar los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales;

VII. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en que los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar un beneficio para las y los Consejeros Electorales, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las y los Consejeros electorales o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

I. Implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Generales y el presente Código.

II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, lo siguiente:

a) El Reglamento Interior del Instituto Electoral;

b) Las normas que sean necesarias para hacer operativas las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional Nacional, Reglamento de Elecciones y demás disposiciones que emanen de las leyes locales en la materia;

c) Los reglamentos para el funcionamiento de la Junta Administrativa, sesiones del Consejo General, Comisiones, Comités y Consejos Distritales, integración y funcionamiento de los Consejos Distritales; liquidación de las Asociaciones Políticas; trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de investigación; y registro de partidos políticos locales y de organizaciones ciudadanas;

d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas. El Instituto promoverá el uso e implementación de instrumentos electrónicos o tecnológicos con el fin de fomentar la participación democrática de los ciudadanos, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

e) Los programas, materiales, estrategias, y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Dichas acciones deberán estar orientadas a promover la plena inclusión y participación social, y el ejercicio de los derechos político-electorales. Así mismo, aprobará la normatividad relacionada con el empleo de sistemas e instrumentos tecnológicos de votación y voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

- f) La normatividad que mandata la legislación local en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, entre otras; y
- g) Los acuerdos y la normativa que sea necesaria para el ejercicio de las funciones que le delegue el Instituto Nacional, para ello podrá administrativas necesarias para la delegación, atracción, asunción y reasunción de funciones, así como, en su caso, para auxiliar a la autoridad electoral nacional.
- III. Presentar al Congreso de la Ciudad de México y en su caso al Congreso de la Unión, propuestas de reforma en materia electoral y de participación ciudadana en temas relativos a la Ciudad de México; El Instituto Electoral de la Ciudad de México expedirá la normatividad relativa al procedimiento para el ejercicio de esta atribución la que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
- a) Funcionarios o instancias legitimados para promover.
- b) Presentación del anteproyecto y estructura del mismo.
- c) Turno del anteproyecto a la Comisión que corresponda en virtud del tema. d) Dictamen u observaciones al anteproyecto.
- e) En caso de dictamen favorable, turno a la Comisión de Normatividad y Transparencia para aprobar su remisión al Consejo General.
- f) En su caso, presentación del dictamen y proyecto de iniciativa al Consejo General.
- g) Aprobación por parte del Consejo General para remitir la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México o al Congreso de la Unión, según corresponda.
- IV. Designar a quien presida e integre las Comisiones Permanentes, Provisionales y Comités;
- V. Crear Comisiones Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral;
- VI. Autorizar las licencias y resolver sobre la procedencia de las excusas de las Consejeras y los Consejeros Electorales;
- VII. Aprobar, cada tres años, el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral, con base en la propuesta que presente la respectiva Comisión Provisional y supervisar su cumplimiento;
- VIII. Aprobar a más tardar el último día de octubre de cada año, los proyectos de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del Instituto Electoral que proponga el Consejero Presidente para el siguiente ejercicio fiscal; ordenando su remisión al Jefatura de Gobierno para que se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México; así como solicitar los recursos financieros que le permitan al Instituto Electoral cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional o por disposición legal;
- Aprobar, en su caso, en enero de cada año el ajuste al Presupuesto de Egresos y al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral, con base en la propuesta que le presente la Junta Administrativa, por conducto de su presidente;
- X. Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los órganos del Instituto Electoral;
- XI. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:
- a) A las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Direcciones Ejecutivas por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales; y
- b) A las y los titulares de las Unidades Técnicas, por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales;
- c) Se deroga.
- XII. Remover, por mayoría calificada del Consejo General a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, y las Unidades Técnicas;

XIII. Conocer y opinar respecto a los informes que deben rendir las Comisiones Permanentes y Provisionales, los Comités, la Junta Administrativa, el Consejero Presidente y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa;

XIV. Aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que, respectivamente, propongan las Comisiones, los Comités, la Junta Administrativa, la presidencia del Consejo y las titularidades de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como la Contraloría Interna y, en su caso, ordenar el engrose que corresponda;

XV. Requerir a través del Secretario del Consejo, informes específicos a las áreas del Instituto Electoral;

XVI. Resolver en los términos de este Código, sobre el otorgamiento o negativa de registro de Partido Político local, Agrupación Política o Candidatos sin partido. Y de la acreditación de los Partidos Políticos locales. XVII. Determinar el financiamiento público para los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, en sus diversas modalidades;

XVIII. Otorgar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las representaciones de los Partidos Políticos;

XIX. Garantizar a los Partidos Políticos y las Candidaturas sin partido el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden.

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidaturas sin partido cumplan las obligaciones a que están sujetas, contenidas en este Código, la Ley General de Partidos Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo las obligaciones relativas al principio constitucional de paridad de género.

XXI. Formular, en su caso, la propuesta de división del territorio de la Ciudad de México en Distritos Electorales uninominales locales y proponer, dentro de cada uno, el domicilio que les servirá de cabecera, para remitirlo a la consideración del Instituto Nacional.

XXII. Formular la división de circunscripciones de las demarcaciones territoriales a efecto de establecer la representación de los Concejales por cada alcaldía, basada en lo establecido en las fracciones I, II y III del numeral 10, inciso A del artículo 53 de la Constitución Local, en criterios de configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica, considerando niveles socioeconómicos de las colonias y pueblos originarios que las conformen.

XXIII. Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana;

XXIV. Designar para los procesos electorales a los Consejeros Distritales; XXV. Resolver sobre los convenios de Fusión, Frente, Coalición o Candidatura Común que celebren las asociaciones políticas;

XXVI. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral presenten los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido, así como el Convenio de Coalición de Gobierno, señalado en este Código

XXVII. Aprobar previo cumplimiento de los requisitos legales, el registro de las candidaturas a Jefe de Gobierno y las listas de candidatos a Diputados de representación proporcional y, en forma supletoria, a los candidatos a Diputados de mayoría relativa y a Alcaldes;

XXVIII. Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña; XXIX. Aprobar el formato de boleta electoral impresa que será utilizada por la ciudadanía residente en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el

Instituto Nacional para la recepción del voto. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento.

En caso de que se instrumente el voto electrónico, aprobar el modelo de boleta electoral electrónica, documentación, instructivos, herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico.

XXX. En su caso, autorizar el uso parcial o total de sistemas e instrumentos en los procesos electorales y de participación ciudadana, con base en la propuesta que le presente la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística;

XXXI. Aprobar, en coordinación con el Consejo General del Instituto Nacional para la asunción de la organización integral, el formato de boleta electoral impresa, boleta electoral electrónica, que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, así como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional para la recepción del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento. Para los efectos del párrafo anterior, se podrán celebrar convenios con autoridades federales, instituciones académicas, así como con organizaciones civiles para la promoción del voto;

XXXII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo cada tipo de estudios en la Ciudad de México;

XXXIII. Determinar la viabilidad de realizar conteos rápidos y ordenar su realización con base en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, tratándose de las elecciones de Diputaciones al Congreso Local y de Alcaldías. Será obligatoria su realización en el caso de la elección de Jefatura de Gobierno.

XXXIV. Efectuar el cómputo total de las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones de representación proporcional, Alcaldías y Concejales de representación proporcional, así como otorgar las constancias respectivas;

XXXV. Emitir los acuerdos generales, y realizar el cómputo total de los procesos de participación ciudadana, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVI. Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y barrios originarios, y ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro; Ordenar, a solicitud de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido, la investigación de hechos que afecten de modo relevante los derechos de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido en los procesos electorales, conforme a lo establecido en la Ley General y este Código;

XXXIX. Sancionar las infracciones en materia administrativa electoral;

XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro de Partido Político local o Agrupación Política local;

XLI. Aprobar las bases y lineamientos para el registro de Organizaciones Ciudadanas, conforme a lo establecido en la Ley de Participación;

XLII. Aprobar el Programa Anual de Auditoría que presente la persona titular de la Contraloría Interna;

XLIII. Aprobar, en su caso, por mayoría de votos, la solicitud al Instituto Nacional para que asuma la organización integral, total o parcial del proceso electoral respectivo, conforme a lo establecido en la Ley General;

XLIV. Solicitar al Instituto Nacional atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia del Instituto Electoral, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación, en términos del inciso c) del Apartado C, de la base V del artículo 41 de la Constitución Federal;

XLV. Instruir el ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional sujetándose a lo previsto por la Ley General, la Ley de Partidos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que se emitan;

XLVI. Para promover los juicios constitucionales a que se refiere el artículo 36, Apartado C, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Local, en los asuntos de su competencia y en los términos, plazos y procedimientos que establezca la ley de la materia.

XLVII. Establecer los términos en los que el Instituto Electoral deberá asumir y desarrollar las funciones de fiscalización que sean delegadas por el Instituto Nacional, observando los lineamientos que a efecto emita la referida autoridad nacional.

XLVIII. Resolver el Recurso de Inconformidad del Procedimiento Laboral Disciplinario de los integrantes del Servicio Profesional Electoral; y

XLIX. Desempeñar las atribuciones que le confiere el Estatuto del Servicio en relación a la gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional. L. Designar al área u órgano del Instituto Electoral que fungirá como Órgano de Enlace para asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como al funcionario que fungirá como autoridad instructora para efectos del Procedimiento Laboral Disciplinario previsto en el Estatuto del Servicio;

LI. Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y

LII. Las demás señaladas en este Código.

Por lo anterior si una autoridad diversa, partido político, poder o inclusive una persona que integra la misma autoridad electoral no se puede obstruir la actividad electoral porque se vería afectada en primer término las actividades que esta obligada a realizar y como consecuencia se encontraría mermada la autonomía de gestión.

En ese sentido, las reformas realizadas por un órgano externo como lo es el Congreso de la Ciudad de México con la reforma y derogación que realiza al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que se recurre han fragmentado la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México por lo que se ha llegado a desnaturalizar la composición jurídica y reconocida a los órganos autónomos, por lo que corresponde al máximo órgano jurisdiccional del país impedir que se afecte la división de poderes que se ha dado el país mexicano, declarando la invalidez de la reforma que agrede a las tareas encomendadas al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

SEPTIMO. LO CONSTITUYE EL DECRETO QUE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 98, ASÍ COMO LAS FRACCIONES V, VII Y IX DEL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CIPE) CONSISTENTE EN LA ELIMINACIÓN DE LA FACULTAD DEL CONSEJO GENERAL PARA CREAR

UNIDADES TÉCNICAS ADICIONALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LOGRO DE LOS FINES DEL INSTITUTO Y LA ELIMINACIÓN DE TRES COMISIONES PERMANENTES (IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, FISCALIZACIÓN Y VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS).

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. Artículos 1, 16, 41, párrafo primero, base V, y Apartado C; 122, fracción VII en concordancia con el artículo 116, fracción IV, inciso b), y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1, 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 31, 33 y 36 párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Esta reforma electoral tiene como principal fin eliminar la facultad del Instituto Electoral para crear Unidades Técnicas y para desaparecer cinco áreas especializadas del Instituto.

Afectará a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las organizaciones ciudadanas y en general a la vida democrática en la Ciudad.

Desaparecen las áreas de Igualdad de Género y Derechos Humanos (IGyDH), Vinculación con Organismos Externos (VOE); Archivo, Logística y Atención a los Órganos Desconcentrados (ALyAOD); Fiscalización y Centro de Formación y Desarrollo (FyCFyD).

Adicionalmente, al eliminar las comisiones permanentes de estos ámbitos, se impediría el seguimiento de las y los consejeros e inclusive, de las representaciones partidistas, un tramo de control democrático fundamental.

A nivel global, expertas y expertos coinciden en las cinco condiciones mínimas que una reforma electoral debe cumplir para ser viable²⁸:

1. **Solucionar** un problema, analizar los alcances y efectos, esto es, evaluar desde las garantías para cuidar nuestra democracia sustantiva.
2. Generar un **consenso** mediante un debate abierto entre actores políticos y la ciudadanía.
3. Escuchar voces **expertas**, quienes den una opinión objetiva, crítica y técnica sobre las consecuencias previsibles de los cambios normativos.
4. Garantizar **integridad electoral** para comicios libres y competidos, y también para los procesos de participación ciudadana.
5. Fomentar la **credibilidad** con base en la función técnica que de espacios equitativos a los actores y garantice la participación ciudadana.

²⁸ Foro Internacional en defensa del INE y la democracia, minuto 1:00:018
<https://www.youtube.com/watch?v=8teMFs9couU&t=4041s>

La eliminación de Comisiones Permanentes implica una violación a la autonomía de funciones y para no obviar en repeticiones, afectando la naturaleza autónoma del IECM, a su independencia respecto de otros órganos y a su facultad de auto organización para quedar de la forma siguiente:

Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Unidad Técnica de Fiscalización	<p>-Artículo 36, numeral IV: Se descarta la Unidad Técnica Especializada de fiscalización y se menciona la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.</p> <p>-Artículo 50, apartado C: Se deroga, se le daba la atribución al Consejo General de nombrar a la o al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de conformidad al procedimiento establecido.</p> <p>-Artículo 59, numeral V: Se cambia la Comisión de fiscalización a quejas.</p> <p>-Artículo 60: Cambia el nombre de la Comisión a "Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización" y con esto se deroga el apartado III y X, se agrega el X Bis con 6 nuevos apartados con atribuciones en materia de fiscalización que ahora llevará la nueva área.</p> <p>-Artículo 64: Desaparece la atribución de la Comisión de Fiscalización para lo referente al tema delegado por el Instituto Nacional.</p> <p>-Artículo 95: Cambia el nombre de la Dirección a "Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización" Y se agregan las atribuciones en materia de fiscalización.</p> <p>-Artículo 102: Se derogan los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p>

Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
		<p>-Artículo 103: Se modifica lo referente a la Contraloría Interna del Instituto.</p> <p>-Artículo 107: Se modifican y derogan los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p>-Artículo 108: Se deroga. Materia de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p>-Artículo 109: Se deroga, sobre las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p>-Artículo 251: Sobre ante quién tienen dar cuenta las agrupaciones políticas locales, ahora sería a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.</p> <p>-Artículo 265: Se agrega el tema de fiscalización.</p> <p>-Artículo 273: Sobre las obligaciones de los Partidos Políticos, se agrega la fiscalización al nombre de la dirección.</p> <p>-Artículo 348. Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-Artículo 350: Se modifican los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p>-Artículo 351: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-Artículo 352: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la comisión.</p>

Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
		<p>-Artículo 353: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-Artículo 383: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-Artículo 406: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-Artículo 408: Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p>
Secretaría Administrativa	Centro de formación y desarrollo	<p>-Artículo 83: Se deroga el apartado n sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y se agregan atribuciones en materia de equidad, igualdad sustantiva, derechos humanos y en el numeral XVII se descarta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.</p> <p>-Artículo 88: Se la da a la Secretaría Administrativa las atribuciones del Centro de Formación y desarrollo.</p> <p>-Artículo 98: Se deroga el numeral V respecto a las tareas de Formación y Desarrollo.</p> <p>-Artículo 162: Sobre a quién tienen que acudir los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, además de las obligaciones previstas en general para los servidores públicos del Instituto Electoral, ahora sería a la Secretaría Administrativa.</p>
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	Unidad de Género y Derechos Humanos	<p>-Artículo 59, numeral IV: Se agrega género a la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, numeral IX, se deroga desapareciendo la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p>

Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
		<p>- Artículo 63: Cambia el nombre de la Comisión a "Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana", se modifica el numeral IV, se agrega Género y Derechos Humanos al programa institucional de la dirección y se agregan 10 apartados de la a) a la j) sobre las atribuciones en materia de género.</p> <p>-Artículo 67, se incorpora el IV Bis, en el cual pasa a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional el supervisar las acciones, competencia del Instituto relativas a la difusión, promoción y formación en materia de Derechos Humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.</p> <p>- Artículo 68 en materia de atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se deroga.</p> <p>-Artículo 94: Cambia el nombre de la dirección a "Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana" y se agregan las atribuciones en materia de género y derechos humanos.</p>
Secretaría Ejecutiva	Unidad de Vinculación con Organismos Externos	<p>-Artículo 59, numeral VII: Se deroga, dejando inexistente a la Comisión de Vinculación con Organismos Externos.</p> <p>-Artículo 65, en materia de atribuciones de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, se deroga.</p> <p>Artículo 84: Se deroga la atribución de la Secretaría Ejecutiva para el seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral a través de la Oficina de Gestión de Calidad.</p>

Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
		<p>-Artículo 86: en materia de vinculación será a través de la Secretaría Administrativa el seguimiento y se agregan 3 apartados sobre atribuciones en materia de vinculación con Organismos Externos.</p> <p>-Artículo 98: Se deroga el numeral sobre las tareas de Vinculación con Organismos Externos.</p>
	Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados	-Artículo 98: Se deroga el numeral III en materia de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Eliminar comisiones permanentes, implica eliminar la supervisión para el adecuado desarrollo de las actividades (funciones) especializadas de los órganos ejecutivos y técnicos del IECM.

CIPE.

Artículo 52. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional.

Las funciones que venían desarrollando tres de las cinco Unidades Técnicas desaparecidas con esta reforma, solo se trasladaron a cuatro órganos ejecutivos del Instituto. Esto implica que tendrá que seguir existiendo deliberación, opinión o propuesta por parte de las personas consejeras y los partidos políticos en estos temas (salvo en los temas de fiscalización).

Las Comisiones no implican la existencia de una estructura burocrática distinta a la ya existente. Si bien son instancias colegiadas (integradas por tres Consejeras y Consejeros, representantes de partidos políticos—salvo en la ahora comisión de asociaciones políticas y fiscalización—y una secretaría técnica), esto no implica la existencia de una estructura distinta a la existente, puesto que sus trabajos, actividades y organización se realiza con el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del propio Instituto.

CIPE

Artículo 53. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por Consejera o Consejero Presidente y dos Consejeras o Consejeros Electorales bajo el principio de paridad de género, contando con derecho a voz y voto; y serán integrantes con derecho a voz las y los representantes de los partidos políticos y Candidatos sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el proceso electoral, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no conformarán

quórum. La presidencia de cada una de las Comisiones se determinará por acuerdo del Consejo General.

Contarán con un Secretario Técnico sólo con derecho a voz, designado por sus integrantes a propuesta de su Presidente y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral.

Los Consejeros Electorales y los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos deben asistir personalmente a las sesiones de las Comisiones a que sean convocados.

Por tanto, es falsa la premisa de que la eliminación de esas tres comisiones permanentes, sean para optimizar competencias, por el contrario, esta medida hará que la distribución del trabajo de supervisión de las y los consejeros esté distribuida entre menos integrantes, rompiendo así con la naturaleza de los órganos colegiados y que es, distribuir equitativamente las cargas laborales para su mejor atención, análisis, discusión y aprobación.

Artículo 58. Las Comisiones Permanentes tienen facultad para, en el ámbito de su respectiva competencia, supervisar el cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, así como vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General.

Las Comisiones Permanentes tendrán la integración que apruebe el Consejo General para un periodo de dos años. Al concluir ese lapso, deberá sustituirse a quien asuma la Presidencia y a uno más que la integre.

Eliminar tres Comisiones Permanentes, resulta antinatura a la naturaleza de la colegiación en la composición de órganos del Estado, pues saturar de atribuciones y funciones en menos personas, merma el ejercicio de la función estatal en detrimento de la ciudadanía y sus derechos.

Razón por la cual, se deben **invalidar** la derogación de las fracciones V, VII y IX del artículo 59 del CIPE y demás relativos y aplicables al caso concreto.

VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA POR SOBRECARGA EN LA ESTRUCTURA DEL IECM Y LA AFECTACIÓN EN LA EFICACIA PARA EL EJERCIO DE SUS FUNCIONES (OBLIGACIONES) CONSTITUCIONALES.

Mediante la reforma político-electoral del año 2014, el Congreso Federal estableció un sistema nacional para el ejercicio de la función electoral. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPLES).

Lo anterior implica la existencia de un ámbito normativo que distribuye atribuciones y competencias, las cuales deben realizarse coordinadamente entre el INE y los OPLES.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 41, base V, Apartado B, al INE le corresponde realizar, tanto para procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.

Por su parte, la base V, Apartado C del artículo 41 de la Carta Magna, establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, **estarán a cargo de organismos públicos locales** y ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Implementar y operar el programa de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los **mecanismos de participación ciudadana** que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

Las funciones estatales que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) debe ejercer, conforme a la Leyes General, la Constitución Local y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México son las siguientes:

- La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio (artículo 6, numeral 1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE);
- Garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres (artículo 6, numeral 2 LGIPE);
- Cuando así lo soliciten los partidos políticos con registro local, organizar las elecciones de sus dirigencias (artículo 44, numeral 1, inciso ff);
- Oficialía electoral (artículo 98, numeral 3 LGIPE);
- Solicitar los tiempos de radio y televisión que se requieran para el cumplimiento de sus funciones (artículo 164, numeral 1 LGIPE);
- Votación de las personas residentes en el extranjero;
- La sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores;

- La fiscalización de las Agrupaciones Políticas Locales;

Todas esas atribuciones señaladas en la Constitución Federal y en la LGIPE, el poder constituyente de la Ciudad de México las aglutinó en tres grandes funciones conforme a lo que establece el artículo 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM):

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México;
2. Los procesos de participación ciudadana en la Ciudad; y
3. El diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Por su parte, de manera específica, el IECM, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, realiza las siguientes funciones:

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
- II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.

La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto Nacional.

Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, el Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto Nacional;

b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México;

c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México en las que participen, así como proporcionar esta información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro respectivo;

d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por su Consejo General, así como suscribir convenios en esta materia con el Instituto Nacional y demás entes que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, establecer el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en los procesos de participación ciudadana, así como en la toma de decisiones públicas que afecten su desarrollo y entorno.

e) Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las demarcaciones territoriales;

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

h) Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad de México cumplan con los lineamientos que emita el Instituto Nacional;

i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

j) Garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;

k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos;

l) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

m) Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;

ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso de la Ciudad de México y los concejales electos en cada alcaldía, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale este Código;

p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana, así como de los mecanismos de participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo conforme a la Ley de Participación.

q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización integral de los procesos electorales de la Ciudad de México, en los términos que establezcan las leyes respectivas.

r) Realizar campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, que explique la figura de candidatos sin partido y el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el periodo de recolección de éste.

s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana para recibir y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad de México, incluyendo la residente en el extranjero, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los mismos

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo.

Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en:

- a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos;
- b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las Mesas Directivas.
- c) Ubicar las casillas electorales;
- d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los distritos electorales y la división del territorio de la Ciudad de México en secciones electorales;
- e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la Ciudad de México; y
- f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Las atribuciones adicionales para:

- a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;
- b) **Organizar los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México;**
- c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la legislación local de la materia;
- d) Llevar a cabo el registro (sic) las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la Ciudad de México;
- e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar atención e información a las y los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
- f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto Electoral, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama administrativa del Instituto;
- i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales relacionadas con sus funciones;
- j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas locales;
- k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauran por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la materia;
- l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia;
- m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de actos realizados por ese instituto relacionados con los procesos electorales de la Ciudad de México, para su resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación conforme lo determina la Constitución Federal y las leyes generales de la materia;

n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en este Código;

ñ) Implementar los programas de capacitación educación cívica y construcción de ciudadanía a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;

o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;

p) Ejercer la función de oficialía electoral;

q) Difundir durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que le corresponden y que sean de mayor audiencia, promocionales que vayan encaminados a incentivar el voto, en donde se resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así como las restricciones relativas a la compra o coacción del voto.

r) Las demás atribuciones que establezcan, la Constitución Local y las leyes locales no reservadas expresamente al Instituto Nacional.

Ese cúmulo de obligaciones constituciones y legales, requiere la organización y distribución del trabajo en áreas y personal especializado para la adecuada atención de cada función.

La función electoral es tan amplia, especializada y compleja que la multidisciplinariedad es inherente a su ejercicio y por ello, el Constituyente le dotó a los OPLES de autonomía en su funcionamiento y reguló la obligación constitucional y legal de garantizar, no solo suficiencia presupuestaria, sino la facultad de auto organización para asegurar el cumplimiento eficiente de todas las atribuciones conferidas:

LGIFE.

Artículo 4.

1. El Instituto y **los Organismos Públicos Locales**, en el ámbito de su competencia, **dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley.** (LGIFE)

Artículo 6.

(...)

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, **dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley.**

Artículo 27.

(...)

2. El Instituto y **los Organismos Públicos Locales**, en el ámbito de sus respectivas competencias, **garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.**

Artículo 98.

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de **autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones**, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

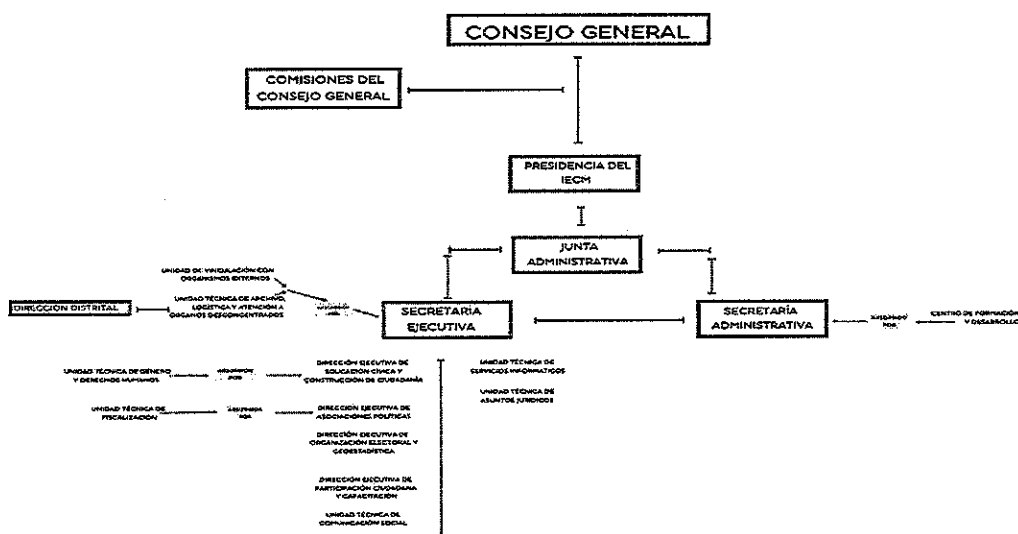
2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes.

El cumplimiento de todas las atribuciones y facultades (obligaciones constitucionales) no es un acto potestativo para una autoridad. Su carácter vinculante, la obliga a tener eficacia en el cumplimiento de la función estatal.

Hasta antes de la reforma que ahora se impugna, el IECM había tenido la capacidad de lograr el efecto que la Constitución Federal y la normatividad local le mandata.

Esto fue así, puesto que la estructura orgánica con la que contaba y la especialización de las personas funcionarias que hasta hoy la componen, generaban una distribución laboral adecuada para el cumplimiento de las funciones estatales encomendadas.

Con la reforma que ahora se impugna y derivado de que el legislador local decidió vulnerar la autonomía del IECM al eliminar cinco Unidades Técnicas (Vinculación con Organismos Externos, Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo y Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados) y trasladar todas sus funciones a cuatro Órganos Ejecutivos, lo único que provocará, será una sobre carga de trabajo y una pérdida en la especialización de las atribuciones que se ejercen, tal y como se demostrará más adelante.



La sobre carga de trabajo operará en automático, puesto que la reforma, tanto en su articulado como en la exposición de motivos del dictamen que dio origen a la iniciativa, **prevé solamente una absorción de funciones** y el recorte del personal

de las áreas absorbidas, lo cual, implica una violación directa a los artículos 37, párrafo primero y 38 del CIPE, al inmiscuirse en facultades que no le corresponden.

El dictamen que dio origen a la iniciativa establece, de manera explícita, que 105 plazas será afectadas (considerando noveno, párrafo tercero), lo cual, haría nugatoria la facultad de auto organización del IECM, por medio de la cual, el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, tendrá que aprobar la estructura orgánica y funcional de los cuatro órganos ejecutivos que absorberán las funciones de las unidades técnicas desaparecidas, por lo cual, dicha motivación de eliminación de 105 plazas²⁹, debe ser **invalidada** y este órgano jurisdiccional, **deberá determinar**, en caso de que no invalide todas las disposiciones reformadas que ahora se impugnan, **que el IECM está facultado para reestructurar las áreas absorbentes e incluir más personal especializado para las nuevas funciones encomendadas**, de conformidad con lo dispuesto con los siguientes artículos del CIPE:

Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura **misma que podrá ser modificada de conformidad a las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral**:

(...)

Artículo 38. Los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía de Gestión **tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral**. El Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

(...)

LI. **Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y**

(...)

Artículo 80. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

VIII. **Someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, el Estatuto del Servicio, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal;**

(...)

En el supuesto caso de que este órgano jurisdiccional determine que esta reforma no vulnera la autonomía, además de sentar el precedente peligroso de que con

²⁹ Considerando noveno, párrafo tercero del dictamen que dio origen a la iniciativa que ahora se impugna.

reformas legales se puede vulnerar la autonomía de los OPLES, la sobrecarga laboral, cuantitativa y cualitativa, que se generará en personas servidoras públicas no capacitadas para esas nuevas funciones especializadas, y derivado de una investigación de campo se desprendió lo siguiente:

CARGA LABORA CUANTITATIVA

Personal por área

Tabla 1.

ESTRUCTURA ACTUAL DEAP	ESTRUCTURA ACTUAL UTEF
1 Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas ³⁰	1 Persona Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
1 Secretaría de Unidad	1 Secretaría de Unidad
1 Coordinador de Gestión	1 Auxiliar de Servicios
1 Asesor "B"	1 Asistente Administrativo
1 Auxiliar de servicios	1 Director de fiscalización
1 Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos	1 Subdirector de fiscalización
1 Asistente Administrativo	1 Jefe de departamento de análisis contable
1 Jefe de Unidad de prerrogativas y partidos políticos	1 Jefe de departamento de fiscalización a asociaciones políticas y asesoría
1 Jefe de Unidad de Prerrogativas y Partidos políticos I	4 analistas
1 Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos	
1 Jefe de departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos II	
5 Analistas	
1 Jefe de departamento de prerrogativas y partidos políticos III	
1 Jefe de departamento de prerrogativas y partidos políticos IV	
1 Director de quejas	
1 Asistente Administrativo	
1 Subdirector de sustanciación	
1 Jefe de departamento de sustanciación	
4 Proyectistas	
1 subdirector de resolución y dictaminación	
1 Jefe de departamento de resolución y dictaminación	
Total: 28 personas	Total: 12 personas

De las 29 personas que se contabilizan en las plazas de la estructura actual en la Dirección de Asociaciones Políticas (DEAP), 28 personas son las que ejecutan las funciones operativas de la Dirección. Por lo tanto, las 28 personas que actualmente trabajan en la DEAP tendrían que realizar las atribuciones que actualmente realizan 12 personas en la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF).

Tabla 2.

³⁰ La Dirección cuenta con el apoyo de un chofer

ESTRUCTURA ACTUAL DEECyCC	ESTRUCTURA ACTUAL UTGyDH
1 Director Ejecutivo de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía ³¹	1 Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos
1 Coordinador de Gestión	1 Analista administrativo
1 Secretaría de Unidad	1 Secretaría de Unidad
1 Auxiliar de servicios	1 Auxiliar de servicios
1 Coordinador editorial	1 Directora de evaluación en derechos humanos
1 Jefe de departamento de diseño y edición	1 Subdirección de evaluación en derechos humanos
3 Analistas diseñadores	1 Jefe de departamento para el fortalecimiento de los derechos humanos
3 Analistas correctores de estilo	2 Analistas
1 Coordinador de educación cívica	1 Jefe de departamento de evaluación de políticas para el fomento de liderazgos no convencionales
1 Asistente administrativo	1 Directora de implementación de políticas de género
1 Jefa de unidad de educación cívica I	1 Subdirectora de implementación de políticas de igualdad
1 Jefe de departamento de educación cívica I	1 Jefe departamento de implementación de políticas para la igualdad
10 Analistas educadores	1 Subdirección de transversalidad de políticas de género
1 Jefe de departamento de educación cívica II	1 Jefe de departamento de transversalidad de políticas de género
1 Técnico en educación cívica	
1 Jefe de departamento de educación cívica III	
1 Técnica en educación cívica	
1 Jefe de unidad de educación cívica II	
1 Jefe de departamento de educación cívica IV	
1 Técnico en educación cívica	
1 Jefe de departamento de educación cívica V	
1 Técnico en educación cívica	
Total: 35 personas	Total: 15 personas

Actualmente la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC) se integra con 36 personas, de las cuales, 35 personas realizan funciones operativas, mientras que la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos se conforma con 15 personas que realizan funciones operativas, es decir, la Unidad de Género realiza funciones especializadas con casi la mitad de las personas que actualmente están en la DEECyCC.

Tabla 3.

ESTRUCTURA ACTUAL DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	ESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
1 Persona titular de la Secretaría ³²	1 Titular de Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
1 Coordinador de gestión	1 Auxiliar de servicios
1 Asesor "c"	1 Secretaría de Unidad
1 Asistente administrativo	1 Analista administrativo
1 Director de planeación y recursos financieros	1 Director de reclutamiento y selección
1 Asistente administrativo	

³¹ La dirección cuenta con el apoyo de un chofer.

³² La Secretaría Administrativa cuenta con el apoyo de las siguientes plazas: 7 choferes, 1 enfermera, 7 personas auxiliares de servicios y 10 personas auxiliares de servicio de mantenimiento.

ESTRUCTURA ACTUAL DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	ESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
1 Jefe de departamento de evaluación y seguimiento 1 Subdirector de programación y presupuesto 1 Jefe de departamento de trámites y pagos 1 Jefe de departamento de contabilidad presupuestal 1 Jefe de departamento de planeación y prospectiva 1 Subdirector de contabilidad 1 Jefe de departamento de registro contable 1 Jefe de departamento de análisis e información contable 1 Director de adquisiciones, control patrimonial y servicios 1 Asistente administrativo 1 Recepcionista 1 Recepcionista 1 Jefe de departamento de seguridad y protección civil 1 Subdirector de adquisiciones 1 Jefe de departamento de control e integración de procedimientos 1 Jefe de departamento de investigación, análisis y selección de mercado 1 Subdirector de patrimonio institucional 1 Jefe de departamento de control patrimonial 1 Jefe de departamento de mantenimiento y servicios 1 Coordinador de recursos humanos auxiliar de servicios 1 Jefe de departamento de servicios Médicos Enfermera 1 Jefe de departamento de administración de personal 22 Analistas 1 Jefe de departamento de relaciones laborales 1 Jefe de departamento de registro e incorporación	1 Subdirector de reclutamiento y selección 1 Jefe de departamento de ingreso 1 Jefe de departamento de control y registro 1 Jefe de departamento de promoción e incentivos 1 Directora de capacitación y evaluación 1 Subdirector de capacitación y evaluación del desempeño 1 Jefe de departamento de gestión y seguimiento 1 Jefe de departamento de tecnologías educativas 1 Jefe de departamento de diseño pedagógico 1 Jefa de departamento de evaluación del desempeño 7 Analistas.
Total: 52 personas	Total: 22 personas

La Secretaría Administrativa tiene en su estructura a 77 personas, de las cuales, sólo 52 personas realizan funciones operativas, mientras que el Centro de Formación y Desarrollo cuenta con 22 personas para realizar sus funciones de capacitación. Con la reestructura, la Secretaría Administrativa además de gestionar

los recursos del Instituto, incluyendo el pago de nómina tendría que realizar tareas de capacitación.

Tabla 4.

ESTRUCTURA ACTUAL SE	ESTRUCTURA ACTUAL UTVOE	ESTRUCTURA ACTUAL UTALAOD
1 persona titular de la SE ³³ 1 Oficina de gestión de calidad 1 Oficina de Acceso a la información Pública 1 Oficialía Electoral y de Partes 3 Auxiliares de servicios 5 Asesorías 1 Coordinación de Asesores 3 Subdirecciones 9 Departamentos 10 Analistas	1 Titular de Unidad 1 Secretaría de Unidad 1 Analista Administrativo 1 Auxiliar de servicios 2 Direcciones 3 Subdirecciones 4 Departamentos 2 Analistas	1 Titular de la Unidad 1 Asesor B 1 Secretaría de Unidad 7 Auxiliares de servicios 1 Analista administrativo 2 Direcciones 1 Subdirección 5 Departamentos 9 Analistas 4 Edecanes
Total: 35 personas	Total: 15 personas	Total: 32 personas

La Secretaría Ejecutiva asumiría las atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos Desconcentrados. Si se compara con la estructura de la Unidad Técnica de Vinculación y la de Organismos Externos (UTVOE) y la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD). Las 35 personas que actualmente laboran en funciones operativas dentro de la Secretaría Ejecutiva tendrían que seguir atendiendo las obligaciones que actualmente tienen, y además realizar las actividades de las 47 personas que actualmente están adscritas a UTVOE y UTALAOD.

CARGA LABORAL CUALITATIVA RE-CONFIGURACIÓN DE ATRIBUCIONES

Área	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales	Reglamento Interior- IECM
Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		En el artículo 34, se mencionan 13 atribuciones que le corresponden realizara la Unidad de Género y Derechos Humanos.
Educación Cívica y Construcción Ciudadana.	En el artículo 94 del Código, a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía se le dan 23 atribuciones.	

³³ Hay 8 plazas más que apoyan en la secretaría ejecutiva entre las que se encuentran un chofer, auxiliares de servicios y asistentes.

Total de atribuciones que absorberá la Dirección Ejecutiva de Género Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana en el Código reformado: 28 (veintiocho)		
Centro de Formación y Desarrollo		En el artículo 32 del Reglamento Interno, el Centro de Formación y Desarrollo tiene 17 atribuciones.
Secretaría Administrativa	En el artículo 87 y 88 del Código, se mencionan en total 26 atribuciones que tiene la Secretaría Administrativa.	En el artículo 20 del Reglamento Interno, se mencionan otras 12 atribuciones.
Total de atribuciones que absorberá la Secretaría Administrativa en el Código reformado: 28 (veintiocho)		
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados		En el artículo 30 del Reglamento Interno, la UTALAOD tiene encomendadas 3 atribuciones y dentro de estas tres atribuciones, se contemplan 30 actividades que desarrolla esta Unidad Técnica.
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos		En el artículo 33 del Reglamento Interno se contemplan 19 atribuciones
Secretaría Ejecutiva	Se contemplan 20 atribuciones en total que se encuentran en los artículos 84 y 86 del Código.	En el artículo 19 del Reglamento Interno, se contemplan 27 atribuciones.
Total de atribuciones que absorberá la Secretaría Ejecutiva en el Código reformado: 23 (veintitrés)		
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	En el artículo 108, 351 y 355 del Código, se contemplan un total de 9 atribuciones.	En el artículo 24 del Reglamento Interno, se contemplan 10 atribuciones.
Dirección de Asociaciones Políticas	En el artículo 95 del Código, de contemplan 15 atribuciones para DEAP.	Se mencionan dos atribuciones en los artículos 19 fracción XXI y 24 fracción VII.
Total de atribuciones que tendría la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización en el Código reformado: 24 (veinticuatro)		

AFECTACIÓN DE CINCO FUNCIONES SUSTANCIALES, ESTRATÉGICAS Y ESPECIALIZADAS QUE SON ABSORBIDAS POR CUATRO ÓRGANOS EJECUTIVOS.

FUNCIÓN FISCALIZADORA.

De una interpretación funcional y sistemática de los artículos 41, base V, apartado A, párrafo segundo; 74, fracción II; 79; 116, fracción II, párrafo quinto; 122, apartado A, fracción II, párrafo sexto de la CPEUM, las funciones de fiscalización de los recursos públicos, se encomienda a órganos con autonomía técnica y de

gestión, con el fin de evitar injerencia de quienes ejercen los recursos públicos, en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Esto constituye un andamiaje constitucional efectivo para el mejor control del origen, destino y aplicación de los recursos públicos.

En materia electoral, el ejercicio de los recursos públicos no solo es un tema de órganos del estado que reciben financiamiento para su funcionamiento, sino que aquí se involucra el uso de recursos públicos como prerrogativas que tienen las entidades de interés público denominadas partidos políticos.

Esa prerrogativa tiene como objetivo financiar sus actividades permanentes, específicas, de precampaña y campaña.

Sin embargo, todo partido político (nacional y local) tienen un origen previo que responde a reglas de constitución.

Para poder constituir un partido político, la ciudadanía debe ejercer su derecho de asociación política. El ejercicio de ese derecho no puede implementarse sin el apoyo de recursos económicos y materiales.

Ante ello, la normatividad electoral local y federal, establece un régimen fiscalizador de los recursos privados que son usados para fines constitutivos de un partido político.

Ese régimen fiscalizador tiene como objetivo, vigilar que los recursos económicos y materiales usados, tengan una procedencia lícita y la mejor manera de auditar esos recursos, es mediante órganos con autonomía técnica y de gestión, puesto que esa característica les da eficiencia a sus procesos y sobre todo, les permite independencia de actuación en un área especializada que debe estar alejada de injerencias externas.

Ahora bien, la función fiscalizadora electoral en el ámbito local, es una actividad permanente. Si bien el INE tiene la facultad fiscalizadora de los recursos públicos que se otorgan anualmente a partidos políticos nacionales y locales, los OPLES, tienen que fiscalizar los recursos de aquellas organizaciones que pretenden constituirse como partidos y de aquellas agrupaciones locales que forman parte del sistema político-electoral de las respectivas entidades federativas.

Se trata pues, de una actividad fiscalizadora local que requiere un grado de especialización y de autonomía técnica y de gestión suficiente para poder auditar recursos privados para fines político-electorales y con ello blindar el sistema de partidos y participación política de factores reales de poder de procedencia ilícita.

De conformidad con la CPEUM y la LGIPE, el Instituto Nacional Electoral (INE) puede delegar la facultad fiscalizadora al IECM, conforme a las siguientes reglas:

CPEUM.

Artículo 41. (...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

(...)

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

(...)

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.

LGIFE

Artículo 125.

1. La delegación de funciones del Instituto en los Organismos Públicos Locales que señala el inciso b) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, tendrá carácter excepcional. La Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General los Acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

2. Para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General **deberá valorar la evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del Organismo Público Local electoral, para cumplir con eficiencia la función.**

3. La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local correspondiente y requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finalizado el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El Instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma mayoría de ocho votos.

4. La delegación de facultades se realizará de forma específica en cada caso para un Organismo Público Local determinado. **Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades delegadas sujetándose a lo previsto por esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.**

LGIPE.

Artículo 195.

1. Los Organismos Públicos Locales que ejerzan facultades de fiscalización por delegación del Instituto **se sujetarán a los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.**

2. En el ejercicio de dichas funciones, los Organismos Públicos Locales deberán coordinarse con de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización.

3. En estos casos, de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización será el conducto para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Por diseño constitucional, la fiscalización de los recursos públicos y privados está encomendada a órganos técnicos dependientes de las autoridades electorales (artículo 41, Base V, párrafo tercero de la CPEUM).

Si bien por regla general, la fiscalización es una función encomendada al INE, existe no solo la facultad de delegación, sino también, la fiscalización de recursos en el ámbito local.

Dicha función fiscalizadora se encomienda a unidades técnicas especializadas con autonomía técnica y de gestión, por las siguientes razones fundamentales:

Para que las personas consejeras electorales, integrantes de la Comisión y del Consejo General, no intervengan en los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios rectores en materia de fiscalización y sobre todo la independencia en el desempeño de la función fiscalizadora.

Aunado a ello, esa unidad técnica, para lograr independencia técnica y de gestión, debe contar con personas especialistas en la fiscalización de recursos públicos y privados, con conocimientos en materia de auditoría, rendición de cuentas y contabilidad.

Así, para estar en posibilidades de realizar actividades fiscalizadoras, cuando estas sean delegadas por el INE, se debe contar con un área que tenga la misma naturaleza de autonomía técnica y de gestión establecida a nivel constitucional. De no contar con un área especializada, estaremos desobedeciendo el mandato constitucional.

Contrario a lo que se dice en la iniciativa, la fiscalización en el ámbito local **no se trata de una actividad temporal.** La función fiscalizadora es una actividad permanente, tal y como quedo establecido en el cuadro de carga laboral cualitativa antes desarrollado y que pido se tenga por aquí reproducido lo que respecta a la función fiscalizadora.

Desaparecer la Unidad Técnica además de vulnerar la autonomía del IECM, implica un debilitamiento para el control y vigilancia en el manejo de recursos de

organizaciones que solicitan el registro como partido y de candidaturas independientes locales. Lo que se puede traducir en inequidad en la contienda electoral local.

La actual propuesta podrá en vilo alguna de las dos grandes actividades que deberá realizar la persona titular de la nueva Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. La exhaustividad en cada una de las funciones que ahora deberá desempeñar está en riesgo, puesto que, además de sustanciar quejas y denuncias en materia electoral, deberá registrar nuevos partidos, registrar todas y cada una de las candidaturas que se registren para el proceso electoral 2023-2024 y seguir fiscalizando a:

- **Organizaciones de observación electoral.** Revisión del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades;
- Actividades permanentes que no realiza el INE:

Asociaciones Civiles constituidas por candidaturas independientes. Durante proceso electoral se fiscaliza y posterior a la elección se lleva a cabo la disolución y liquidación.

Organizaciones Ciudadanas para integrar un partido político. Se fiscalizan los informes mensuales durante todo el proceso de asambleas y constitución.

- **Partidos políticos locales que pierden su registro.** Luego de la celebración de la elección; se lleva a cabo la liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales que pierden su registro posterior a una elección. Actualmente el IECM lleva los procesos de liquidación del Partido ELIGE y el Partido Humanista.

Todas las anteriores actividades, tienen un proceso de actividad permanente institucional que se ejemplifica así:



Aunado a ello, deberá efectuar trabajos de auditoría consideran entre otras; el análisis de operaciones inusuales, sospechosas que tienen como riesgo la intromisión de dinero ilegal (en efectivo) al ámbito público, tal y como eficazmente lo detectó en el año 2020, la ahora Unidad Técnica de Fiscalización del IECM en el proceso de fiscalización de la Asociación Civil “Enrédate por México”.

La calidad del trabajo desempeñado por el IECM, se puede constatar en el expediente IECM/RS-CG-10/2020,³⁴ precisamente porque la actual Unidad Técnica

³⁴ <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/res/2020/IECM-RS-CG-10-2020.pdf>

de Fiscalización cuenta con personal profesional y especializado en materia de contable, de auditoría y jurídica. Cabe señalar que la actual Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas carece de experiencia en los ámbitos de auditoría y contabilidad.

Con esta reforma, las representaciones de partidos políticos estarían presentes en las sesiones de la Comisión, elemento que se ha considerado por el legislador como desfavorable para la autonomía técnica de los trabajos.

La carencia de contar con un órgano **fiscalizador permanente con autonomía técnica** y de gestión, no solo hace nugatorio (o de imposible aplicación) la facultad delegatoria establecida en el artículo 41 de la CPEUM, sino que es contrario a las facultades permanentes de fiscalización en el ámbito local establecida en la normatividad electoral local, razón por la cual deben **invalidarse** las normas que eliminan y transfieren las facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM.

FUNCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La interpretación de normas relativas a los derechos humanos será conforme al principio *pro persona*. Dicha disposición constitucional impone la obligación de que las autoridades (incluida el IECM) deben **avanzar** en la instrumentación de políticas públicas, programas y **acciones** que derivan de obligaciones explícitas e implícitas que ha adquirido el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece, en el artículo 1, que su objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los Lineamientos y **mecanismos institucionales** que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado

El 23 de marzo de 1981, México ratificó la CEDAW, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

La CEDAW, en su artículo 4, numeral 1, establece que los Estados Parte deberán adoptar **medidas especiales** encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.

Durante 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el Capítulo 5.3 “Propuestas”, del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México³⁵, **propuso** fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover

³⁵ https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/8diagnosticoCompleto.pdf

la equidad de género (instituciones, coordinaciones, comunicaciones), así como las Unidades sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de género en las políticas sectoriales mediante las siguientes acciones:

- **Promover la creación** de comisiones especializadas en los congresos locales y áreas de género en los poderes judiciales y órganos autónomos correspondientes;
- Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación entre todas esas instancias;
- **Promover el establecimiento** de programas, instituciones y servicios para prevenir, atender, y eliminar la violencia sistémica de género en todo el territorio nacional; y
- Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales, etcétera.

La anterior propuesta (contar con área especializada en materia de género y derechos humanos) es una acción afirmativa que encuentra sustento en nuestro andamiaje constitucional, pues tiene como objetivo tutelar los derechos político-electorales que van desde el principio de paridad, hasta la erradicación de la violencia política de género en los actos político-electorales de los cuales, el IECM tiene participación como autoridad electoral.

Asimismo, la existencia de un área especializada y separada de las demás áreas del IECM, permite garantizar la **transversalidad** de género, el cual tiene por objetivo hacer viables los procesos, implementar las acciones, y hacer efectivas cada una de las acciones afirmativas que se implementen en materia electoral que tengan por objeto garantizar la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Es un área estratégica que tutela la protección de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones y libre de violencia, y necesaria la emisión de acuerdos, lineamientos, reglamentos y demás instrumentos jurídicos que, con perspectiva de género, debe aprobar el IECM.

Asimismo, esa área especializada y separada de las demás áreas del IECM, es necesaria para que, con perspectiva de género, sean atendidos los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del Instituto, se atiendan los posibles casos de violencia laboral por razón de género, entre muchas otras acciones que permitan el ejercicio de las funciones públicas en condiciones de igualdad.

El 10 de junio de 2011 en México se constitucionaliza el principio *pro persona*. A partir de la reforma político-electoral de 2014 y la reforma constitucional de 2019, la paridad de género y los derechos político-electorales de las mujeres de maximiza, volviéndose obligación de los órganos constitucionales autónomos dar cumplimiento al capítulo 5.3 "Propuestas" del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México propuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con el fin de crear un área de género en el IECM.

Mediante acuerdo **IECM/ACU-CG-021/2019** se aprobó la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) en apego al mandato

constitucional de erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, pero también en cumplimiento a los tratados internacionales de los cuáles México es parte y recomendaciones internacionales.

La Unidad especializada de Igualdad de Género y Derechos Humanos se vuelve necesaria en el IECM porque:

- Conforme las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como las emitidas a nivel internacional a las cuales estamos obligados a su observancia, es imprescindible incorporar la perspectiva de género en todas las actividades que se desarrollen dentro de las funciones de esta Institución.

El IECM se encuentra obligado a realizar diversas acciones en materia de género y no discriminación. Estas actividades están distribuidas en sus distintas áreas operativas internas, lo cual implica **una visión institucional transversal con perspectiva de género**, como por ejemplo, el registro de candidaturas con paridad de género, la asignación de recursos públicos para los programas anuales de liderazgo político de las mujeres, políticas internas de conciliación, vida laboral y vida personal, uso de lenguaje no sexista en los actos dictados por el IECM; políticas de capacitación interna para la igualdad y no discriminación, de inclusión y diversidad cultura, protocolos o lineamientos contra el hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, entre otras acciones.

En tal sentido, tiene a su cargo el reporte de las acciones institucionales ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y los procesos de certificación de las normas: NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación y NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Aunado a ello, encabeza las acciones en materia de accesibilidad en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad).

Cuenta con un nivel jerárquico suficiente para alcanzar resultados de planeación, seguimiento y evaluación de las actividades asociadas a la igualdad y la perspectiva de género dentro del IECM y esto, permite evaluar el impacto de las actividades en cada una de las áreas.

Esta institucionalización jerárquica y de transversalización de la perspectiva de género, ha coadyuvado al mejoramiento y remoción de obstáculos para las mujeres y la igualdad de las personas al interior del IECM, con los partidos políticos y con la ciudadanía.

La existencia de un área especializada que no solo forma parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-electorales con perspectiva de género, es ya un derecho adquirido que, conforme al artículo 1º constitucional debe ser progresivo y maximizado, por tanto, la desaparición de esta área especializada sería un retroceso para la ciudadanía quien es la principal beneficiaria.

La reforma contempla la unión de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía con la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, dando paso a la *Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadana*. La propuesta hace modificaciones

a los artículos 63 y 94 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con la derogación del artículo 68 en materia de atribuciones de la actual Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se suman atribuciones a lo que hoy es la Dirección Ejecutiva Cívica y Construcción de Ciudadanía, lo cual es un foco de alarma pues:

- Las tareas de cada área deben implementarse por personal especializado ya que su labor no es mínima, el juntar el trabajo de dos temáticas que desde la pedagogía y enfoque de derechos requieren rigor, restaría valor al material y actividades que desarrollen las áreas.
- Es necesaria la existencia de un área especializada, que esté separada de cualquier otra área ya que no solo forma parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-electorales con perspectiva de género.
- Conforme al artículo 1º constitucional los derechos deben ser progresivos y maximizados, por tanto, la desaparición de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos sería un retroceso para la ciudadanía que es una de las principales beneficiadas con su existencia.
- No contempla el mandato convencional y constitucional establecido en los artículos 1º, párrafos 2, 3 y 5; 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una unidad especializada en materia de género y derechos humanos.

Por otro lado, es preciso mencionar que, se parte de una premisa falsa (indebida motivación y fundamentación), al dar por hecho que la actual Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos implicó el engrosamiento de la estructura del IECM, lo cual no fue así.

Mediante acuerdo **IECM/ACU-CG-021/2019**³⁶ se aprobó la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) en apego al mandato constitucional de erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

La creación de la UTGyDH no representó un incremento presupuestal al capítulo 1000 (considerandos 21 a 23 del acuerdo **IECM/ACU-CG-023/2019**³⁷), las plazas ya operaban y se reconfiguraron a raíz de la decisión de desincorporar de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) las actividades relativas a la promoción de derechos humanos y género para trasladarlas a la UTGyDH y así dar respuesta a la necesidad de supervisar y administrar la política en materia de desigualdad de Género y Derechos Humanos dentro y fuera del Instituto de manera profesionalizada, tal y como se desprende a continuación:

21. Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente que la UTVOE cuente con una estructura de 15 plazas presupuestales en términos del organigrama que forma parte integral del presente Acuerdo, y distribuidas en una de Titular de Unidad Técnica, dos Direcciones de Área, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas de

³⁶ <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-021-2019.pdf>

³⁷

Departamento, dos Analistas, un Analista Administrativo, una Secretaría de Unidad, y un Auxiliar de Servicios.

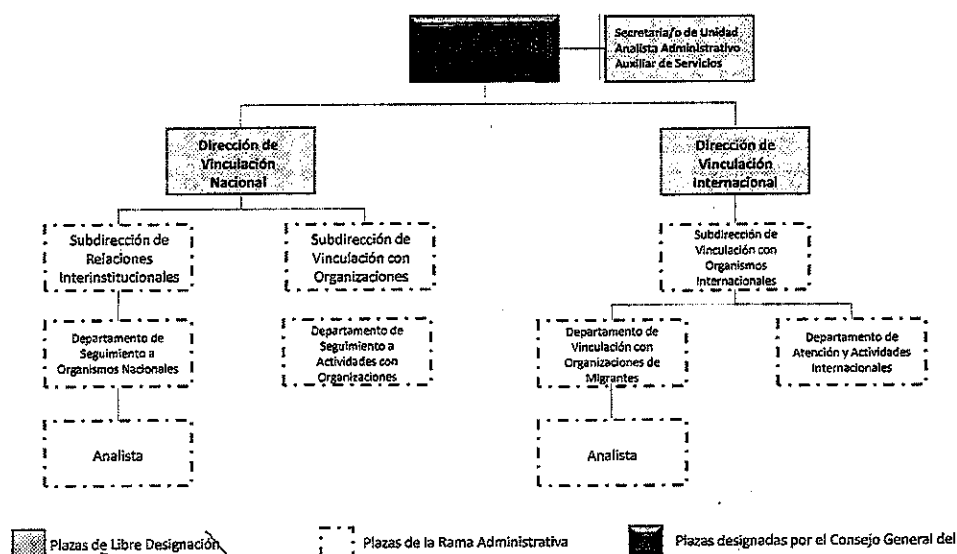
22. Que atendiendo la necesidad de contar con una instancia encargada de supervisar y administrar la política en materia de igualdad de Género y Derechos Humanos, tanto dentro como fuera del Instituto Electoral, **este Consejo General ordenó la creación de la UTGyDH**, la cual, además de las atribuciones que le confiera el Reglamento Interior del Instituto Electoral, tendrá las facultades de vigilar que el Instituto Electoral y sus Órganos desconcentrados actúen de acuerdo a la promoción, respeto y protección de los principios establecidos en las Constituciones Federal y Local; institucionalizando la perspectiva de género y derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados del Instituto Electoral, y promoviendo mecanismos de coordinación externa con instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles y partidos políticos para instrumentar acciones que fortalezcan la cultura político-electoral y contribuyan a una democracia igualitaria e incluyente.

En consonancia con lo expuesto, con la finalidad de dar mayor proyección, profundidad e incluso impacto social a las actividades que realiza el Instituto Electoral en materia de derechos humanos y género, este Consejo General **estima conveniente dotar a la UTGyDH, con una estructura de 15 plazas presupuestales en términos del organigrama que forma parte integral del presente Acuerdo**, y distribuidas en una de Titular de Unidad Técnica, dos Direcciones de Área, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas de Departamento, dos Analistas, un Analista Administrativo, una Secretaría de Unidad, y un Auxiliar de Servicios.

23. Que la estructura contemplada en los considerandos 21 y 22, no implica un incremento al presupuesto contenido en el capítulo 1000, ya que funcionalmente las plazas propuestas venían operando y lo que se pretende es normar la estructura organizativa del Instituto Electoral.

OFICINA GENERAL DE MEDIO

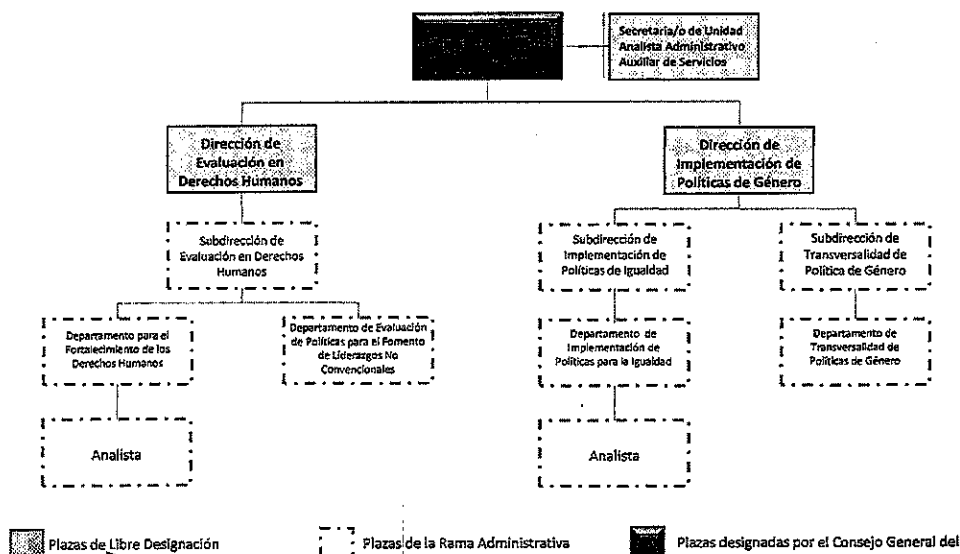
UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS



Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México

INSTITUTO
ELECTORAL
DE MÉXICO

UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS



Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México

Es por todas estas razones que deben **invalidarse** las disposiciones por las que se elimina la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos y las que trasladan sus funciones a la Dirección de Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC).

FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS.

El Reglamento de Elecciones prevé un capítulo especial de Coordinación entre el INE y el IECM (art. 26). Esta coordinación está a cargo de una Unidad Técnica de Vinculación del propio INE.

Además, para la ejecución de las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales locales, la coordinación con el IECM se sustenta en convenios generales de coordinación, anexos técnicos, anexos financieros y adendas.

Por ello, resulta importante la existencia de un área especializada, con su respectiva infraestructura humana y material, que sirva de vínculo entre el INE y el IECM.

De conformidad con el artículo 29, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, los rubros mínimos que deben considerarse como materia de coordinación entre el Instituto y el IECM, son los siguientes:

Artículo 29

(...)

2. Los rubros que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación entre el Instituto y los opl, son los siguientes:

a) Integración de consejos municipales y distritales de los opl;

- b) Campañas de actualización y credencialización;
- c) Listas nominales de electores;
- d) Insumos registrales;
- e) Capacitación y asistencia electoral;
- f) Casillas electorales;
- g) Documentación y materiales electorales;
- h) Integración de mesas directivas de casilla;
- i) Observadores electorales;
- j) Candidaturas independientes;
- k) Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local;
- l) Registro de candidaturas;
- m) Representantes generales y de casilla;
- n) Encuestas y sondeos de opinión;
- o) Organización de debates;
- p) Desarrollo de jornada electoral; Reglamento de Elecciones
- q) Promoción de la participación ciudadana;
- r) Mecanismos de recolección de paquetes electorales;
- s) Conteos rápidos;
- t) prep;
- u) Cómputo de las elecciones locales;
- v) Sistemas informáticos;
- w) Acceso a radio y televisión;
- x) Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos;
- y) Voto de los mexicanos residentes en el extranjero;
- z) Visitantes extranjeros;
- aa) Medidas cautelares en materia de radio y televisión, y
- bb) Las demás que determine el Consejo General o se acuerden con el OPL.

Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)

La UTVOE opera la vinculación del IECM con más de 3,100 personas e instituciones aliadas a nivel nacional e internacional, con el objeto de fomentar la cultura democrática y contribuir a garantizar y potenciar el ejercicio de derechos de la ciudadanía dentro y fuera de las fronteras nuestra geografía.

De conformidad con el andamiaje constitucional y legal, en la Ciudad de México está regulado el derecho de votar (Jefatura de Gobierno y Diputación Migrante) y ser votado (Diputación Migrante) para la ciudadanía residente en el extranjero.

Asimismo, en la Ciudad de México cada año se organizan votaciones para presupuesto participativo y cada tres años para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS). Además de que en la Ciudad de México se regulan más de 20 mecanismos de democracia directa, de los cuáles, en su mayoría, el IECM tiene participación una participación directa.

La tutela de los derechos de votar y ser votada de la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero y de participación ciudadana, requiere de acciones focalizadas y especializadas por parte de personas servidoras públicas capacitadas para ello.

Los anteriores derechos, implican una implementación, difusión y materialización que requiere de vínculos directos entre autoridad electoral, ciudadanía y diversas autoridades electorales y de gobierno.

Esos vínculos son fundamentales sobre todo en materia del voto de residentes en extranjero y de los diversos ejercicios de participación ciudadana.

La necesidad de continuar con las labores de vinculación resulta fundamental bajo una lógica de progresividad de los derechos ciudadanos, misma que se encuentra garantizada por la Constitución Local. La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) es un área transversal, pe también tiene tareas específicas que no gestiona ninguna otra área del Instituto.

La UTVOE desarrolla labores que han impactado positivamente al fomento de la cultura democrática con las siguientes alianzas:

- 318 personas académicas especialistas en materia político-electoral provenientes de más de 30 diferentes instituciones de educación superior en la Ciudad de México y en el extranjero.
- 97 personas directoras, coordinadoras y jefas de carreras de 79 áreas de 27 instituciones académicas de la Ciudad de México.
- 83 integrantes de la Red de Observación y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México de las cuales 61 personas pertenecen a 49 organizaciones de la sociedad civil y 22 personas son observadoras a título individual.
- 210 personas consejeras de 31 Organismos Públicos Locales Electorales.
- 155 personas magistradas de 31 tribunales electorales locales.
- 22 personas integrantes de organismos públicos autónomos de la Ciudad de México.
- 22 personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México.
- 38 instituciones, divididas en 8 gubernamentales, 5 académicas, 4 electorales, 10 organizaciones de la sociedad civil y 11 organizaciones internacionales, con las que el IECM tiene un convenio suscrito y vigente y la UTVOE es el área responsable operativa.
- 15 organizaciones internacionales.
- 27 organismos electorales en América Latina y el Caribe.
- 14 sedes de la UNAM ubicadas en 9 países de 4 continentes.
- 80 embajadas y 60 consulados de México en el mundo a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
- 69 capítulos de la Red Global MX en 34 países.
- Contacto con 20 capítulos de la Red EXA TEC en el Mundo
- 1,891 contactos de la Red Voto Chilango de los cuales 731 son organizaciones o instituciones relacionadas con temas de la diáspora.

(Datos de la UTVOE)

El ejercicio de derechos de la ciudadanía, dentro y fuera del territorio nacional, se compromete gravemente al asignarse a la Secretaría Ejecutiva, ya que, como se ha venido aduciendo, se sobrecarga al personal de funciones y por otro lado, se perdería el enfoque especializado que ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades institucionales del IECM a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de sus derechos político-electorales y de participación ciudadana.

Tal y como se adujo en el capítulo de la función de Igualdad de Género y Derechos Humanos, desde 2019 la UTVOE era un área adelgazada estructuralmente hablando, a raíz de la decisión de desincorporar de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) las actividades relativas a la promoción de derechos humanos y género para trasladarlas a la UTGyDH, de conformidad con los considerados 21 a 23 del acuerdo **IECM/ACU-CG-023/2019**.

Es por todas las anteriores razones y fundamentos que deben **invalidarse** las disposiciones por las que se elimina la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del IECM.

UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (UTALAOD).

Las actividades que se verían afectadas en su eficacia serían:

Durante procesos electorales y con miras al proceso electoral 2023-2024

1. Compromete el funcionamiento homogéneo y la calidad del trabajo de las 33 Direcciones Distritales, ya que UTALAOD apoya a:
 - Efectuar el cómputo, en tiempo real, la noche de la jornada electoral. Por lo que su desaparición, pone en riesgo el seguimiento de los cómputos distritales.
 - Cumplir con la función de Oficialía Electoral, gestionando la designación de un mayor número de personas servidoras públicas de la misma adscripción y con la inspección ocular de propaganda electoral. Su desaparición pone en riesgo dar fe, de manera eficaz, de actos o hechos que pueden constituir conductas infractoras a la ley electoral durante procesos electorales.
 - Operar el Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJECC) y así garantizar a los partidos políticos y ciudadanía, la transmisión en tiempo real de los reportes de instalación, apertura y cierre de las Mesas y, en su caso, de los incidentes que se pudieran presentar durante la Jornada Consultiva en cada órgano Distrital.
 - Elaborar un estudio de los factores de riesgo por Alcaldía a nivel colonia que se remite a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de solicitar un operativo de apoyo en aquellas zonas con mayor incidencia delictiva y otros factores de riesgo para el día de la Jornada Electoral.
 - Prever la obtención y distribución del mobiliario para equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión (en los procesos de participación ciudadana), minimizando y optimizando costos.
 - Concentrar las propuestas de las 33 Direcciones Distritales, sobre los lugares para instalar las Mesas Receptoras de Opinión (en los procesos de participación ciudadana), con el fin de unificar criterios de accesibilidad, seguridad e instalación en lugares no prohibidos en ley.

- Durante la jornada electiva en los ejercicios de participación ciudadana, coordina entre las 33 Direcciones Distritales el flujo de información en tiempo real de:
 - ✓ Asistencia del personal adscrito a los Órganos Desconcentrados.
 - ✓ Instalación de las MRVyO.
 - ✓ Apertura de las MRVyO.
 - ✓ Cierre de las MRVyO.
 - ✓ Incidentes presentados.
- 2. Funge como área concentradora de recursos económicos y materiales y con el fin de no distraer las actividades sustantivas de las 33 Direcciones Distritales:
 - Diagnostica objetivamente las necesidades de cada Dirección Distrital y prevé su factibilidad, viabilidad y racionalidad en el anteproyecto de presupuesto, presupuestando lo realmente necesario para su operación y funcionamiento;
 - Gestionó ante la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la sanitización de los inmuebles en que se instalaron las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, centralizando la estrategia a fin de que las Direcciones Distritales garantizaran a la ciudadanía y a las personas representantes de los partidos político su derecho a votar sin exponer su salud, derivado de la pandemia COVID-19.

ACTIVIDADES ORDINARIAS

1. *Integración de Órganos Desconcentrados.* Permanentemente supervisa y verifica su debida integración y formula propuestas de encargadurías y/o comisiones, considerando perfiles y necesidades específicas.
2. *Requerimientos de Órganos Desconcentrados.* Se da seguimiento a las diversas necesidades de las Direcciones Distritales, referentes a mantenimiento, adecuaciones, y servicios correctivos de las sedes distritales, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos.
3. *Detección y gestión de elementos e insumos, requeridos por los Órganos Desconcentrados.* Se analizan sus necesidades a partir de requerimientos de mobiliario, equipo de oficina, artículos de papelería e insumos sanitarios, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos.
4. *Visitas de supervisión de las áreas centrales a los Órganos Desconcentrados.* Se verifica el cumplimiento por parte de los Órganos Desconcentrados, de las actividades ordinarias y, en su caso, de participación ciudadana, mediante la supervisión de los archivos documentales y/o electrónicos respectivos, así como las condiciones de los inmuebles y mobiliario. También, supervisar que los Órganos Desconcentrados cuenten con el soporte documental de las actividades realizadas y verificar el espacio que ocupa el archivo distrital y las necesidades de mantenimiento.

Las anteriores razones son suficientes para **invalidar** las disposiciones por las que se elimina la UTVOE y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del IECM.

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO (UTCfyD).

La absorción de las funciones de las actividades de la UTCFyD a la Secretaría Administrativa es de todos los cambios de la reforma, el más imperfecto no solo en cuanto a su diagnóstico, sino en cuanto a su eficacia en el desarrollo de las funciones.

El actual Centro de Formación y Desarrollo realiza una de las actividades constitucionales que dota de profesionalismo al ejercicio de la función electoral y que es el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V, apartado D de la CPEUM, comprende: la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de las personas servidoras públicas de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los **organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral**.

Esta actividad es sustantiva en el ejercicio de la función electoral del IECM, pues estas personas se encargan de dar certeza, legalidad, transparencia a cada una de las etapas del proceso electoral y ejercicios de participación ciudadana.

Por ello, el órgano que se encargue de hacer efectivo el SPEN, debe ser altamente profesional y especializado.

La UTCFyD, conforme al CIPE vigente hasta antes de esta reforma, tiene las siguientes atribuciones:

- La selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, cambios de adscripción, rotación, permanencia, incentivos y disciplina de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;
- El Ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, promoción e incentivos del personal de la Rama Administrativa;
- La Capacitación a las Consejeras y los Consejeros Electorales Distritales;
- Aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás normativa relacionada en el Servicio Profesional y la Rama Administrativa del Instituto Electoral;
- Organizar la realización de foros, conferencias, talleres, congresos y otros eventos académicos en materia de administración y desarrollo de personal que puedan coadyuvar a la mejora del Servicio Profesional y de la Rama Administrativa del Instituto Electoral;
- Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana

En tanto que, la Secretaría Administrativa del IECM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del CIPE es el órgano ejecutivo que tiene a su cargo la **administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral**. Es el responsable de su patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y eficiente uso de los bienes muebles e inmuebles.

Lo cual significa que personal especializado en la administración de recursos humanos, financieros y materiales del IECM, ahora se encargará de capacitar a las personas Consejeras de los órganos distritales para ejercer sus funciones de organización electoral, que son, entre las más importantes (artículos 126 a 130 del CIPE):

- Acreditar a los ciudadanos mexicanos que hayan presentado su solicitud, para participar como observadores durante el proceso electoral;
- Recibir las solicitudes de registro de las fórmulas de las y los candidatos a Diputados de mayoría, Alcaldías, Concejales y resolver sobre su otorgamiento;
- Determinar el número y ubicación de casillas;
- Aprobar las secciones electorales dentro de su Distrito Electoral para instalar Casillas Especiales;
- Supervisar el procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla y su capacitación; así como vigilar que las Mesas Directivas de Casilla se instalen el día de la jornada electoral;
- Registrar los nombramientos de los representantes de casilla y generales que los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido acrediten para la jornada electoral;
- Ordenar la entrega de la documentación y materiales electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, para el debido cumplimiento de sus funciones;
- Aprobar la integración de las Comisiones de Consejeros Distritales que sean necesarias para el seguimiento de la jornada electoral, durante la sesión del Consejo Distrital;
- Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldes y Concejales;
- Efectuar el cómputo de la elección de diputaciones de mayoría, declarar la validez de la elección y entregar la constancia correspondiente a la fórmula de candidatos que haya obtenido el mayor número de votos;
- Realizar el cómputo distrital de la votación recibida en las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Alcaldías, Concejales y de las y los Diputados de representación proporcional; así como la asignación de las concejalías de representación proporcional;
- Dar cuenta inmediatamente al titular de la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de las elecciones, el resultado los cómputos correspondientes a su Distrito Electoral y la entrega de las constancias de mayoría;

- Mantener en custodia la documentación de las elecciones de Jefe de Gobierno, Alcalde, Concejales y Diputados al Congreso de la Ciudad de México por ambos principios, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;
- Enviar de manera inmediata, al titular de la Secretaría Ejecutiva copia certificada de las actas de cómputo distrital de las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados y Concejales de representación proporcional;
- Informar inmediatamente al titular de la Secretaría Ejecutiva, sobre los medios de impugnación interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Distrital; y
- Remitir al Tribunal Electoral el expediente integrado con motivo de los medios de impugnación que se interpongan contra actos y resoluciones del Consejo Distrital

De lo anterior se desprende que personal especializado en actividades financieras y de recursos humanos, tendrán la encomienda de **capacitar** a quienes organizan elecciones y tienen encomendadas actividades fundamentales para la certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia y máxima publicidad de la contienda electorales y para garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, labores que de hacerse mal, ponen no solo en riesgo la legitimidad de la autoridad electoral, sino de la democracia y la función electoral en la Ciudad de México; razones suficientes para **invalidar** las disposiciones por las que se elimina la UTCyD y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Administrativa del IECM.

Todo lo anterior, implica una vulneración a la autonomía de funcionamiento del IECM, al sobrecargar de funciones a menos personal, lo cual es una violación directa a los artículos 14, 16, 41, 116 y 122 de la CPEM, y por ello deben **invalidarse**.

Finalmente y como se ha desarrollado y señalado las violaciones a las reformas realizadas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, no tomo las bases, directrices para realizar la reforma y violentó la autonomía con la que goza el Instituto Electoral de la Ciudad de México conductas contrarias a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza de la siguiente forma:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Dicho precepto dispone que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y que los órganos de menor jerarquía cualquiera que fuera el ámbito de competencia deben ajustar sus actuaciones a las disposiciones que sean contrarias a la misma, es el caso que el poder constituyente dispuso que la naturaleza de los organismos autónomos sería el tener la facultad de auto organización, los dotó de **autonomía de funcionamiento**, pues esta

facultad es natural e intrínseca a los órganos constitucionales autónomos y los hace independientes de los demás poderes de la unión.

Del artículo 133, se colige que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma Suprema de la Unión que contiene los principios y bases torales para los órganos cualquiera que fuera su ámbito sean tomados en cuenta, y confluir en armonía dentro de una sociedad, criterios respaldados en las siguientes:

Tesis Aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. XII/2006 que establece: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA".

Amparo en revisión 120/2002: LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Y, TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

Los respaldos previamente señalados no fueron atendibles por el congreso de la Ciudad de México porque lo dispuesto en la Constitución Federal dispone los parámetros y bases para que el órgano constituido en ejercicio de su facultad de autoconfiguración ajuste su actuar a la norma de mayor jerarquía constitucional y en el caso se respete la autonomía del órgano electoral en la Ciudad de México lo cual no aconteció es por ello que el máximo órgano jurisdiccional del país debe enderezar las conductas de los poderes constituidos en el país para con ello cumplir con el Pacto Federal.

OCTAVO. LO CONSTITUYE EL DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C),

D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constitucionales y legales.

El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 14; 116, Fracciones II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad, irretroactividad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establece:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...
II. ...

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán

observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

...

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 46

Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

...

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

...

El contenido del Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, no es acorde a lo regulado en los preceptos constitucionales antes invocados, normatividad constitucional que, conforme interpretación sistemática y funcional se desprende que el **Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano autónomo**, a quien, en buena lógica jurídica se le debe considerar como una entidad de interés público, que tienen un **régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento**, facultad concedida directamente por las Constituciones Federal y Local, así como en la legislación secundaria emanada de ellas.

Bajo estas premisas, dada la especialidad de las funciones el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que, entre otras cosas, tiene el deber garante de **incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, las actividades institucionales, así como los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos**, propuestas que deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos que establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables; situación que a todas luces se deja de atender en el Decreto que se demanda su invalidez.

Conforme a lo anterior, Instituto Electoral de la Ciudad de México en el ejercicio de su autonomía propia en su funcionamiento, el 15 de enero del año 2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 83, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que le impone la obligación de *"Someter a la aprobación del Consejo General, en la primera quincena de enero de cada año, las propuestas del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México en el Decreto correspondiente"*, emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022", identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, documento que se encuentra disponible en la página de internet <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-015-2022.pdf>, en el que se estableció:

Antecedentes:

...

XXVI. En sesión del 15 de diciembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, autorizando al Instituto Electoral un presupuesto de \$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil, seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), el cual representa una reducción del 38% del presupuesto solicitado, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2021.

...

Acuerda:

PRIMERO. Se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos de los documentos que como anexo forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se aprueba el ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en términos de los documentos que como anexo forman parte del presente Acuerdo y que asciende a la cantidad de \$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Conforme a lo anterior, es por demás evidente que el Congreso de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal del 2022, le autorizó al Instituto Electoral de la Ciudad de México la cantidad de \$1,201,084,647.00, importe del cual, para ejercerlo, necesariamente se deben cumplir dos premisas fundamentales que a saber son:

- ❖ Congreso de la Ciudad de México, **si y solo si**, debe entregarlo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y
- ❖ En Instituto Electoral de la Ciudad de México, **si y solo si**, debe ejercerlo exclusivamente en los términos que fue etiquetado, conforme al ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado en el acuerdo identificado con el numero IECM/ACU-CG-015/2022.

Con base en estas circunstancias, lo establecido en los artículos transitorios SEGUNDO y CUARTO del Decreto que se impugna, en los que se determina que su vigencia es a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fecha en la que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública, a todas luces es inconstitucional.

Lo anterior en virtud de que, pues con el pretexto de una austeridad ahorrativa, además de trastocar el régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento que goza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también, **viola flagrantemente le principio jurídico de irretroactividad de la aplicación de la ley**, el cual se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma, lo que en buena lógica jurídica también se traduce en

las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo, toda vez que la seguridad jurídica de los actos de aplicación de las normas, es que se sus efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor.

Lo anterior, en virtud de que, es claro que el Decreto que se demanda su invalidez, no guarda conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera puntual establece que *“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”* pues, en franca violación a dicha disposición constitucional, pretende que, con la publicación del Decreto que se impugna en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se deje de atender lo proyectado y presupuestado el Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado en el acuerdo identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, emitido y aportado el 15 de enero del año 2022, fecha anterior al proceso legislativo del Decreto que se demanda su invalidez.

Bajo esta perspectiva, es indudable que el Decreto en comento es inconstitucional, pues, pretende que se aplique al contenido del alfanumérico IECM/ACU-CG-015/2022, instrumento jurídico que fue emitido y aprobado con mucho tiempo de anticipación al acto que se impugna, situación que, ante la aplicación del buen derecho, a todas luces se lesiona gravemente las formalidades esenciales que rigen el debido proceso y principalmente el principio jurídico de irretroactividad de la aplicación de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es así, en virtud de que, en el acuerdo identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, para el ejercicio fiscal 2022, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, proyectó una gran variedad de actividades institucionales etiquetando en cada una de ellas el costo correspondiente, programando la ejecución de cada una de ellas a través de los recursos humanos con que se contó desde el inicio del ejercicio fiscal 2022, personal que respetando, observando y acatando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad contribuyen de manera idónea con el ejercicio de la función electoral a cargo del referido instituto.

En este orden de ideas, las actividades institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tienen estrecha relación con el ejercicio del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, presupuestado mediante acuerdo identificado con la clave IECM/ACU-CG-015/2022, **ejercicio del gasto que fue etiquetado** de manera general cada área del instituto y de manera particular para las cada una de las actividades de proyectadas por cada una de esas áreas, incluyendo las conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, que ordena desaparecer el decreto que se demanda su invalidez; premisas que dejan de atenderse con la emisión del Decreto que se impugna, pues, en perjuicio al principio jurídico de irretroactividad de la aplicación de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Carta Magna, pretende que se aplique a un documento emitido con mucho tiempo con anterioridad.

Con base en esta cadena argumentativa, es indiscutible que, el Decreto que se impugna, a todas luces es inconstitucional, pues, trastoca de manera grave el

derecho humano de irretroactividad de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Constitución Federal, principio jurídico pretende o sustenta estabilidad al ordenamiento jurídico, también, contribuye a establecer la seguridad jurídica, pues, permite que las personas puedan tener confianza en las leyes vigentes y celebren sus acuerdos y negocios en base a ellas, eliminando la incertidumbre que generaría una posible variación de la legislación respecto a hechos ya realizados y que ya no pueden ser cambiados o eliminados.

NOVENO. LO CONSTITUYE EL DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PARRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constituciones y legales, dado que se atenda de manera directa con la función electoral que se ejerce a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 14; 16; 41, Base V, apartado C; y 116,

Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establecen:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 41. ...

...
V. *La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.*

...
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. Educación cívica;*
- 3. Preparación de la jornada electoral;*
- 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
- 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
- 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
- 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*
- 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
- 11. Las que determine la ley.*

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;*

- b) *Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o*
- c) *Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.*

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

II. ...

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

...

IV. *De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:*

- a) *Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;*

- b) *En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;*
- c) *Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:*
...
- p) *Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.*
...

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 46

Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

- ...
- e) *Instituto Electoral de la Ciudad de México;*
- ...

Artículo 50

Instituto Electoral de la Ciudad de México

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.

3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.

El contenido del Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, no es acorde a lo regulado en los preceptos constitucionales antes invocados, de los cuales, en una interpretación sistemática y funcional se desprende que el Instituto Electoral de la Ciudad de México **es un órgano con autonomía propia en su funcionamiento** que tiene el deber garante de organizar las elecciones, ejercer la función estatal de realizar las elecciones de candidatos a cargos de elección popular, junto con el Instituto Nacional Electoral, así como que, constitucionalmente se determina, tiene a su cargo el garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, realizar la preparación de la jornada electoral, organizar la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, realizar los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, emitir las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, realizar el cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo en la Ciudad de México, emitir resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, organizar, desarrollar, computar y emitir la declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana.

En general, contrario a lo que se determina en el decreto que se impugna, el instituto electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo en su funcionamiento, constitucionalmente tiene a su cargo la planeación, sustanciación, realización y ejecución de las elecciones de los cargos de jefatura de gobierno, diputaciones locales, titulares de las alcaldías y concejales, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México, que se realizan a través del método de sufragio universal, libre, secreto y directo; bajo esas circunstancias, dicho órgano electoral administrativo, tiene la obligación garante de ejercer su función electoral, observando y respetando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, todo esto para garantizar el derecho y la tutela de los derechos y obligaciones contenidas en el artículo 35 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

En este sentido, se reitera que, el Decreto que se impugna, deja de considerar que, de conformidad a lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, apartado A, inciso e), de la Constitución Política de la Ciudad de México, **el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano autónomo**, por lo que, en buena lógica jurídica se le debe considerar como una entidad de interés público, que tienen un **régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento**, facultad concedida directamente por las Constituciones Federal y Local, así como en la legislación secundaria emanada de ellas, característica que también es reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a través del siguiente criterio de tesis jurisprudencial.

INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL.- Desde un punto de vista técnico jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, no meramente de la administración pública sino del Estado. Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público; en este sentido, en virtud de que la autonomía constitucional contemplada en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, que se confiere a un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro de la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, en términos de

los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los numerales 1o., 2o. y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni tampoco dependiente del Ejecutivo del Estado de Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, si bien puede haber organismos descentralizados (de la administración pública federal o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que no sean descentralizados, aunque formalmente no se les califique de esta última manera. Ello es así porque, en términos generales, la descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central para conferirlos a un organismo o autoridad de competencia específica o menos general. En el caso de organismos públicos autónomos electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 1990, ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de las elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al resultado de la reforma de 1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, así como a lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha entidad federativa corresponde al organismo público autónomo e independiente, denominado Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de la administración pública) sólo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Puebla (como también hipotéticamente podría ocurrir con otros organismos constitucionales públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley) **se faculta a sus órganos internos legalmente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos**, dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública federal o de cierta entidad federativa compete al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o disciplinaria, **para evitar cualquier injerencia gubernamental, que eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.**

Conforme a lo anterior, lo determinado en el Decreto que se demanda su invalidez, atenta directamente con la autonomía propia en el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues debilita de manera considerable la función electoral que se ejerce a través de todo el personal que integran todas y cada una de las áreas de dicho órgano electoral local, pues, a través de ellas, se realizan las interpretaciones de las disposiciones jurídicas que regulan su vida interna del instituto, en relación con el ejercicio de la función electoral, que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho en su más amplia y acabada expresión.

Bajo esta perspectiva, con el Decreto que se impugna, trae como consecuencia que se haga nugatorio o se menoscabe el ejercicio de la función electoral de la autoridad

electoral, pues de manera directa atenta con esa autonomía propia en su funcionamiento, establecida por la norma constitucional y con el pretexto de una supuesta autoridad, trastocar la composición del Instituto Electoral de la Ciudad de México, inmiscuyéndose en la vida interna de dicha autoridad electoral, dado que, de un plumazo y sin que exista una planeación adecuada, cambia la estructura orgánica de dicha autoridad electoral, desapareciendo las áreas técnicas conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, acto de autoridad que de manera directa lesiona la función y principios rectores de la norma electoral.

Al realizar una interpretación sistemática y funcional al Decreto del que se solicita su invalidez, es dable concluir que a todas luces es inconstitucional, en virtud de que, en todo momento se deja de ponderar que todas y cada uno de las disposiciones jurídico normativas contenidas en el cúmulo de los artículos que componen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, son el conjunto de normas electorales que rigen la conducta y la vida interna e institucional el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues, con ellas se garantiza que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible, premisas que, junto con los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e interculturalidad rigen la función electoral, disposiciones jurídico normativas que se deben atender a cabalidad por las personas capacitadas para cada actividad de la función electoral, con las cuales se asegura el cumplimiento de las obligaciones, por lo que, cualquier cambio en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como lo es la que se hace en el Decreto que se impugna, por mínima que sea, afecta en un todo la función electoral, tutelada por el conjunto de normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Conforme a lo anterior, es dable concluir que el Decreto que se impugna, deja de hacerse cargo de que la autonomía propia en su funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene la finalidad de que dicho órgano administrativo deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en las normas constitucionales, así como en las leyes secundarias, reglamentos y lineamientos que de ella emanan, siempre una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en el desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos para el mejor ejercicio de la función electoral, siempre en favor de los ciudadanos, premisas que tiene relación directa con el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de la autonomía propia del funcionamiento de la autoridad administrativa electoral, quien tiene a su cargo el garantizar la armonización entre los principios o valores inmersos a libertad de autoorganización, premisas que se desatienden en el asunto que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, es importante destacar que, la emisión del Decreto que se demanda su invalidez, solo es emitido con el pretexto de una austeridad, motivación que a todas luces es contraria a derecho, pues, además de que, no se eliminan las actividades propias de la función electoral que tiene a su cargo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismas que corresponden a las áreas técnicas de

conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, también dichas actividades institucionales relativas a la función electoral de dicho instituto, son incluidas a otras áreas técnicas de la propia autoridad electoral, lo que trae como consecuencia un debilitamiento de dicha institución en el ejercicio de sus funciones, garantes de la función electoral, pues se le obliga a:

- ❖ Disminuir considerablemente sus áreas técnicas operativas, que son necesarias e indispensables para el debido y cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.
- ❖ Disminuir considerablemente el personal profesional capacitado de las áreas técnicas, Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, que desaparece el decreto que se impugna.
- ❖ Disminuir considerablemente el personal profesional capacitado de la Secretaría Ejecutiva, así como de las áreas técnicas, Asociaciones Políticas, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, que ha venido desempeñando sus funciones, para incluir a un disminuido personal de las áreas técnicas mencionadas en el punto inmediato anterior, que desaparece el decreto que se impugna.

En este orden de ideas, es dable colegir que el Decreto que se impugna, carece de todo sustento legal, lo que lo hace que adolezca de la debida fundamentación y motivación, derechos humanos tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo éste un elemento suficiente bastante para determinar su invalidez lisa y llana.

La nula fundamentación y motivación del Decreto que se demanda su invalidez, obedece a que de manera subjetiva se pretende sostener como legal con el falso argumento de que conseguir una racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública; manifestación subjetiva que no se encuentra soportada con un razonamiento jurídico en el que se invoquen las circunstancias de hecho del caso concreto en el que además se invoquen los preceptos constitucionales, legales y/o reglamentarios aplicables al asunto en particular.

Por ende, de manera flagrante, se deja de atender lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que impone la obligación a las autoridades señaladas como responsables a que **en toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo que presente la Jefatura de Gobierno deberá contar con UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México**, razón por la cual, el Congreso de la Ciudad de México, tiene el deber garante de elaborar a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los dictámenes que se consideren necesarios, podrá realizar una valoración del impacto presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto, mismos que se deben realizar con el apoyo de la Unidad de Estudios y

Finanzas Públicas y podrá solicitar opinión a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México sobre el proyecto de dictamen correspondiente; premisas del debido proceso que en el asunto que nos ocupa, no se efectúan.

Bajo estas circunstancias, el Decreto que por esta vía y forma se impugnan, a todas luces, carecen de la debida fundamentación y motivación, pues, como es de verdad sabida y de derecho explorado, toda determinación de autoridad judicial o administrativa no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para emitir su fallo, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, situación que en la especie no sucede, dado que sin razonamiento jurídico y sin fundamento legal alguno se emiten determinaciones, con las que manera directa lesiona la función electoral que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México como órgano autónomo en su funcionamiento y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Así también, como es sabido, la garantía de fundamentación no sólo lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, pues, también obliga a atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, es necesario que se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al particular en estado de indefensión, premisas que en la especie no se cumple, dado que para imponer las excesivas sanciones al partido que se representa lo hace de manera subjetiva sin emitir algún tipo de razonamiento lógico jurídico en el que apoye su determinación; premisas constitucionales que en el asunto que nos ocupa no se cumplen.

Esto es así en virtud de que, el Decreto que se demanda su invalidez, en primera instancia, como se argumentó con anterioridad, viola el principio de irretroactividad en la aplicación de la ley, dado que, con su aplicación, destruye de manera directa lo proyectado, presupuestas y etiquetado en el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022", identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, emitido con mucho tiempo de anticipación al acto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, es decir, el día 15 de enero del año 2022.

Y, en segundo lugar, el Decreto que se impugna, no se encuentra soportado en un estudio emitido por alguna institución profesional y capacitada que pudiera determinar, **cuando menos:**

- ❖ **Si existe o no** un exceso en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien través de sus diversas áreas creadas conforme a la reforma electoral del año 2014, es garante del ejercicio de la función electoral, en beneficio de los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
- ❖ **Si existe o no** la necesidad jurídica de reducir la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creadas conforme a la reforma electoral del año 2014.
- ❖ **En su caso**, que se indique de forma clara y puntual la necesidad de reducir la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estableciendo de manera cuantitativa y cualitativa, las modificaciones estructurales y presupuestarias que deban hacerse sin que se ponga en riesgo el ejercicio de la función electoral y se siga garantizando la tutela de los derechos humanos político electorales de los ciudadanos protegidos por el artículo 35, de la Carta Magna.

En este sentido, Decreto que se impugna, al no encontrarse soportado en un estudio como el que se comenta y que solamente se intenta sostener con el falso argumento de que conseguir una racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública y sin que se emita algún razonamiento jurídico en el que se invoquen las circunstancias de hecho del caso concreto en el que además se invoquen los preceptos constitucionales, legales y/o reglamentarios aplicables al asunto en particular que soporten dicha determinación, es indudable que se deja de cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos constitucionales de los que se deriva la consideración jurídica de que la fundamentación y motivación del acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis o puntos de derecho que se deben analizar, sobre la que se deba pronunciar la autoridad, apoyándose en el o los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que permiten expedir, emitir o realizar los actos de autoridad y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, situación que en la especie no sucede, dado que sin razonamiento jurídico y sin fundamento legal alguno se emiten determinaciones, con las que manera directa lesiona la función electoral que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México como órgano autónomo en su funcionamiento y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos logico-jurídicos sobre él porque considero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Finalmente, de acuerdo con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 2a./J. 57/2001, Novena Época, publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, visible en la página 31, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.", la garantía de fundamentación lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al particular en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

Con base en esta cadena argumentativa, es evidente que, el Decreto que se impugna es inconstitucional, pues, además de ser emitido sin la debida fundamentación y motivación, atenta directamente con la autonomía propia en su funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo que en consecuencia, también, ponen en riesgo el adecuado desarrollo de todas y cada una de las actividades de dicho órgano electoral, pues se ve disminuida su capacidad para la ejecución y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la norma constitucional y legal, y que son enunciadas en los artículos 41, Base V, apartado C; y 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 36 de la Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

DECIMO. LO CONSTITUYE EL DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO

37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constituciones y legales.

El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 41, Base V, apartado C, y 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establecen:

CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El contenido del Decreto del cual se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad,

proporcionalidad, debido proceso y **SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL**, que rigen la materia electoral y que se deben observar y respetar en toda actuación judicial y administrativa; Precepto constitucional que en lo conducente establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Amén de lo que se hace valer en los agravios que anteceden, manifestación que se solicita se tome en cuenta en este acto, como si se insertara a la letra en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, contrario a lo determinado en el Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, en nuestro país, el control de la constitucionalidad es generalmente asociado al juicio de amparo, el cual por sus características especiales se configura como un medio jurídico que simultáneamente limita o impide los abusos del poder y preserva el ordenamiento jurídico. Pensar en realizar algunas consideraciones sobre el control de la constitucionalidad en México, implica retomar algunos conceptos básicos relativos a la Constitución y al significado de la defensa de la constitucionalidad.

En un análisis a través de la historia del derecho, nos permitiría descubrir desde sus inicios, los intentos de encontrar medios que permitan controlar el ejercicio del poder, ya que desde tiempos remotos es un hecho conocido que quien detenta el poder, tiende a abusar de él y a desconocer y violar los derechos de aquellos que se encuentran sujetos a su potestad y crear.

Independientemente de intentos aislados de establecer por medio de instituciones jurídicas el control de dicha posibilidad, podemos decir que actualmente el control del ejercicio del poder cuenta con tres supuestos básicos, El primero de ellos es la existencia de un ordenamiento jurídico organizado jerárquicamente en cuya cúspide se encuentra la Constitución como norma suprema que determina los procesos de creación y validez del resto del ordenamiento jurídico, con el cual, se tiene la función configurarse no solamente como norma organizadora del ejercicio del poder y de la vida en sociedad y como garante de derechos fundamentales, sino también como límite del ejercicio del poder, en su cualidad de norma que establece sistemas de control del ejercicio del poder.

El segundo supuesto resulta de la teoría clásica de la división de poderes elaborada por Montesquieu, que pretende lograr un equilibrio y balance del ejercicio del poder mediante su división y repartición entre los tres órganos que realizan las funciones del Estado. Esta teoría, no logra su cometido a menos que se contemple como una distribución funcional, controlable por medios jurídicos que impidan la invasión de esferas competenciales o la realización de actos de autoridad en ausencia de, o excediéndose en el ejercicio de sus facultades.

Y el tercer supuesto, de gran relevancia principalmente para el amparo, es el reconocimiento por los Estados modernos de los derechos fundamentales de los individuos, derechos oponibles frente a la actuación del Estado, que podrían considerarse inherentes a la persona humana en virtud de su dignidad y autonomía

personal. Sin embargo, debe mediar el reconocimiento y tutela de dichos derechos para poder hacerlos exigibles frente a la actividad del Estado.

Es innegable, que el reconocimiento por sí mismo no se convierte en garantía del ejercicio de dichos derechos, ni para impedir los abusos de autoridad. Por ello, deben articularse en el ordenamiento jurídico medios de protección de dichos derechos, que por ser fundamentales y estar contenidos en la Constitución, los convierten en garantías del orden constitucional al mismo tiempo.

Es fundamental que en todo Gobierno que se autodefinen como un estado de Derecho, si un ordenamiento tiene pretensiones de validez sistemática, debe procurar evitar la aplicación de normas que atentan contra la norma suprema y el orden jurídico mismo, como lo es en el asunto que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, en la especie, el Decreto que se demanda su invalidez, de manera flagrante viola el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna, en virtud de que, su contenido, no es acorde a lo regulado en los artículos artículo 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 41, Base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

EL DECRETO DEL QUE SE DEMANDA SU INAPLICACIÓN A TODAS LUCES CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INVOCADAS, LO QUE A TODAS LUCES GENERA UNA VIOLACIÓN A DICHAS NORMAS Y AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL TUTELADO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE **ARTÍCULO 133.- ESTA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA Y TODOS LOS TRATADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA MISMA, CELEBRADOS Y QUE SE CELEBREN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON APROBACIÓN DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN. LOS JUECES DE CADA ESTADO SE ARREGLARÁN A DICHA CONSTITUCIÓN, LEYES Y TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPOSICIONES EN CONTRARIO QUE PUEDA HABER EN LAS CONSTITUCIONES O LEYES DE LOS ESTADOS."**

DEL PRECEPTO ANTES INVOCADO SE DESPRENDE QUE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, CONSISTE EN QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, ASÍ COMO LOS TRATADOS SUSCRITOS POR MÉXICO CON OTROS PAÍSES, DEBEN CEÑIRSE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PRINCIPIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE POSTULA, ORIGINALMENTE, UBICAR A LA CONSTITUCIÓN EN PARTICULAR EN UN PELDAÑO JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE TODAS LAS DEMÁS NORMAS JURÍDICAS, INTERNAS Y EXTERNAS, QUE PUEDAN LLEGAR A REGIR EN ESE PAÍS; PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE DEJO DE ATENDERSE EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA.

EN LA ESPECIE, NO DEBE PASAR POR DESAPERCIBIDO QUE, EL HECHO DE QUE NUESTRA CARTA MAGNA SE DIVIDE EN DOS

PARTES, UNA DOGMÁTICA Y UNA ORGÁNICA, ENTENDIÉNDOSE LA PRIMERA CON EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA TIENE COMO FINALIDAD ORGANIZAR EL PODER PÚBLICO, PARA QUE EL ESTADO Y AUTORIDADES NO PUEDAN EJERCITAR UN PODER SIN LÍMITES SOBRE LAS LEYES E INDIVIDUOS, ES PRECISO QUE SE ENCUENTRE CIRCUNSCRITO A UN SISTEMA DE COMPETENCIAS, Y ASÍ EVITAR EL ABUSO DEL PODER.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE APRECIA QUE SE PREVEN DIVERSOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ENTRE ELLOS EL DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL DE JERARQUÍA NORMATIVA, QUE SON DE GRAN IMPORTANCIA EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO POSITIVO MEXICANO, YA QUE LA EXPRESIÓN LITERAL DEL TEXTO AUTORIZA A PENSAR A PRIMERA VISTA QUE NO ES SÓLO LA CONSTITUCIÓN COMO LEY SUPREMA, SINO TAMBIÉN LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS TRATADOS, REGULACIÓN QUE DEBE SER ACORDE Y DESPRENDERSE DE PROPIO TEXTO QUE LA CONSTITUCIÓN QUIEN ES SUPERIOR A LAS LEYES FEDERALES, PORQUE ÉSTAS PARA FORMAR PARTE DE LA LEY SUPREMA DEBEN "EMANAR" DE AQUÉLLA, ESTO ES, DEBEN TENER SU FUENTE EN LA CONSTITUCIÓN, QUE NECESITAN "ESTAR DE ACUERDO" CON LA CONSTITUCIÓN, SITUACIÓN QUE NO SUCEDE EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, DADO QUE EL DECRETO DEL QUE SE DEMANDA A TODAS LUCES VIOLA PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL TUTELADO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE, EL DECRETO QUE SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL PRESENTE MEDIO DE DEFENSA LEGAL, NO ES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIONES II Y IV, INCISOS A), B), C) Y P); Y 41, BASE V, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 46, APARTADO A, INCISO E) Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES, DE LOS QUE SE DESPRENDE QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO ÓRGANO CON AUTONOMÍA PROPIA EN SU FUNCIONAMIENTO, TIENE EL DEBER GARANTE DE ORGANIZAR LAS EJERCER LA FUNCIÓN ESTATAL DE REALIZAR LAS ELECCIONES DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, JUNTO CON INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO QUE, CONSTITUCIONALMENTE SE DETERMINA QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TIENE A SU CARGO EL GARANTIZAR LOS DERECHO Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS DE LOS CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS, EDUCACIÓN CÍVICA, REALIZAR LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL, ORGANIZAR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES ELECTORALES, REALIZAR LOS ESCRUTINIOS Y CÓMPUTOS EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY, EMITIR LAS DECLARACIONES DE VALIDEZ Y EL

OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS EN LAS ELECCIONES LOCALES, REALIZAR LOS CÁLCULO DE LA ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITIR RESULTADOS PRELIMINARES; ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN; OBSERVACIÓN ELECTORAL, Y CONTEOS RÁPIDOS, ORGANIZAR, DESARROLLAR, COMPUTAR Y EMITIR LA DECLARACIÓN DE RESULTADOS EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EN GENERAL, EL DECRETO QUE SE IMPUGNA, OLVIDA POR COMPLETO QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO ÓRGANO AUTÓNOMO EN SU FUNCIONAMIENTO, CONSTITUCIONALMENTE TIENE A SU CARGO LA PLANEACIÓN, SUSTANCIACIÓN, REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS CARGOS DE JEFATURA DE GOBIERNO, DIPUTACIONES LOCALES, TITULARES DE LAS ALCAIDÍAS Y CONCEJALES, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD, QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL MÉTODO DE SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO; BAJO ESAS CIRCUNSTANCIAS, DICHO ÓRGANO ELECTORAL ADMINISTRATIVO, TIENE LA OBLIGACIÓN GARANTE DE EJERCER SU FUNCIÓN ELECTORAL, OBSERVANDO Y RESPETANDO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD, TODO ESTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO Y LA TUTELA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

BAJO ESTAS PREMISAS, EL DECRETO QUE SE IMPUGNA, A TODAS LUCES VIOLA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, TUTELADO POR EL ARTICULO 133, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN VIRTUD DE QUE, DE MANERA FLAGRANTE:

- ❖ DESCONOCE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONCEDIDAS POR LA NORMA CONSTITUCIONAL TANTO FEDERAL COMO LOCAL.
- ❖ DESCONOCE QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES UNA ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO, QUE TIENEN UN RÉGIMEN ESPECIAL Y AUTONOMÍA PROPIA EN SU FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICA CONCEDIDA POR LA NORMA CONSTITUCIONAL TANTO FEDERAL COMO LOCAL.
- ❖ INVADIR Y DESCONOCE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORGANIZARSE DE MANERA INTERNAMENTE PARA CUBRIR CON SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL RELATIVA AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL.

En este orden de ideas, como es de verdad sabido y de derecho explorado, el principio de supremacía constitucional es medio por el cual se dispone que la Constitución es la ley suprema, es la norma cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las instituciones

y el ideario de un pueblo, por ello, es dable arribar a la conclusión de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma básica, fundamental y la base de todo el ordenamiento jurídico, por consiguiente, cualquier norma que contenga disposiciones que la contradigan no debe existir, premisas de legalidad y de certeza jurídica que en todo momento se dejan de observar al momento de emitir y publicar el Decreto del que se demanda su invalidez lisa y llana.

Por su parte Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona en su obra titulada "Derecho Constitucional Mexicano y Comparado", 2ª ed. México, editorial Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. p. 68 sostienen que el principio de supremacía constitucional descansa en la idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el punto más elevado de éste, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en general.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

En este sentido, como es sabido, el término supremacía proviene de la raíz inglesa *supremacy*, que significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, por lo que el principio "*supremacía constitucional*" se refiere a que la Constitución es jerárquicamente superior a cualquier otra norma de orden jurídico, por ello, **la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, conforme a lo establecido en su artículo 133, es la Ley Suprema, y **está situada por encima de las demás normas jurídicas del país** y de los tratados internacionales celebrados con otros países; premisas de legalidad y de certeza jurídica que en todo momento se dejan de observar al momento de emitir y publicar el decreto del que se demanda su invalidez lisa y llana.

Bajo esta premisa, una de las consecuencias más importantes del principio de supremacía constitucional es que **todas las normas, lineamientos de nuestro país deben ser acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que si una disposición de una ley es contraria a lo establecido por la Carta Magna**, como lo es el DICTAMEN QUE PRESENTA LA

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo establecido en la Constitución Federal, debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica; en virtud de que es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, además de que una de las características de la normativa de la Constitución Federal es que constituye el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico, por lo que la supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la Constitución; Sobre el particular, son aplicables las siguientes tesis y jurisprudencias de observancia general emitidas por esta H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN DECLARARLA, CUANDO LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES INTERPRETEN PRECEPTOS LEGALES QUE RESULTEN CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.- De lo dispuesto en el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al conocer de planteamientos de inconstitucionalidad e inconveniencia de preceptos legales aplicados a situaciones concretas, tienen la facultad de inaplicarlos cuando contravengan la Norma Fundamental o un tratado internacional, y sus resoluciones se limitarán al caso específico. En este contexto, en el supuesto de que una autoridad jurisdiccional electoral estatal realice la interpretación de una norma jurídica local y determine que excede los límites constitucionales o convencionales, y tal circunstancia se exponga ante las referidas Salas en un medio de impugnación federal, éstas después de analizar la disposición legal en comento, a efecto de apreciar si existe dicha contravención constitucional o convencional establecida por el tribunal local, deberán declarar, en su caso, la inaplicación de la porción normativa en cuestión.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Tercera Época:

VIII. EFECTOS DE LA SENTENCIA, CORRECCIÓN DE ERRORES Y SUPLENIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

De ser necesario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita que en su caso, se corrijan los posibles errores que se adviertan en la cita de los preceptos invocados y se supla la deficiencia de los conceptos de invalidez, pues el fin que se persigue al promover la presente acción, es proteger el orden jurídico constitucional y su supremacía en el Sistema Jurídico Mexicano, en atención a la Jurisprudencia correspondiente a la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, agosto de 2006. Página 1157. Tesis: P./J. 96/2006. Jurisprudencia. Materia (s): Constitucional, inscrita bajo el rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTO DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS."

Por todo lo expuesto es que se solicita a esa H. Suprema de Justicia de la Nación declarar la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, se adicionan y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de junio de 2022, y se reconozca la autonomía del Instituto de la Ciudad de México para poder determinar su estructura orgánica, funcionamiento, operatividad, unidades, áreas y cualquier otra determinación subsumida dentro de los parámetros constitucionales de autonomía.

IX. SUSPENSIÓN

Se solicita a sus Señorías el otorgamiento de la suspensión para que los efectos y consecuencias de las normas cuya invalidez se demanda no puedan parar perjuicio en los diversos ámbitos y sujetos regulados. Esto, bajo la consideración de que la vigencia plena de las normas impugnadas conllevaría consecuencias materiales perniciosas de muy difícil o inclusive imposible reparación.

A modo más concreto, se solicita la suspensión a efecto de que:

- El Consejo General se abstenga de adecuar su estructura orgánica y funcional, y continúe realizando sus actividades conforme a las funciones, atribuciones y estructura previstas en el marco legal, previo a la reforma reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
- No se realice ningún movimiento a la estructura orgánica y funcional del instituto que pueda afectar derechos laborales de las personas que integran la plantilla de las áreas afectadas³⁸.

Lo anterior, hasta en tanto este Tribunal Pleno se pronuncie en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Ahora bien, el artículo 64 de la Ley Reglamentaria establece que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma

³⁸Artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.

cuestionada, en el caso no se solicita la suspensión de la norma, sino de sus efectos y consecuencias, que se traducirán en actos concretos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Para efectos del análisis de la suspensión que aquí se solicita, en primer lugar resulta oportuno precisar que el artículo 1o. Constitucional establece lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Del numeral transcrito se desprende que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, considerando lo dispuesto en el artículo 1º Constitucional, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Reclamaciones 32/2016, 91/2018, 92/2018 y 95/2018 interpretó el artículo 64, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria en el sentido de que **sí es procedente conceder la suspensión en caso de que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, y que, por tanto, la prohibición prevista en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria no es irrestricta ni indiscriminada.**

Ello, en la medida en la que podían existir casos en los que era latente que la aplicación de la norma secundaria podía conducir a la vulneración clara de un

derecho humano. Por tanto, la interpretación más favorable del último párrafo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria —conforme al propio texto constitucional— llevaba a sostener como excepción a la operatividad de dicha prohibición, que cuando la controversia se plantee sobre normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión de un derecho humano, sí era factible conceder la suspensión.

Esto es, en concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, según lo señalado por la SCJN, es viable que únicamente cuando se controviertan normas generales que impliquen o puedan implicar la transgresión definitiva de derechos fundamentales, resulte procedente conceder la suspensión solicitada.

En ese mismo sentido, en el recurso de reclamación 91/2018, derivado de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, el Máximo Tribunal otorgó la suspensión al considerar que el juicio podría quedar sin materia, por lo cual concedió la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de dos mil diecinueve, no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia.

Así, la Corte ya ha reconocido en la medida suspensiva en controversia y en acción de inconstitucionalidad no solamente un carácter cautelar sino también uno tutelar para prevenir un daño trascendente que se pueda ocasionar no solo a las partes sino también a la sociedad en general.³⁹

Habiendo precisado lo anterior, a continuación, se expone porqué en el caso resulta procedente se otorgue la suspensión.

Para ello, en primer lugar resulta oportuno precisar que, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha precisado, en primer lugar, que tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente; y, en segundo lugar, que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia P./J. 27/2008 de rubro "*SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES*".

En ese sentido, la suspensión en el caso resulta procedente pues es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que, de continuarse con la adecuación de estructura orgánica y funcional del IECM se pondrían en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano y se afectaría gravemente los derechos de los servidores públicos y de manera correlativa a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que podría llevar la vigencia de la norma.

Además, el peligro en la demora en un asunto como el presente, conlleva:

³⁹ Esto, desde luego, encuentra base en el siguiente precedente seminal: SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Marzo de 2008; Pág. 1472. P./J. 27/2008.

- a. La posible frustración de los derechos de los sujetos de las normas impugnadas, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.
- b. La convalidación de flagrantes violaciones de principios constitucionales de primer orden, como los de división de poderes, la autonomía institucional, entre otros.
- c. La transgresión en la autonomía de los poderes.
- d. La pérdida en capital humano altamente calificado derivado de un cambio en la estructura funcional y, por consecuencia, la afectación a las condiciones laborales.

Así, en caso de negar la medida cautelar conllevaría que la violación quedara consumada de manera irreparable.

Adicionalmente, la suspensión resulta procedente al estar frente a un acto que incide en las precondiciones de autonomía del órgano constitucional autónomo, como lo es su operación orgánica y funcional, pues dicha garantía resulta necesaria para alejar al IECM de las presiones que ejercen otros poderes y así contar con las condiciones para una autonomía genuina de los órganos que ejercen competencias especializadas.

Así, en el caso, al tratarse de un órgano constitucional autónomo, debe estimarse que existe una presunción constitucional en favor del otorgamiento de la suspensión, pues la estabilidad laboral del personal especializado conforma una salvaguarda esencial del IECM para ponerlo a salvo de las presiones de los poderes públicos, de los cuales los artículos 116 y 122 los pretendió aislar.

Como consecuencia de lo anterior, la Ministra o Ministro Instructor está en aptitud de analizar los citados elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional de los derechos y principios en pugna. Esto, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si las normas impugnadas y sus efectos son o no constitucionales.

Lo anterior en virtud de que, como se expuso en los conceptos de invalidez, las normas impugnadas ponen en riesgo diversos mandatos constitucionales.

Se insiste, en la especie, de no concederse la medida cautelar solicitada, se pondrían en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano y se afectarían gravemente derechos de los servidores públicos especializados y de manera correlativa a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que podría llevar la vigencia de la norma.

Por lo tanto, con el fin de evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de:

- **Para que el Consejo General se abstenga de adecuar su estructura orgánica y funcional, y continúe realizando sus actividades conforme a las funciones, atribuciones y estructura previstas en el marco legal, previo a la reforma reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.**
- **No se realice ningún movimiento a la estructura orgánica y funcional del instituto que pueda afectar derechos laborales de las personas que integran la plantilla de las áreas afectadas.**

Lo anterior, hasta en tanto este Tribunal Pleno se pronuncie en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Cabe destacar que, con este pronunciamiento no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudieran obtener los promoventes de la acción; por el contrario, de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales, la división de poderes, la autonomía institucional y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles, para la propia esencia constitucional del estado democrático.

X. SUPLENCIA DE LA QUEJA

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la materia, se solicita atentamente a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que se haga efectiva la suplencia en la deficiencia de esta demanda si es que fuere necesario, a efecto de resolver de la mejor manera los vicios de inconstitucionalidad aquí planteados.

IX. P R U E B A S

En términos de lo establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionándolas con los antecedentes y conceptos de invalidez expuestos, ofrecemos los siguientes elementos de prueba:

1.- DOCUMENTAL Consistente en el "DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS

FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO", publicado en la página de internet https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio de 2022, con el número de No. 864 Bis.

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que nos favorezcan, las cuales se relacionan con los antecedentes, conceptos de invalidez y demás circunstancias contenidas en esta demanda.

3.- LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS. En todo lo que favorezcan a las pretensiones de esta acción de inconstitucionalidad.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 a 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes, H. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente se solicita:

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma el presente medio de impugnación y por reconocida la personalidad de quién suscribe

SEGUNDO. Admitir a trámite la presente acción de inconstitucionalidad a través del Ministro Instructor para agotar el procedimiento de Ley.

TERCERO. Tener por designados como representantes comunes a las personas señaladas en el proemio del presente escrito.


CUARTO. Tener por acreditados como delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley a las personas señaladas en el proemio del presente escrito. Asimismo, se solicita acordar que los autorizados de referencia puedan tomar registro fotográfico u obtener copias simples de las actuaciones que se generen en el trámite de la presente acción de inconstitucionalidad

QUINTO. Conceder la suspensión solicitada, en los términos solicitados en el capítulo procedente.

SEXTO. Admitir y calificar de legal todas y cada una de las pruebas documentales, que se ofrecen por estar relacionadas con los antecedentes y conceptos de invalidez que se hacen valer.

SÉPTIMO. En su oportunidad y previos los trámites legales, declarar fundados los conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad de las normas cuya invalidez se demanda y, por ende, eliminarlas del orden jurídico mexicano por ser contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROTESTO LO NECESARIO



RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

011616

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 JUL 1 PM 3 51

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón Judicial en (162) fojas
con:

- (2) Certificaciones de registro en (1) foja cada una
- (1) Certificación de archivo en (1) foja.
- Gaceta oficial de la Ciudad de México de fecha (2) de Junio de 2022 en (24) fojas.
- Instrumento Notarial en (26) páginas más (4) fojas más complementarias.
- (3) trasladados.

Eli



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA COLE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Accion de
inconstitucionalidad Nueva

NOMBRE DEL PROMOVENTE:

Partido
Revolucionario Institucional

NÚMERO DE COPIAS:

0

NÚMERO DE ANEXOS:

3

FOLIO:

27536

330595a37f92bf271f6b68cd81b03267642bf9eeb24f917fcb865c3c6b74e1fd

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

330595a37f92bf271f6b68cd81b03267642bf9eeb24f917fcb865c3c6b74e1fd